

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 1-60)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 61-117)

SÍLVIA CARMONA GARIAS

Becaria de proyecto / Becària de projecte

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Universitat Rovira i Virgili

LUCÍA CASADO CASADO

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

MARINA RODRÍGUEZ BEAS

Profesora de Derecho Administrativo / Professora de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. La reforma del Código Penal: novedades en la regulación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. 1.2. Novedades en el ámbito del patrimonio natural y la biodiversidad. A. La nueva Ley de Parques Nacionales. B. La modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 1.3. Novedades en la regulación de los montes. 1.4. Novedades en materia de responsabilidad ambiental. 1.5. La modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 1.6. El problema asociado al proyecto Castor y la adopción de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares. 1.7. Algunas normas reglamentarias destacables. A. El nuevo desarrollo reglamentario de la Ley de Costas. B. Novedades en materia de aguas. C. Novedades en materia de residuos. D. La modificación del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. E. Novedades en materia de producción ecológica. F. La aprobación del Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino. 1.8. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. El impacto de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. A. Actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo. B. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades. C. La modificación de la Ley 6/1988, de 3 de marzo, Forestal de Cataluña. D. Reglas aplicables en materia de evaluación ambiental de planes y programas. 2.2. La modificación del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales. 2.3. La financiación del sistema de transporte público de Cataluña. 2.4. Algunas normas reglamentarias destacables. A. El desarrollo reglamentario de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. B. El Reglamento del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. C. Las entidades colaboradoras de medio ambiente. D. Nueva regulación de las competencias sobre organismos modificados genéticamente. E. La nueva regulación del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña. F. La regulación de las condiciones de reutilización de efluentes producidos en bodegas y almazaras. 2.5. Otras normas de interés. 2.6. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. A. La Estrategia Catalana de Ecodiseño para una Economía Circular y Ecoinnovadora. B. La planificación estratégica de los espacios naturales protegidos de Cataluña. C. El Programa Voluntario de Compensación de Gases de Efecto Invernadero. D. El nuevo Plan de Fomento del Turismo de Naturaleza en los Espacios Protegidos de Cataluña.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

Durante el período objeto de análisis (del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015), a nivel estatal ha proseguido la oleada de reformas legislativas en materia ambiental que viene acompañándonos los últimos años. A la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, y de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, ha seguido ahora la aprobación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y de las leyes de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (Ley 33/2015, de 21 de septiembre, y Ley 21/2015, de 20 de julio, respectivamente), sin olvidar que también se producen algunas modificaciones puntuales en la Ley de Responsabilidad Medioambiental y en la Ley de Calidad del

Aire y Protección de la Atmósfera (a través de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre). También la reforma del Código Penal, acometida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, es de gran importancia en materia ambiental, habida cuenta de que supone la introducción de importantes novedades en la regulación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. Y lo mismo cabe decir del Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares —convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de octubre de 2014—, que hace frente a la problemática asociada al proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, causante de una serie de terremotos en la zona de Castellón.

Asimismo, se han aprobado otras normas con rango de ley con incidencia en la materia. Entre ellas, destacamos la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; la Ley 2/2015, de 25 de marzo, de medidas tributarias urgentes dirigidas a compensar los efectos de las inundaciones en la cuenca del río Ebro; y la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

Como viene siendo habitual, también se han aprobado en estos meses varias normas reglamentarias en ámbitos sectoriales diversos (costas, aguas, residuos, producción ecológica...), muchas de ellas con el carácter de legislación básica en materia de medio ambiente, aunque quizá lo más destacable sea, en materia de costas, la aprobación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas; en materia de aguas, la del Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, y la del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental; y, en materia de residuos, la del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, y la del Real Decreto 710/2015, de 24

de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

En el plano internacional, merecen especial mención el Instrumento de Revocación de la Declaración efectuada por España al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001; el Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo a la creación del "Centro Internacional sobre Reservas de la Biosfera Mediterráneas, dos orillas unidas por su cultura y su naturaleza" como centro de categoría 2 auspiciado por la Unesco, hecho en Barcelona el 5 de abril de 2014; y la entrada en vigor de las Enmiendas de los Anexos II y III del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo, adoptadas en Estambul el 6 de diciembre de 2013 mediante Decisión IG.21/6.

En otro orden de cosas, han vuelto a ponerse de manifiesto en este período los conflictos competenciales entre Estado y comunidades autónomas. Buena prueba de ello son, entre otros, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Cataluña, por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra diversos preceptos del Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares¹; los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Vasco, por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por el Gobierno de Cataluña y por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia²; el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de

¹ Recursos de inconstitucionalidad núm. 7848-2014, contra los artículos 2 y 4, apartados 1 y 3, del Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares; núm. 7874-2014, contra el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, excepto contra su disposición adicional segunda; y núm. 21-2015, contra el Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, respectivamente. Todos ellos admitidos a trámite mediante Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de febrero de 2015 (BOE, núm. 33, de 7 de febrero de 2015).

² Recursos de inconstitucionalidad núm. 264-2015, contra los artículos 4; 5; 7; 92; 98; 102 y 107, apartados 2, 6, 12 y 13; y Anexo I de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; núm. 275-2015, contra el artículo 124 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; núm. 283-2015, contra los artículos 4 y, por conexión, el Anexo I; 5; 6; 7. Dos; 59.3; 71;

Cataluña contra determinados preceptos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones³; y el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de carácter nuclear⁴. Asimismo, se ha planteado un conflicto positivo de competencias por parte del Gobierno de Cataluña contra determinados preceptos del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos⁵.

En cuanto a las normas reglamentarias en trámite, destacamos que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abrió un período de información pública, que finalizó el 30 de junio de 2015, sobre el borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

En el ámbito de la planificación, lo más destacable es el inicio del segundo ciclo de planificación hidrológica (2015-2021), basado en la revisión de los planes hidrológicos

72; 73; 92.3 y 4; 98.5; 101; 102; 114.Siete; 116.Dos; 117.Dos; y las disposiciones finales primera y segunda .3, .4, .6 y .7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; y núm. 292-2015, contra los artículos 4, 5, 6, 7 y Anexo I de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, respectivamente. Todos ellos han sido admitidos a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional mediante Providencia de 17 de febrero de 2015 (BOE, núm. 45, de 21 de febrero de 2015).

³ Recurso de inconstitucionalidad núm. 709-2015, contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 45.4; 65; 69.j).6 y, por conexión, artículos 73 y 74 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, admitido a trámite mediante Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2015 (BOE, núm. 58, de 9 de marzo de 2015).

⁴ Recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015, contra los artículos 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de carácter nuclear, admitido a trámite mediante Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2015 (BOE, núm. 176, de 24 de julio de 2015).

⁵ Conflicto positivo de competencias núm. 5958-2014, contra los artículos 8.1 y 2, 30 y 35.1.a).i) y la disposición final primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, admitido a trámite mediante Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre de 2014 (BOE, núm. 270, de 7 de noviembre de 2014).

aprobados en el primer ciclo de planificación (2009-2015), para dar cumplimiento a la Directiva Marco del Agua. En los últimos meses se han sometido a consulta pública las propuestas de proyecto de revisión de los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones hidrográficas para el ciclo 2015-2021. También están en proceso de elaboración, en cumplimiento de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de inundación, los planes de gestión del riesgo de inundación. En los últimos meses también se han sometido a consulta pública los proyectos de planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a diferentes demarcaciones hidrográficas. Y, en aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, se han sometido a evaluación ambiental, habiéndose formulado ya diferentes declaraciones ambientales estratégicas conjuntas de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundación de diferentes demarcaciones hidrográficas para el período 2016-2021 (por ejemplo, de Ceuta y Melilla, del Júcar, del Segura, del Ebro, del Cantábrico Oriental y del Cantábrico Occidental).

Por otro lado, mediante Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.

Por último, destacamos también que en el período objeto de examen, mediante Resolución de 16 de julio de 2015, de Parques Nacionales, se ha publicado la aprobación por la Unesco de dos reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, Tenerife, y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica (España y Portugal).

1.1. La reforma del Código Penal: novedades en la regulación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, supone la introducción de importantes novedades en la regulación de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos.

En cuanto a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, se han

modificado, dentro del capítulo III del título XVI, los artículos 325, 326, 327 y 328 del CP y se ha introducido un nuevo precepto, el artículo 326 bis⁶. El artículo 325, que incluía el tipo básico del delito ecológico, recoge, en su apartado primero, un nuevo delito en el que se tipifican agresiones contra el medio ambiente supuestamente menos graves que las contempladas ahora en su apartado segundo (actual artículo 325, aunque con algunas modificaciones importantes) y que no se hallaban tipificadas como delito⁷. Con arreglo al artículo 325.1: “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”. En el artículo 325.2 se recoge, por una parte, como tipo básico la realización de las mismas conductas enumeradas en el artículo 325.1 si estas conductas, “por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, supuestos en que se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. Como puede apreciarse, las conductas son las mismas tanto en el apartado primero del artículo 325 como en su apartado segundo, de manera que las diferencias entre uno y otro estriban en el resultado exigido en cada caso (bien causar o poder causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o

⁶ Como advierte HAVA GARCÍA, E., “Modificaciones en delitos ambientales”, Quintero Olivares, G. (dir.), *Comentario a la reforma penal de 2015*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 655-656, la reforma de estos preceptos no se contemplaba ni el Anteproyecto aprobado por Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012 ni en el Proyecto del Gobierno que fue publicado en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* casi un año después, el 4 de octubre de 2013, sino que se introdujo mediante la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de diversas enmiendas ante la Comisión de Justicia, justificadas en la necesidad de adaptar la regulación de los delitos ambientales a lo dispuesto en la Directiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se modifica la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques, y en la de realizar una adecuada incorporación de determinados preceptos de la Directiva 2008/99/CE, a pesar de que la reforma a través de la Ley Orgánica 5/2010 respecto a los delitos ambientales ya fue expresamente justificada en la necesidad de incorporar esta última Directiva al ordenamiento español.

⁷ HAVA GARCÍA, “Modificaciones...”, *cit.*, p. 657.

plantas; bien poder perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales) y también en las penas previstas, mayores en el segundo caso⁸. Por otra parte, el artículo 325.2, en su párrafo segundo, recoge un tipo agravado en los supuestos en que “se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”, para los cuales se prevé la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

El artículo 326 del CP también resulta sustancialmente modificado. Este precepto recoge ahora los delitos relacionados con la gestión ilegal de residuos, anteriormente recogidos en el artículo 328. El nuevo artículo 326 recoge casi literalmente el contenido de las letras b) y c) del artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE. En su apartado primero, el artículo 326 castiga con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, a “quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. Y, en su apartado segundo, configura como tipo subsidiario del anterior (expresamente dice el precepto “fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior”) la conducta consistente en trasladar “una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos”, que será castigada con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año⁹.

⁸ HAVA GARCÍA, “Modificaciones...”, *cit.*, p. 659, advierte de las dudas que pueden suscitarse en la determinación de los casos en que debe aplicarse el artículo 325.2 y no el artículo 325.1, ya que pueden darse muchos casos en que ambos preceptos puedan aplicarse al supuesto de hecho, y propone algunas soluciones para tales casos.

⁹ Para HAVA GARCÍA, “Modificaciones...”, *cit.*, p. 662, el carácter expresamente subsidiario del precepto “obliga a entender que sólo resultará aplicable el tipo del artículo 326.2 CP en aquellos supuestos en que no se produzca ninguno de los desvalores de resultado previstos de forma alternativa en el número primero, lo que conduce a dos posibilidades interpretativas, igualmente insatisfactorias: considerar que el precepto penal carece de un núcleo esencial de desvalor de injusto, que lo permita diferenciar de la mera infracción de normas extrapenales (lo que implicaría su inconstitucionalidad), o bien interpretar que sólo serán típicas aquellas conductas que creen un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, único desvalor de resultado previsto en el artículo 325 CP que es omitido en el artículo 326.1 CP (lo que sería aún peor, por llevar a consecuencias penológicas absolutamente incoherentes —castigar con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses lo que en el

El nuevo artículo 326 bis regula las conductas que con anterioridad a la reforma de 2015 se tipificaban en el artículo 328.2. Este precepto castiga con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, a “quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”.

Las circunstancias agravantes se contemplan ahora en el artículo 327 del CP y pueden aplicarse a todas las conductas incluidas en los artículos 325, 326 y 326 bis, en cuyo caso serán castigadas con la pena superior en grado. Estas circunstancias son las siguientes: a) que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones; b) que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior; c) que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de esta; d) que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración; e) que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico; y f) que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

El artículo 328 del CP incluye ahora el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, que también resulta modificado. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del CP, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en el capítulo III del título XVI, se le impondrán las siguientes penas: multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad; o bien multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos. Asimismo, este precepto mantiene la posibilidad de aplicar, además, algunas de las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33, atendiendo a las reglas establecidas en el artículo 66 bis.

Por lo que respecta a los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y los

artículo 325 puede llegar a sancionarse con penas privativas de libertad de más de siete años—)”.

animales domésticos, incluidos en el capítulo IV del título XVI del Código Penal, la Ley Orgánica 1/2015 modifica los artículos 332, 334, 335, 337 y 337 bis. Cabe destacar que, en tanto que la modificación de los delitos relativos a la protección de la flora y de la fauna se introdujo también por la vía de enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, en el caso del delito de maltrato animal, la reforma se preveía ya en el Anteproyecto y en el Proyecto de Reforma del Código Penal¹⁰. La modificación de los artículos 332 y 334 se justifica, al igual que la reforma de los delitos recogidos en los artículos 325 a 328 del CP, en una adecuada transposición de la Directiva 2008/99/CE. El artículo 332 recoge ahora como conducta punible cortar, talar, arrancar, recolectar, adquirir, poseer o destruir especies protegidas de flora silvestre, o traficar con ellas, sus partes, derivados de estas o con sus propágulos, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie. También contempla como conducta punible destruir o alterar gravemente su hábitat, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general. Dos son las principales novedades: la ampliación del objeto material del delito, dada la sustitución del término de “especie amenazada” por el de “especies protegidas de flora silvestre”, de mayor alcance¹¹; y la introducción del castigo por la comisión por imprudencia grave. La pena prevista con carácter general para este delito es de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años, si bien se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. Y, en el caso de que los hechos se cometan por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.

En cuanto al artículo 334, las modificaciones son similares a las recogidas en el artículo 332, por lo que se sustituye la referencia a especies amenazadas por la de especies protegidas de fauna silvestre y también se prevé el castigo por la comisión por imprudencia grave. Con arreglo a este precepto: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso,

¹⁰ Vid. MARQUÉS IBANQUÉ, M., “Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”, Quintero Olivares (dir.), *Comentario...*, cit., p. 667.

¹¹ Vid. MARQUÉS IBANQUÉ, “Delitos...”, cit., p. 669.

inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general: a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre; b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o, c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración. La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat”. Si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción, la pena se impondrá en su mitad superior. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, “se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años”.

El artículo 335 del Código Penal también ha sido modificado para introducir, en su apartado segundo, el marisqueo furtivo como una modalidad típica equiparada a la caza y pesca furtivas¹². La pena prevista es la de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponder, en su caso, por la comisión del delito previsto en el artículo 335.1. Si estas conductas “produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años”.

Por último, la Ley Orgánica 1/2015 también introduce cambios significativos en relación con la protección de los animales domésticos. Las novedades más relevantes son la incorporación de la falta de maltrato del artículo 632 del CP como subtipo atenuado del artículo 337 del CP; la configuración de la antigua falta de abandono de animales del artículo 631.2 del CP como delito leve del artículo 337 bis; y la desaparición de la conducta prevista como falta en el antiguo artículo 631.1. CP, en relación con la custodia de animales feroces y dañinos¹³.

¹² MARQUÉS I BANQUÉ, “Delitos...”, *cit.*, p. 672.

¹³ MARQUÉS I BANQUÉ, “Delitos...”, *cit.*, p. 672. Sobre la reforma de los delitos relativos a los animales domésticos, vid. pp. 672-683.

1.2. Novedades en el ámbito del patrimonio natural y la biodiversidad

Durante este último año se han producido importantes novedades normativas en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Por una parte, se ha aprobado la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que deroga la anterior Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. Por otra, se ha modificado, mediante la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

A. La nueva Ley de Parques Nacionales

La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, tiene por objeto “establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la Red que forman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y colaboración” (art. 1). Se trata de una ley dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 CE, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica de protección del medio ambiente —con la salvedad de los artículos 32 y 13, adoptados al amparo de los artículos 149.1.13 y 149.1.29 CE, respectivamente—, y con un contenido predominantemente competencial¹⁴ que, aunque contiene algunos cambios, no introduce modificaciones relevantes en el modelo preexistente¹⁵.

Entre los cambios más destacables, cabe mencionar el aumento de la superficie mínima necesaria para que un espacio pueda ser declarado parque nacional en el territorio peninsular; las modificaciones en el procedimiento de declaración de los parques nacionales; la inclusión de una cláusula indemnizatoria por cualquier privación en los bienes y derechos patrimoniales, en particular sobre usos y aprovechamientos reconocidos en el interior de un parque nacional en el momento de su declaración; la ampliación hasta 2020 de la moratoria para la supresión de la caza y otras actividades incompatibles en los parques nacionales; el establecimiento de algunos organismos e instrumentos jurídicos para favorecer la coordinación efectiva de la Red de Parques

¹⁴ LÓPEZ RAMÓN, F., “Trayectoria del régimen jurídico de los parques nacionales en España”, *Revista Ambient@*, núm. 106, 2014 (<<http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Lopez14.htm>>, último acceso, 20 de octubre de 2015), p. 89.

¹⁵ LOZANO CUTANDA, B., “Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: las cinco reformas clave”, Gómez-Acebo&Pombo (<<http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/ley-30-2014-de-3-de-diciembre-de-parques-nacionales-las-cinco-reformas-clave.pdf>>, último acceso, 20 de octubre de 2015).

Nacionales en su conjunto y facilitar la labor de coordinación que corresponde al Estado (Comité de Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, comisiones de coordinación, intervención de la Administración del Estado en caso de conservación desfavorable de un parque nacional, declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental...) ¹⁶; y la especial atención dedicada a las medidas para el desarrollo territorial sostenible de las áreas de influencia socioeconómica.

Desde la perspectiva local, contiene varias referencias a las entidades locales y a los municipios en varios de sus preceptos, que podríamos agrupar en diferentes bloques. Un primer bloque vendría constituido por aquellos artículos que contemplan la participación de los municipios en el procedimiento de declaración de parque nacional y de elaboración de los instrumentos de planificación. Con relación al procedimiento de declaración de parque nacional, la Ley 30/2014 prevé, tras la aprobación inicial de la propuesta de declaración, su sometimiento a trámite de información pública por las respectivas comunidades autónomas y la emisión de los informes de los departamentos ministeriales y de las administraciones autonómicas afectadas, así como de aquellos municipios que aporten territorio a la propuesta de parque nacional (art. 8.5). También se prevé el informe de los entes locales afectados en el procedimiento de declaración en el caso de parques nacionales declarados sobre aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional (art. 8.8). Respecto a la participación de los entes locales en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de planificación, en relación con el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que es el instrumento más elevado de planificación y ordenación de los parques nacionales, la Ley únicamente establece que para su elaboración y revisión “se seguirá un procedimiento de participación pública, con la intervención, al menos, de las comunidades autónomas y de los patronatos de los parques nacionales” (art. 19.3) y no prevé expresamente la intervención de los entes locales. Debe tenerse presente, sin embargo, que en los patronatos están representados los entes locales afectados. En cuanto a los planes rectores de uso y gestión, que serán el instrumento de planificación ordinaria y que prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, la Ley prevé que las administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente dichos planes antes de su aprobación o revisión (art. 20.2).

¹⁶ Sobre esta cuestión, vid. PALLARÈS SERRANO, A., “Estudio sobre el aumento del papel coordinador del Estado en la reforma de la regulación de los parques nacionales”, *Revista Vasca de Administració Pública*, núm. 99-100, 2014, pp. 2289-2312.

Además, el procedimiento de elaboración de estos planes “incluirlá necesariamente trámites de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas, así como los informes previos del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Patronato” (art. 20.7).

Otro grupo de preceptos que regulan los órganos consultivos, de colaboración y de coordinación de los parques nacionales contemplan la participación de los entes locales en algunos de estos órganos. En primer lugar, en el patronato, que se constituirá en cada parque nacional para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en interés de los parques nacionales y como órgano de participación de la sociedad en estos, estarán representadas “las administraciones públicas implicadas, incluyendo los entes locales afectados, los agentes sociales de la zona, los agentes que desarrollen actividades económicas en el seno del parque nacional, los propietarios públicos y privados de terrenos incluidos en el parque y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el parque o cuyos fines concuerden con los objetivos de la presente ley” (art. 24.1). En segundo lugar, también se prevé la participación de los municipios en el Consejo de la Red de Parques Nacionales, órgano de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Aun cuando la Ley remite al reglamento la regulación de la composición y el funcionamiento de este órgano, presidido por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, determina que formarán parte de él “la Administración General del Estado, las comunidades autónomas en cuyo territorio estén situados los parques nacionales, una representación de los municipios incluidos en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, los presidentes de los Patronatos, representantes del Comité Científico, una representación de las asociaciones sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación estatal cuyos fines estén vinculados a la protección del medio ambiente y de las organizaciones agrarias, pesqueras, empresariales y sindicales de mayor implantación en el territorio nacional, así como una representación de las asociaciones de propietarios de terrenos incluidos en los parques nacionales” (art. 27.3).

En otro orden de cosas, los municipios tienen una especial consideración en las áreas de influencia socioeconómica, que son territorios constituidos por los términos municipales que aportan terreno al parque nacional, así como, excepcionalmente, por otros directamente relacionados, cuando así se considere en las leyes declarativas, en los que las administraciones públicas llevarán a cabo políticas activas para su desarrollo. La Ley

establece que las administraciones públicas, en la aplicación de los regímenes de apoyo a las áreas de influencia socioeconómica, “tendrán en especial consideración, tanto cualitativa como cuantitativamente, a los municipios que aportan terrenos a los parques nacionales” (art. 31.3). En todo caso, el establecimiento de estas áreas de influencia socioeconómica lleva aparejado una atención singular de las administraciones públicas dirigida a asegurar la integración del parque nacional con estas, así como a potenciar las actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización del entorno del parque nacional. A tal efecto, las administraciones públicas, de forma coordinada, desarrollarán las actuaciones que sean necesarias.

Por último, la Ley, que dedica un título —el X— a la proyección y participación social, también apela a la importancia de la intervención de los municipios en este ámbito. Los parques nacionales, como se pone de manifiesto en el preámbulo, “deben constituir un referente no solo en su forma de hacer conservación sino también en su manera de gestionarse y de implicar a la sociedad en sus actividades, de manera que se busca integrar sectores y colectivos en las actividades de gestión así como implicar y apoyar a la población local residente, con el objetivo de lograr la cohesión territorial de las áreas en donde están situados”. En este contexto, las actividades de gestión “deberán primar la integración de los municipios afectados, sectores y colectivos, y conformarse como un instrumento para la cohesión territorial de las áreas en donde están situadas. En particular, se prestará especial atención a la implicación social, a la participación de los municipios afectados en la toma de decisiones y al apoyo singularizado a las poblaciones locales residentes en el interior de los parques nacionales” (art. 35).

A pesar de estas previsiones en relación con los municipios incluidas en la Ley 30/2014, más amplias que las recogidas en la anterior ley, la Asociación de Municipios con Territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) ha criticado esta ley y ha reivindicado un mayor papel de los municipios en la gestión de los parques nacionales. En definitiva, aún podría haber una mayor y más directa participación de los municipios en este ámbito.

B. La modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que entró en vigor el pasado 7 de octubre, ha modificado la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta ley, tal y como se pone de manifiesto en su preámbulo, tiene como objeto mejorar ciertos aspectos de la aplicación de la Ley 42/2007, especialmente en lo que se refiere a la gestión de los espacios protegidos. Asimismo, tiene por objeto garantizar la correcta aplicación del derecho internacional y la incorporación de la normativa de la Unión Europea en el ordenamiento jurídico español. En este sentido, las modificaciones que introduce van en la línea de adecuarse a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, ratificada por España el 20 de diciembre de 1996; en el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, ratificado por España el 3 de junio de 2014; y en el Reglamento (UE) núm. 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios de dicho Protocolo en la Unión, por ser la Unión Europea también parte contratante de dicho Protocolo. Asimismo, se busca también perfeccionar la incorporación de la Directiva de Hábitats y de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva de Aves) en nuestro ordenamiento jurídico. También se persigue incorporar en nuestro ordenamiento los principales objetivos de la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad hasta 2020. Con este fin, se incluyen entre los principios de la Ley, por primera vez, evitar la pérdida neta de biodiversidad y la prevención de los problemas consecuencia del cambio climático, que se incluye igualmente como uno de los deberes de las administraciones públicas en el artículo 5.

Entre las novedades más significativas que se introducen, destacamos, en primer lugar, que se especifican las competencias que corresponden a la Administración general del Estado en lo que se refiere a la gestión del medio marino, teniendo en cuenta la reciente jurisprudencia constitucional (en especial, la Sentencia 87/2013, de 11 de abril).

En segundo lugar, se acometen la simplificación y agilización de los instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio natural y de la biodiversidad, regulados en el título I de la Ley 42/2007. Así, se producen modificaciones en relación con el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, los informes

anuales sobre el estado del patrimonio natural y de la biodiversidad y el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En tercer lugar, se introduce un nuevo capítulo III en el título I, relativo a la Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológica. Esta estrategia será elaborada de forma conjunta por la Administración general del Estado y las comunidades autónomas, y tendrá como objetivo “marcar las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las Administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados” (nuevo art. 15.2 Ley 42/2007).

En cuarto lugar, en la medida en que esta ley tiene como objeto fundamental mejorar la gestión de los espacios protegidos y, en particular, de los incluidos en la red Natura 2000, para garantizar su mejor protección y adecuación a los fines para los que han sido declarados, incluye una serie de modificaciones en esta línea. Así, por ejemplo, se dispone que las obras necesarias para la conservación y restauración de los espacios protegidos, para la conservación de especies amenazadas o para la conservación de hábitats en peligro de desaparición se puedan declarar de interés general del Estado; y se incluyen una serie de medidas destinadas a fomentar el apoyo de las administraciones públicas a las actividades económicas compatibles con la conservación de los espacios naturales protegidos que contribuyan al bienestar de las poblaciones locales y a la creación de empleo.

En quinto lugar, una de las novedades más relevantes de la Ley es el nuevo capítulo VI del título II, relativo a la incorporación de la información ambiental en el Registro de la Propiedad. En efecto, la información perimetral referida a los espacios naturales protegidos, la red Natura 2000, los montes de utilidad pública y los dominios públicos de las vías pecuarias y zonas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas, integradas en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, quedará siempre incorporada al sistema de información geográfica de la finca registral, con arreglo a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. Con esta medida se persigue dotar de mayor seguridad jurídica los aspectos relacionados con el régimen de

propiedad de los espacios protegidos, por lo que la información perimetral referida a dichos espacios deberá tener su reflejo en dicho Registro. De la misma forma, también se prevé que el Catastro Inmobiliario tendrá acceso a dicha información ambiental de conformidad con su normativa reguladora. Con independencia de otros instrumentos o sitios electrónicos de información medioambiental que puedan establecer las comunidades autónomas en el marco de sus competencias, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente mantendrá actualizado un servicio de mapas en línea que permita identificar y delimitar los ámbitos espaciales protegidos, así como la importación de sus datos para ser contrastados con las fincas registrales en la aplicación gráfica del sistema informático registral único.

Por último, también se introducen algunas modificaciones que afectan a la prevención y el control de las especies exóticas invasoras, a la Red Española de Reservas de la Biosfera y al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y se incluyen una serie de modificaciones destinadas a la adaptación de la normativa nacional al Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, y otras encaminadas a reforzar la responsabilidad de las administraciones públicas en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad, regulada en el título III.

1.3. Novedades en la regulación de los montes

La Ley 21/2015, de 20 de julio, que entró en vigor el 21 de octubre, modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, con el fin, como se pone de manifiesto en su preámbulo, de “tener el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas”, teniendo en cuenta que han transcurrido más de diez años desde su aprobación y que conviene mejorar y adaptar determinados aspectos de su regulación y que, además, es preciso ajustarse a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, 84/2013, de 13 de abril, y 97/2013, de 23 de abril.

Son muchas y variadas las modificaciones introducidas por esta ley en la ordenación jurídica de los montes. Entre las más significativas destacamos, en primer lugar, la consideración, como un nuevo principio inspirador de esta ley, de los montes como infraestructuras verdes, en sintonía con la Comunicación de la Comisión al Parlamento

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2013) 249 final, de 6 de mayo de 2013, “Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa”, ya que constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden. Además, la norma perfecciona el equilibrio entre los tres pilares de la gestión forestal sostenible: el económico, el ecológico y el social.

En segundo lugar, la Ley reconoce el concepto de funcionalidad de los montes, en la medida en que los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico, de fijación del carbono atmosférico y de depósito de la diversidad biológica, y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje.

En tercer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley, se determina que las plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo sobre terrenos agrícolas estarán sometidas a esta ley durante la vigencia de los turnos de aprovechamiento previamente establecidos, a menos que la comunidad autónoma decida expresamente un período más corto, decidiendo su titular una vez finalizado dicho período sobre el aprovechamiento de dicho terreno, de manera que pueden recuperar su condición anterior de terrenos dedicados a la agricultura o la ganadería.

En cuarto lugar, se sistematizan las facultades y competencias que corresponden a la Administración general del Estado derivadas del vigente marco constitucional, entre las que se incluyen, entre otras, la coordinación de la elaboración y la aprobación de las directrices sobre distintos aspectos de la lucha contra incendios forestales y el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas. Asimismo, se atribuye a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la coordinación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas para la preparación, el estudio y el desarrollo de las cuestiones propias de la política forestal española; y se crea el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de montes y política forestal, que informará, entre otros, las normas y los planes de ámbito estatal relativos a la materia forestal. Presidido por el ministro, su composición, organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

En quinto lugar, la Ley establece una clasificación de los montes en grupos distintos, primero según su titularidad y seguidamente por su afectación a un interés general, que es el factor determinante de las características de la gestión de que deben ser objeto. Respecto a los montes públicos, su uso privativo se somete con carácter general al régimen de concesión administrativa y su uso público es libre, pero en todo caso ordenado, razón por la cual se debe contemplar en el instrumento de gestión aplicable. Con relación a los montes privados, se amplía el concepto de montes privados protectores. También se refuerzan las disposiciones que permiten la defensa del dominio público forestal en lo que se refiere a recuperación posesoria, deslinde, adquisición preferente y derechos de tanteo y retracto. No se modifica, en cambio, el régimen de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y ausencia de tributación.

En sexto lugar, se acomete una simplificación de la planificación de la gestión forestal sostenible respecto de los montes de superficie reducida, muy frecuentes, para los que un procedimiento de ordenación o un plan técnico individualizado resulta muy costoso e inabordable por sus propietarios o gestores. De este modo, se prevé que la adhesión a un modelo tipo de gestión forestal debidamente aprobado puede reemplazar los instrumentos individuales, siempre que las comunidades autónomas así lo permitan, favoreciendo la ordenación forestal mediante instrumentos flexibles y de bajo coste para montes pequeños. Se abre así la puerta a que las comunidades autónomas puedan establecer una serie de modelos-tipo de gestión forestal para cada una de las clases de monte que poseen en su territorio y que consideren que, por su tamaño, su simplicidad estructural o por cualesquiera otras razones, pueden ser objeto de un plan de gestión muy simple. Al mismo tiempo, se limita la obligación legal de disponer de un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro instrumento equivalente a los montes catalogados y los protectores, debido a los valores forestales o naturales que poseen y que hacen necesario este instrumento específico. Igualmente, las comunidades autónomas podrán ampliar esta obligación a los montes que consideren conveniente.

En séptimo lugar, hay una novedad polémica en relación con el cambio de uso forestal, ya que, si bien con carácter general se mantiene la prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en un terreno incendiado, se añaden algunas excepciones. En efecto, con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en un instrumento de planeamiento previamente aprobado; un

instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública; o una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono. Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurren razones imperiosas de interés público de primer orden, que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que deberá determinar la necesidad del cambio de uso forestal. En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.

Por último, la Ley regula las funciones de extensión, policía y guardería forestal; modifica el régimen de los agentes forestales y el régimen sancionador en este ámbito; define las sociedades forestales; y crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales.

En otro orden de cosas, la Ley 21/2015 modifica la disposición final segunda de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, con el fin de autorizar al Gobierno a elaborar y aprobar, antes del 31 de diciembre de 2016, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas en normas con rango de ley; e incorpora una serie de preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de febrero, que declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura introducidas mediante enmiendas en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el artículo 72.3 de su Estatuto de

Autonomía, y así asegurar el funcionamiento ordinario y con plena seguridad jurídica del trasvase Tajo-Segura.

1.4. Novedades en materia de responsabilidad ambiental

En materia de responsabilidad ambiental, cabe destacar, en primer lugar, la modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, a través de la disposición final primera de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Dos son las modificaciones que se introducen. En primer lugar, se modifica el párrafo b) del artículo 2.1, en el que se especifica qué se entiende por los daños a las aguas, con el fin de sustituir la denominación de “estado ecológico de las aguas marinas” por la de “estado medioambiental de las aguas marinas”, en coherencia con la regulación del artículo 7.4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. En segundo lugar, se modifica el artículo 45.3 para precisar que el silencio administrativo será negativo una vez transcurrido el plazo de seis meses previsto para que la autoridad competente dicte la resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y la notifique en plazo, sin perjuicio de la obligación inexcusable de la autoridad competente de resolver.

En segundo lugar, se ha aprobado el Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, aprobado mediante el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre¹⁷. Con esta modificación se da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 28.d) de la Ley —modificado por la Ley 11/2014, de 3 de julio—, y se establecen los operadores de las actividades que, atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y a su bajo nivel de accidentalidad, quedarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria y, por lo tanto, de llevar a cabo el análisis de riesgos medioambientales (nuevo apartado 2.b) del artículo 37 del Reglamento). Ahora bien, tal y como recalca el preámbulo del Real Decreto 183/2015, “la exclusión de actividades del anexo III de la Ley de la

¹⁷ Este real decreto, de acuerdo con su disposición final primera, tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, salvo los apartados tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete del artículo uno y la disposición transitoria única, que constituyen legislación básica de seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª de la Constitución Española. No tienen carácter de legislación básica los apartados uno y cinco del artículo único.

obligación de constituir garantía financiera, no compromete los objetivos fundamentales de la normativa de responsabilidad medioambiental, que es regular las obligaciones de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales que puedan causar. Así, independientemente de la obligación o no de constituir garantía financiera, todos los operadores del anexo III de la Ley siguen teniendo una responsabilidad objetiva e ilimitada, de forma que aquellos que ocasionen daños medioambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de la causación del daño”. Asimismo, subraya que “independientemente de la obligación o no de constituir garantía financiera, todos los operadores del anexo III de la Ley que ocasionen daños medioambientales o amenacen con ocasionarlos, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de la causación del daño, por lo que el carácter eminentemente objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de quien contamina paga, del régimen de responsabilidad medioambiental establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, no se ve alterado por las exenciones a la obligación de constituir garantía financiera previstas en el presente real decreto”.

El Real Decreto, al margen del desarrollo de estas previsiones de la Ley 26/2007, también efectúa otras modificaciones del Real Decreto 2090/2008, con la finalidad de reducir las cargas administrativas a los operadores y de simplificar los procedimientos administrativos contemplados en este, en especial el de determinación de la garantía financiera. Asimismo, en esta línea de simplificación, se elimina el requisito de la verificación de los análisis de riesgos medioambientales por organismos acreditados, que se sustituye por una declaración responsable del operador de que el citado análisis y la constitución de la garantía financiera se han llevado a cabo cumpliendo los requisitos establecidos a tal efecto por la Ley y el Reglamento.

1.5. La modificación de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera

La Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la que ya nos hemos referido

con anterioridad, también ha introducido una modificación en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Concretamente, se modifica el artículo 13.2, añadiéndose un nuevo párrafo tercero en el que se prevé que el órgano competente para otorgar la autorización administrativa a que se sujeta la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV de la Ley 34/2007, y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B, “dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de nueve meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada”. Esta modificación, como se pone de manifiesto en el preámbulo de la Ley 33/2015, se realiza “con el fin de seguir el modelo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, donde los plazos son legislación básica de conformidad con el artículo 149.1.23 de la Constitución y se aplica el silencio negativo una vez transcurrido el plazo máximo para resolver previsto en la ley”.

1.6. El problema asociado al proyecto Castor y la adopción de medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares

La problemática asociada al proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, que originó una serie de terremotos en la zona de Castellón, motivó la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares —convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de octubre de 2014—. Esta instalación había obtenido mediante Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural, que establecía, en caso de caducidad o extinción de la concesión, una compensación a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo, siempre que estas continuasen operativas, que no era de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitaría al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria. El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 14 de octubre de 2013, consideró que esta cláusula contenida en el artículo 14 del Real Decreto 855/2008 no era incompatible con la gratuidad de la reversión de

las instalaciones estipulada en el artículo 29.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Mediante el Real Decreto-Ley 13/2014, de 13 de octubre, se pretende abordar la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular, ESCAL UGS, S. L., el 18 de julio de 2014. Con este fin, se acuerda la hibernación de las instalaciones¹⁸, la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural otorgada por el Real Decreto 855/2008, y la asignación de su administración a la sociedad ENAGÁS TRANSPORTE, S. A. U. Esta sociedad se encargará, durante la citada hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios para determinar la correcta operatividad de la instalación y, en su caso, de los trabajos necesarios para su desmantelamiento. De este modo, asumirá la administración de la infraestructura y se subrogará en la posición de ESCAL UGS, S. L., en tanto se decida la reanudación de la actividad o su desmantelamiento. También llevará a cabo el pago de la correspondiente compensación a ESCAL UGS, S. L., por el valor neto de la inversión (1.350.729 millones de euros). Además, se reconocen a ENAGÁS TRANSPORTE, S. A. U., los derechos retributivos devengados por ESCAL UGS, S. L., en el período comprendido entre el acta de puesta en servicio provisional y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley. Por razón de la obligación de pago prevista, ENAGÁS TRANSPORTE, S. A. U., será titular de un derecho de cobro por parte del sistema gasista, con cargo a la facturación por peajes de acceso y cánones del sistema gasista durante 30 años hasta la total satisfacción del importe correspondiente al pago estipulado en el artículo 4.2 y 4.3 del Real Decreto-Ley. El derecho de cobro se abonará con independencia de que subsista o no la hibernación de la instalación durante el plazo fijo de treinta años y comenzará a abonarse a partir de la primera liquidación del sistema

¹⁸ Durante esta hibernación, tal y como se dispone en el artículo 1 del Real Decreto-Ley, no se realizará ninguna inyección o extracción de gas natural en las estructuras geológicas del subsuelo que conforman el almacenamiento subterráneo, si bien esto no resultará de aplicación a aquellas cantidades de hidrocarburo que sean imprescindibles para garantizar la operatividad de las instalaciones y los equipos o la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Este mismo precepto prevé que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se podrá poner término a la hibernación, previa valoración motivada de los resultados de los correspondientes estudios técnicos y atendiendo a la evolución de la demanda de gas natural. La decisión adoptada garantizará la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasista y primará, de manera determinante, la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. En esta disposición del Consejo de Ministros se acordará el desmantelamiento del almacenamiento o, en su caso, la integración de las instalaciones en una concesión de explotación del almacenamiento que deberá otorgarse a través de un procedimiento de concurrencia competitiva de conformidad con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y su normativa de desarrollo, correspondiendo al sistema gasista los ingresos y costes prudentes derivados de ambos.

gasista correspondiente a la facturación mensual por peajes de acceso y cánones devengados desde el 1 de enero de 2016. En definitiva, son los consumidores de gas los que tendrán que asumir el coste de la hibernación de las instalaciones de gas del proyecto Castor y, por lo tanto, los obligados a pagar este coste con cargo a los peajes fijados por el Ministerio.

Por otro lado, el Real Decreto-Ley incorpora algunas previsiones relativas a la titularidad de las centrales nucleares. Tal y como se pone de manifiesto en la exposición de motivos, a pesar de que la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, modifica el artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, para disponer que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, contando con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios, añade una disposición transitoria única a la Ley 25/1964, de 29 de abril, en la que se establece el procedimiento a seguir por los titulares de las centrales nucleares que no cumplan con los requisitos establecidos en la nueva redacción del artículo 28 citado, para adaptarse a estos requisitos, fijando un plazo para llevar a cabo esta adaptación¹⁹. Por ello, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única de la Ley 25/1964, en el caso de que, a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley (el 4 de octubre de 2014), la titularidad de la autorización de explotación de una central nuclear no se hubiera adaptado a las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, dicha titularidad se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación. Quedarán con ello sin efecto los planes de adaptación que, en su caso, se encuentren en tramitación. Con este fin, los titulares de la autorización de explotación hasta esa fecha dotarán al nuevo titular de los medios a que se refiere el apartado 2 del artículo 28. Con independencia del régimen de adopción de acuerdos que sea ordinariamente de aplicación al nuevo titular, las decisiones relacionadas con la seguridad nuclear se adoptarán por mayoría simple. Por último, se introduce una limitación de responsabilidad conforme a la cual: “En todo caso y sin perjuicio de la responsabilidad del titular de una central nuclear, la responsabilidad por

¹⁹ Tal y como se pone de manifiesto en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley, esta medida afecta a todas las centrales nucleares, salvo a la central nuclear de Santa María de Garoña y a la central nuclear de Cofrentes, ya que son las únicas que cumplen con el requisito de tener un único titular.

los daños y perjuicios derivados de su funcionamiento no será exigible a entidades que no sean copropietarias de la misma ni, en su caso, a sus representantes en los órganos de administración del referido titular” (disposición adicional segunda).

1.7. Algunas normas reglamentarias destacables

Durante el último año se han aprobado numerosas normas reglamentarias en materia ambiental, por lo que resulta imposible en el marco de esta crónica un análisis, ni tan siquiera una mención, de todas ellas. Por este motivo, nos limitamos a destacar algunas de ellas.

A. El nuevo desarrollo reglamentario de la Ley de Costas

Tras la reciente aprobación de la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, aprueba el Reglamento General de Costas, que deroga el anterior Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre²⁰. Este reglamento, como se pone de manifiesto en su preámbulo, “pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica”, por lo que, para conseguirlo, “revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989 tales como los criterios técnicos que resultan necesarios para la determinación del dominio público marítimo-terrestre, basados en un amplio debate técnico y en la experiencia acumulada en la realización de los deslindes”, y, en relación con el nuevo régimen de los terrenos inundados, introduce “garantías para que los terrenos que,

²⁰ De acuerdo con su disposición final primera: “La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.^a y 23.^a de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.18.^a de la Constitución.

La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8.^a del artículo 149.1 de la Constitución”.

habiendo sido humedales conforme a la legislación de aguas, han dejado de serlo por vaciamiento de los acuíferos, no queden excluidos del dominio público”. Asimismo, regula la intervención del Registro de la Propiedad y el Catastro en los deslindes. Al mismo tiempo, desarrolla elementos novedosos como son el régimen aplicable a los tramos en situación de regresión grave, o los diferentes requisitos de ocupación según si las playas son naturales o urbanas.

El nuevo Reglamento de costas, cuyo objeto es “el desarrollo y la ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar”, se estructura en un título preliminar y seis títulos, integrados por 228 artículos, y contiene, además, diez disposiciones adicionales y 26 disposiciones transitorias. El título preliminar (arts. 1 y 2) determina su objeto y finalidades. El título I (arts. 3 a 39) se destina a la regulación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y en él se regulan cuestiones como la clasificación y definiciones de estos bienes, su indisponibilidad y las potestades de la Administración, los deslindes (objeto y principios generales, procedimientos, efectos e inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre) y la afectación y desafectación. El título II (arts. 40 a 59) se centra en las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre (servidumbre de protección, servidumbre de tránsito, servidumbre de acceso al mar y zona de influencia). El título siguiente, el III (arts. 60 a 178), regula pormenorizadamente la utilización del dominio público marítimo-terrestre, regulando con detalle el régimen general de utilización y el régimen de utilización de las playas, las reservas y adscripciones, las autorizaciones, las concesiones y la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la Ley 2/2013, de 29 de mayo. El título IV (arts. 179 a 190) contempla el régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre. El título V (arts. 191 a 219), las infracciones y las sanciones. Y, finalmente, el título VI (arts. 220 a 226), las competencias administrativas, tanto de la Administración general del Estado como de las comunidades autónomas y de los municipios.

B. Novedades en materia de aguas

La actividad normativa en materia de aguas en el período objeto de análisis ha sido intensa. Destacamos, en especial, cinco normas, aunque existen algunas más.

Cabe mencionar, en primer lugar, el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, que tiene carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.^a de la Constitución —con la excepción de la disposición adicional tercera, dictada al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al Estado el artículo 149.1.22.^a de la Constitución en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma—. Este real decreto, que deroga el anterior Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, complementa la transposición al derecho español de la Directiva Marco del Agua; incorpora al derecho español la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto, por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas; incorpora las obligaciones de la Decisión 2013/480/UE, de 20 de septiembre, por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración; traspone la Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, que modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas; e incorpora las obligaciones de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de 20 de marzo de 2015, por la que se establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, mediante el Real Decreto se contribuye a la implantación de las disposiciones sobre intercambio de información ambiental contenidas en la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, y en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino —ambas leyes transponen respectivamente la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire), y la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino—. Igualmente, contribuye al cumplimiento del Reglamento (UE) núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

El Real Decreto, al objeto de la protección de las aguas, establece los criterios básicos y homogéneos para el diseño y la implantación de los programas de seguimiento del estado de las masas de agua superficiales y para el control adicional de las zonas protegidas; las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes con objeto de conseguir un buen estado químico de las aguas superficiales, las NCA para las sustancias preferentes y el procedimiento para calcular las NCA de los contaminantes específicos con objeto de conseguir un buen estado ecológico de las aguas superficiales o un buen potencial ecológico de dichas aguas, cuando proceda; las condiciones de referencia y los límites de clases de estado de los indicadores de los elementos de calidad biológicos, fisicoquímicos e hidromorfológicos para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficiales; y las disposiciones mínimas para el intercambio de información sobre el estado y la calidad de las aguas entre la Administración general del Estado y las administraciones con competencias en materia de aguas, en aras del cumplimiento de la legislación que regula los derechos de acceso a la información y de participación pública.

Para dar cumplimiento a estas finalidades, se estructura en cinco títulos diferentes. En el título I (arts. 1 a 3) incluye una serie de disposiciones generales destinadas a delimitar su objeto y ámbito de aplicación y a fijar la definición de conceptos relevantes. En cuanto a su ámbito de aplicación, con arreglo al artículo 2, los criterios establecidos en el Real Decreto se entienden como requisitos mínimos y serán de aplicación a todas las aguas superficiales definidas en el artículo 3 y, en lo referente al intercambio de información, además, a las aguas subterráneas. El título II (arts. 4 a 8) se centra en el seguimiento del estado de las masas de agua superficiales y regula los programas de seguimiento del estado de las aguas superficiales, que son el Programa de Control de Vigilancia, el Programa de Control Operativo y el Programa de Control de Investigación, así como el control adicional de las masas de agua del Registro de zonas

protegidas de cada demarcación. El título III (arts. 9 a 19) incluye la regulación relativa a la evaluación del estado de las masas de agua superficiales (evaluación del estado ecológico y evaluación del estado químico). En el título IV (arts. 20 a 29) se determinan las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y se prevé la elaboración del inventario de emisiones, vertidos y pérdidas, al tiempo que se incluyen algunas previsiones sobre contaminación transfronteriza. Finalmente, el título V incluye algunas obligaciones de intercambio de información (art. 30).

Por otro lado, el Real Decreto modifica algunos preceptos del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias; del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas; del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica; y del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. También prorroga, hasta el 30 de septiembre de 2016, la declaración de sequía aprobada por los reales decretos 355/2015, de 8 de marzo, y 356/2015, de 8 de mayo, para los ámbitos de las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura, respectivamente.

En segundo lugar, destacamos el Real Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears, tal como fue aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears en su reunión del 4 de mayo de 2015.

En tercer lugar, el Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, dictado al amparo de la habilitación contenida en el artículo 149.1.22.^a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando discurren por más de una comunidad autónoma. Mediante el Real Decreto se desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, introducido mediante la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y que crea el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. De este modo, se procede a una regulación completa de este canon, que es una tasa de aplicación en las cuencas

intercomunitarias mediante la cual se gravan la utilización y el aprovechamiento de los bienes de dominio público a que se refiere el artículo 2.a) del texto refundido de la Ley de Aguas (las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación) para la producción de energía eléctrica, medida en barras de central, y que está destinada a la protección y mejora del dominio público hidráulico.

En cuarto lugar, el Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, y el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. El Real Decreto, como consecuencia de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2015, en la que se resuelven los recursos contencioso-administrativos presentados contra las disposiciones del Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que fijaban el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y delimitaban el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ), procede a incluir, en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el endorreísmo natural formado por el sistema que constituyen los ríos Quejola, Jardín y Lezuza y la zona de Los Llanos, dando una nueva redacción a las disposiciones afectadas, esto es, el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, y el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero.

Y, por último, la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración general y simplificada de vertidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 253 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Estos modelos serán exigibles para todas las solicitudes de autorización de vertido que se presenten, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial.

C. Novedades en materia de residuos

En materia de residuos, dos son las normas más destacables. Por una parte, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, que tiene el carácter de legislación básica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.^a de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y en el artículo 149.1.23.^a de la Constitución, que atribuye al Estado la legislación básica sobre protección del medio ambiente. El objeto de esta norma es “desarrollar el régimen jurídico de los traslados de residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados” (art. 1.1), por lo que se aplica “a los traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de valorización o eliminación intermedias” (art. 1.2). Para dar cumplimiento a estos fines, se estructura en tres capítulos. El capítulo I procede a la determinación de su objeto, ámbito de aplicación, definiciones y requisitos generales de los traslados, entre los que se encuentran la existencia previa de un contrato de tratamiento, el documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino y un tercer requisito adicional como es la notificación previa al traslado, aplicable exclusivamente a los traslados de residuos peligrosos, de residuos destinados a la eliminación y de residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas como valorización, y a los traslados que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 y de los residuos que reglamentariamente se establezcan. El capítulo II desarrolla los requisitos comunes a todos los traslados, es decir, el contrato de tratamiento y el documento de identificación. Por último, el capítulo III desarrolla el requisito adicional de la notificación previa a la que se someten determinados tipos de traslados, que, por la naturaleza de los residuos o por el tratamiento al que se someterán, deben ser previamente puestos en conocimiento de las administraciones afectadas con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a ellos.

Por otra, el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de

sus residuos, ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión.

D. La modificación del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado

En materia de instalaciones nucleares y radiactivas se ha aprobado el Real Decreto 177/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Mediante el Real Decreto se modifica el artículo 2 de dicho Reglamento para proceder a su adaptación a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Con arreglo al artículo 2.3 de este reglamento, las autorizaciones de funcionamiento referidas a instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría tenían validez para todo el territorio español, añadiendo la condición de que el titular que fuera a realizar cualquiera de las actividades para las que dispusiese de autorización, en una parte concreta del territorio, debía notificarlo fehacientemente a la Administración territorial competente, la cual, transcurrido un plazo determinado, podía denegar dicha actividad mediante escrito motivado. En la medida en que el hecho de permitir que la comunidad autónoma de destino del operador (titular de la instalación) se oponga a una actividad autorizada en otra comunidad autónoma contraviene lo dispuesto en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al ser una intervención innecesaria y desproporcionada y, en consecuencia, contraria a los artículos 5 y 17 de esta y pudiera constituir una intervención contraria al principio de no discriminación, se modifica su artículo 2 para adaptarse a dicha Ley. Tras su modificación, este precepto prevé, en su apartado tercero, lo siguiente: “Las autorizaciones de funcionamiento referidas a instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría tendrán validez para todo el territorio español. Sin perjuicio de lo anterior, el titular que vaya a realizar cualquiera de las actividades para las que dispone de autorización, en una parte concreta

del territorio, deberá remitir una comunicación a la Administración territorial competente, pudiendo iniciar su actividad a partir de dicha comunicación”.

E. Novedades en materia de producción ecológica

En el ámbito de la producción ecológica, se ha aprobado el Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica. El Real Decreto, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.^a de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, deroga el Real Decreto 759/1988, de 15 de julio, por el que se incluyen los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de síntesis en el régimen de denominaciones de origen genéricas y específicas establecido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre; el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se establecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica; y la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y se establecen las funciones y composición de la Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica.

Su objeto es establecer y regular una base de datos nacional denominada Registro General de Operadores Ecológicos (en adelante, REGOE), adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria, que incluirá los datos obrantes en los registros o sistemas de información gestionados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y se constituirá en una base de datos informatizada. También procede a la creación de la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica como órgano colegiado adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuyos fines son actuar como órgano de coordinación con las autoridades competentes de las comunidades autónomas en materia de producción ecológica, desempeñando las funciones de asesoramiento y coordinación que se le encomienden, en particular, en lo relacionado con la aplicación del Real Decreto.

Asimismo, se ha aprobado la Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países, cuyo objeto es “establecer los procedimientos de gestión, en materia de autorización, control e inspección, de los productos ecológicos procedentes de terceros países para el despacho a libre práctica en la Unión Europea”.

F. La aprobación del Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino

Mediante la Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, dictada al amparo de lo dispuesto por el artículo 149.1.20ª de la Constitución, que confiere al Estado las competencias exclusivas en materia de marina mercante, se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 3 del Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina, aprobado por Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, y se establecen las estructuras de respuesta, los procedimientos operativos y los medios materiales y humanos precisos para dar respuesta a cualquier suceso de contaminación marina, así como todos los demás aspectos que deben integrar su contenido mínimo.

Lo dispuesto en la Orden será de aplicación a todo suceso de contaminación marina que se produzca en aguas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción; a las actuaciones que se realicen en las aguas de Estados limítrofes, con sujeción a lo que puedan disponer los convenios internacionales bilaterales o los protocolos operativos de los Estados solicitantes; y a todas las personas físicas o jurídicas involucradas en sucesos de contaminación en el ámbito marítimo, con sujeción a lo dispuesto en esta orden.

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, regula los riesgos y las áreas vulnerables; las fases y situaciones de emergencia; los procedimientos y protocolos de notificación; la composición y funciones de los órganos de dirección y respuesta; los procedimientos de actuación y fin de emergencias; el inventario de medios y los programas de mantenimiento y adiestramiento; y la revisión del Plan Marítimo Nacional y el régimen sancionador.

1.8. Otras normas de interés

Además de las normas reseñadas, en el período objeto de análisis se han aprobado un buen número de normas de rango legal con incidencia en materia ambiental. Destacamos, entre ellas, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que trae causa del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, objeto de análisis en una crónica anterior; la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; la Ley 2/2015, de 25 de marzo, de medidas tributarias urgentes dirigidas a compensar los efectos de las inundaciones en la cuenca del río Ebro; la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; y la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

Traemos a colación también la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que, aunque su objeto nada tiene que ver con la protección del medio ambiente (es una norma destinada, según su artículo 1, a “regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria”), ha incorporado una novedad de interés en este ámbito en materia de silencio administrativo, si bien su entrada en vigor se pospone al año de su publicación en el BOE. En efecto, junto a los ya tradicionales supuestos en que el silencio tiene efecto desestimatorio (procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la CE, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas), incorpora uno nuevo, de modo que también tendrá efecto desestimatorio el silencio en aquellos procedimientos que “impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente”.

Tampoco puede obviarse la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que pone fin a las deducciones por inversiones medioambientales. Esta desaparición se justifica en el preámbulo en los términos siguientes: “[...] desaparece la deducción por inversiones medioambientales, teniendo en cuenta que las exigencias en materia medioambiental son cada vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resultaba paradójico el mantenimiento de un incentivo de estas características. De nuevo, prevalece la neutralidad del Impuesto, resultando preferible que sean otros parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza”.

Asimismo, hacemos mención de algunas normas reglamentarias de interés en ámbitos sectoriales diversos: en materia de energía, entre otros, el Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, y la Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares; en materia de aguas, el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, y el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos; en materia de gases de efecto invernadero, el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de “fuga de carbono” y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015; en materia de protección de la flora y de la fauna, la Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas; en materia de pesca marítima, el Real Decreto 182/2015, de 13 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento de procedimiento del régimen sancionador en materia de pesca marítima en aguas exteriores; en materia de productos fitosanitarios, el Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios, y el Real Decreto 951/2014, de 14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria; y, en materia de razas autóctonas, el Real Decreto 181/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1625/2011, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.

Por último, se ha aprobado, mediante el Real Decreto 846/2015, de 28 de septiembre, una modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el fin de exceptuar de la reserva funcional el nombramiento del titular de la Oficina Española de Cambio Climático, con rango de director general.

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

En el período examinado (del 1 de abril al 30 de septiembre de 2015), se han producido un buen número de novedades normativas en materia ambiental en Cataluña. Se han aprobado tres normas con rango de ley de gran interés medioambiental. En primer lugar, la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica, introduce algunas reformas de importancia. En efecto, a través de la citada Ley se modifican, entre otras leyes, la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades; la Ley 6/1988, de 3 de marzo, Forestal de Cataluña; la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios; y el texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Asimismo, la Ley 16/2015 también establece una serie de reglas aplicables en materia de evaluación ambiental de planes y programas.

En segundo lugar, cabe mencionar la Ley 22/2015, de 29 de julio, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, para incluir prohibir los espectáculos de circo con actuaciones de animales salvajes.

En tercer lugar, se ha aprobado la Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de Cataluña, la cual incorpora los efectos externos negativos de la movilidad sobre el medio ambiente a la estructura de costes y traslada su repercusión económica a los usuarios.

En el ámbito reglamentario, las normas más destacables son el Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno; el Decreto 178/2015, de 4 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear; el Decreto 60/2015, de 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medio ambiente; el Decreto 62/2015, de 28 de abril, por el que se establecen medidas para el ejercicio de las competencias de la Generalitat en materia de los organismos modificados genéticamente; el Decreto 98/2015, de 9 de junio, del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña; y el Decreto 198/2015, de 8 de septiembre, de gestión agrícola de los efluentes producidos en bodegas y almazaras.

En estos momentos se está gestando una iniciativa normativa de gran interés en materia ambiental como es el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad está tramitando el citado Anteproyecto, sometido a información pública durante un período de 15 días hábiles, mediante Edicto de 25 de mayo de 2015²¹. Con este Anteproyecto se pretende “contribuir al logro de una sociedad innovadora, sostenible y económicamente competitiva con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y mejor adaptada a los impactos del cambio climático” (art. 1).

²¹ Publicado en el DOGC núm. 6878, de 25 de mayo de 2015. Del 26 de mayo al 12 de junio de 2015, el texto del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático se sometió al trámite de información. En el Consejo Ejecutivo reunido el 20 de octubre de 2015, el Gobierno decidió ultimar el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático. En la web de la Oficina Catalana del Cambio Climático se ha publicado la documentación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, la documentación del proceso de debate y las fases del proceso de debate (URL: http://canviclimatic.gencat.cat/es/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_llei_cc/; última consulta, 29 de octubre de 2015).

Figuran como objetivos del Anteproyecto la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero en Cataluña para contribuir a la transición hacia una sociedad con una baja intensidad de consumo de combustibles fósiles; la reducción de la vulnerabilidad de la población, de los sectores socioeconómicos y de los ecosistemas ante los impactos adversos del cambio climático, así como la creación y el refuerzo de las capacidades nacionales de respuesta a estos impactos; la adaptación de los sectores económicos; el fomento de la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología y la difusión del conocimiento; el establecimiento de mecanismos que aporten información objetiva y evaluable sobre todos los aspectos relacionados con el cambio climático, su evolución temporal y sus impactos; y el fomento de la participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales en la valoración y evaluación de las políticas climáticas. Para conseguir estos objetivos, el Anteproyecto introduce el vector del cambio climático en todas las políticas sectoriales (agricultura y ganadería; agua; biodiversidad; bosques y gestión forestal; energía; industria, servicios y comercio; infraestructuras; residuos; salud; transporte y movilidad; turismo; universidad e investigación; y urbanismo y vivienda).

Además, cabe destacar que la norma regula distintos órganos como la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, el cual tiene como función principal coordinar la planificación de las políticas climáticas y realizar el seguimiento de su desempeño, y el Consejo Catalán del Clima, que tiene por objetivo canalizar la participación pública, la información y la consulta de las políticas climáticas.

En cuanto a la simplificación y racionalización administrativa (art. 29), el Anteproyecto establece una serie de medidas; entre ellas, destaca que en los procedimientos de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos deben valorarse las emisiones de gases de efecto invernadero que su ejecución y gestión puedan producir, así como la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Por otro lado, cabe decir que la norma también regula la fiscalidad climática y crea impuestos ambientales como el impuesto sobre las emisiones de CO₂ de los vehículos de tracción mecánica.

En el ámbito de la planificación, lo más destacable es el Plan de Fomento del Turismo de Naturaleza en los Espacios Protegidos de Cataluña y el Plan Estratégico de los Espacios Naturales de Cataluña.

Desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político, cabe destacar, por una parte, la aprobación por parte del Gobierno de la Estrategia Catalana de Ecodiseño para una Economía Circular y Ecoinnovadora y la Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la Economía Circular. Por otra, el Gobierno ha aprobado el Programa Voluntario de Compensación de Gases de Efecto Invernadero para fomentar la transición a una economía baja en carbono a través de la realización de proyectos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.

Por último, destacamos también que en el período objeto de examen, con motivo de la conmemoración de los treinta años de la aprobación de la Ley de Espacios Naturales de Cataluña, desde diversas instituciones académicas²² se ha querido aprovechar la ocasión para hacer una valoración de lo que ha representado esta ley en cuanto a la protección de los espacios naturales y, especialmente, para reflexionar sobre su utilidad para afrontar los retos actuales²³.

2.1. El impacto de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica

La Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica, tiene por objetivo principal establecer una serie de criterios con la voluntad de clarificar y simplificar las obligaciones que la normativa vigente impone a las administraciones públicas de Cataluña, a los ciudadanos y a las empresas. Las finalidades que se persiguen son mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos de la Administración de la Generalitat y de la Administración local de Cataluña; impulsar la actividad económica y la creación de empleo mediante una gestión más eficiente de los recursos de las administraciones públicas; y consolidar instrumentos de colaboración y de coordinación entre las administraciones públicas de Cataluña en el ejercicio de las competencias de regulación, intervención y control de la

²² Instituciones convocantes: Cátedra de Geografía y Pensamiento Territorial e Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona; Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), Universitat Rovira i Virgili; Institució Catalana d'Història Natural. Societat Catalana de Geografia. Institut d'Estudis Catalans.

²³ Para tratar de manera más completa y complementaria las diferentes cuestiones que se desarrollan en la Ley de Espacios Naturales de Cataluña, se han realizado tres jornadas: el 5 de junio de 2015 en Girona, el 8 de junio en Tarragona y el 18 de junio en Barcelona.

actividad económica. A los efectos de esta crónica, nos centraremos en el título II de la Ley 16/2015, que regula la simplificación administrativa en el ejercicio de las actividades económicas, y en el título III de la citada Ley, que modifica varias normas con rango de ley y se distribuye en cuatro capítulos. En los apartados siguientes se dará cuenta de las principales modificaciones en materia ambiental.

A. Actividades económicas inocuas y actividades económicas de bajo riesgo

La Ley 16/2015 introduce un cambio de modelo de relación entre las empresas y la Administración con la intervención administrativa mínima en el inicio o la modificación de las condiciones en que se realizan las actividades económicas definidas como inocuas o de bajo riesgo. A los efectos de la Ley 16/2015, se define como actividad económica inocua la que, con carácter general, por sus características no produce molestias significativas ni ninguna afectación considerable al medio ambiente, la seguridad de las personas o los bienes²⁴. Sin embargo, se considera actividad económica de bajo riesgo aquella actividad que, por sus características, puede producir alguna molestia poco significativa o tiene una incidencia muy baja sobre el medio ambiente, la seguridad de las personas o los bienes²⁵. Estas dos categorías de actividades económicas, de acuerdo con el preámbulo de la Ley, tienen una repercusión especial en sectores empresariales que actualmente representan el 74% de la actividad económica de Cataluña y afectan a más del 51% de la población empleada.

Tiene especial interés la regulación del régimen de intervención administrativa aplicable a las actividades inocuas y a las actividades de bajo riesgo, la cual se rige por una serie de principios de actuación: la libertad en el ejercicio de la actividad económica; la intervención administrativa mínima para el inicio de la actividad; el impulso de mecanismos alternativos que permitan reducir cargas a las empresas y a los profesionales; la responsabilidad de los titulares de empresas y de los profesionales en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el ejercicio de la actividad económica; la no exigencia de medidas de control concurrentes sobre una misma actividad; la estandarización de los requisitos exigidos por las administraciones para iniciar y desarrollar la actividad económica; y la facilitación de las relaciones de las empresas y

²⁴ Las actividades económicas inocuas son las incluidas en el anexo I de la Ley 16/2015.

²⁵ Las actividades económicas de bajo riesgo son las incluidas en el anexo II de la Ley 16/2015.

los profesionales con las administraciones públicas de Cataluña (art. 4). Así, mientras que las actividades económicas consideradas de bajo riesgo se someten a comunicación previa por razón de su incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad de las personas o los bienes, las actividades económicas inocuas están sujetas a declaración responsable. De esta manera, la presentación de la declaración responsable o la comunicación previa, según el tipo de actividad, habilita de forma inmediata para el ejercicio de la actividad bajo la responsabilidad de su titular y a la vez faculta a la Administración para realizar cualquier actuación de comprobación.

B. La modificación de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades

En el capítulo III del título II de la Ley 16/2015 se modifican parcialmente varias leyes de carácter sectorial que tienen incidencia en la legalización de las actividades económicas, como la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de Prevención y Control Ambiental de las Actividades.

Como ya se apuntó en la crónica anterior, debe llamarse la atención sobre el hecho de que ya van seis reformas de la Ley 20/2009, a pesar de que han pasado menos de seis años desde su aprobación. La mayor parte de estas reformas se han realizado a través de macroleyes en que se modifican numerosas normas en ámbitos sectoriales diversos que no guardan conexión entre ellos²⁶. Esto nos conduce a pensar que quizá ha llegado el momento de realizar una reflexión profunda sobre el régimen de prevención y control ambiental de actividades en Cataluña y aprobar una nueva ley que dé respuestas a las necesidades de este ámbito.

Esta modificación afecta al régimen de licencia ambiental, de forma que se amplían las actividades que están sometidas al régimen de comunicación en vez del de licencia. Así, se añade un nuevo epígrafe, el 12.59, al anexo III de la Ley 20/2009, con el siguiente texto: “12.59. Almacenaje o manipulación de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silvícolas, restos de jardinería, cultivos

²⁶ Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas; Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa; Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica; Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos; Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; y Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas.

energéticos, serrín...) o de productos de esta biomasa (leña, pella, astillas, briquetas...) con una capacidad inferior a 10.000 m³". Además, se excluyen del ámbito de aplicación de la normativa ambiental un conjunto de actividades que hasta ahora estaban sujetas a comunicación; en concreto, se suprimen los epígrafes 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 y 12.58 del anexo III de la Ley 20/2009.

C. La modificación de la Ley 6/1988, de 3 de marzo, Forestal de Cataluña

La Ley 6/1988, de 3 de marzo, Forestal de Cataluña, únicamente resulta objeto de modificación en un artículo, en relación con el régimen de intervención de la Administración en el ámbito forestal agrícola. En relación con los terrenos forestales, puede permitirse la roturación de terrenos para el establecimiento de actividades agropecuarias si se trata de terrenos aptos técnica y económicamente para un aprovechamiento de esta naturaleza, conforme al artículo 23 de la Ley 6/1988 — previamente modificado a través de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público—, si bien se precisa de la autorización de la Administración forestal. Con la modificación introducida por la Ley 16/2015, se añade un nuevo artículo, el 23 *bis*, a la Ley 6/1988 que establece que, en el caso de superficies que en los últimos veinte años se han convertido en forestales por abandono de la actividad agrícola, el cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola está sujeto a régimen de comunicación si la superficie es de hasta dos hectáreas y la recuperación de la actividad agrícola se realiza sin alterar la topografía del terreno. No obstante, este régimen de comunicación no es aplicable a superficies que afectan a espacios naturales de especial protección, espacios de la Red Natura 2000 o forestas catalogadas de utilidad pública. En este caso, el cambio de la actividad forestal a la actividad agrícola está sujeto a régimen de autorización.

D. Reglas aplicables en materia de evaluación ambiental de planes y programas

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015 establece una serie de reglas aplicables mientras no se realiza la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Así, hasta que no se realice dicha adaptación se aplican las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan la normativa básica, pero de acuerdo con las reglas que establece sobre: la denominación de procedimientos, documentos y actos administrativos derivados de estos; los plazos de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas que realiza el órgano ambiental en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, los plazos para formular el informe ambiental estratégico en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y el plazo para formular la declaración ambiental estratégica en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria; la resolución de discrepancias entre el órgano competente para aprobar un plan o programa y el órgano ambiental; y la información del documento ambiental estratégico en la evaluación ambiental estratégica. Además, en lo referente a la evaluación ambiental estratégica del planeamiento urbanístico, se establecen unas reglas concretas.

2.2. La modificación del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales

Siguiendo una trayectoria legislativa dirigida a acrecentar la protección de los animales en Cataluña, el Parlamento ha aprobado la Ley 22/2015, de 29 de julio, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, para incluir prohibir los espectáculos de circo con actuaciones de animales salvajes.

El apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Protección de los Animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008, prohíbe ya el uso de animales en espectáculos u otras actividades si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o tratos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que los contemplan. Pero con la modificación que introduce la Ley 22/2015 se añade una letra al apartado 1 del artículo 6 del texto refundido de la Ley de Protección de los Animales, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2008, con el siguiente texto: “g) Los espectáculos de circo con animales pertenecientes a la fauna salvaje”.

Esta modificación, conforme a la disposición final segunda, entrará en vigor a los dos años de su publicación en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Además, esta ley establece, en la disposición final primera, que el Gobierno ha de crear un observatorio del uso de animales en circos en que estén representados los ámbitos

científico y académico de la etología, la veterinaria y la zoología; los colegios profesionales de abogados y de veterinarios; los circos que tengan espectáculos con animales que no queden expresamente prohibidos por la presente ley; y las entidades de protección de los animales. La función de este observatorio es evaluar las condiciones en que se utilizan animales, en los casos en que no está prohibido por la presente Ley, a fin de comprobar que son respetuosas con su bienestar, de acuerdo con la legislación aplicable. Este observatorio de evaluación del uso de animales en circos debe crearse en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la disposición final primera. Dicha disposición entró en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

2.3. La financiación del sistema de transporte público de Cataluña

La Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de Cataluña, tiene por objeto “regular la financiación del sistema de transporte público de Cataluña” (art. 1). Se trata de una ley que se enmarca en la disposición adicional octava de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la Movilidad, que establece lo siguiente: “En el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente ley, el Gobierno debe presentar un proyecto de ley de financiación del transporte público, de la movilidad sostenible y de promoción del uso de los combustibles alternativos que regulen su marco organizativo”. Su ámbito de aplicación es el sistema de transporte público de Cataluña, configurado por el conjunto de servicios de transporte terrestre de viajeros, por carretera y ferroviario, urbanos e interurbanos, de competencia de la Administración de la Generalitat y de las administraciones locales de Cataluña (art. 2).

Esta ley tiene por objetivo establecer un marco normativo integrado e integral del conjunto de sistemas de financiación del transporte público urbano e interurbano para ofrecer respuesta a las necesidades sociales derivadas de la situación de crisis económica, desempleo endémico, salarios bajos, precariedad social y laboral, desequilibrios territoriales y cambios en la actividad y a la necesidad de reducir los niveles de contaminación. El objetivo de esta ley ha de lograrse con la aplicación de una serie de principios y criterios de ordenación y gestión: uso óptimo del conjunto de los recursos de movilidad; prioridad de los medios de transporte públicos colectivos; garantía de accesibilidad, flexibilidad, eficiencia y equidad social; reequilibrio territorial; integración de los distintos sistemas de transporte y garantía de

interoperabilidad e intermodalidad; priorización de la propulsión eléctrica, las fuentes de energía renovables y los combustibles fósiles de bajas emisiones contaminantes en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea relativa a los combustibles más limpios para el transporte; optimización de los impactos socioeconómicos, con la maximización del beneficio común, teniendo en cuenta la capacidad económica de los usuarios; evaluación de las alternativas de movilidad existentes entre un origen y un destino determinados y priorización de las que sean más eficientes en términos ambientales y económicos; y consideración de los efectos externos de los diversos modos de transporte público colectivo.

Esta ley incorpora los efectos externos negativos de la movilidad a la estructura de costes y traslada su repercusión económica a los usuarios, aplicando el principio de quien contamina o congestiona paga. Así, establece que las tarifas deben incorporar el coste de los efectos externos negativos de cada servicio de movilidad con la anticipación necesaria para lograr que el sistema sea sostenible. Además, especifica que en la evaluación de todos los elementos que intervienen en la prestación de los servicios de movilidad deben incluirse los efectos externos negativos que se generen, incluidas las emisiones de dióxido de carbono y la contaminación atmosférica local.

Del contenido de esta ley cabe destacar el capítulo II, en el cual se dispone la creación de nuevas figuras impositivas o recargos en impuestos municipales destinados a la financiación del transporte público. Entre estas figuras tributarias, se pueden establecer progresivamente: a) un recargo sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas que grave la actividad de las superficies comerciales medianas y grandes, las galerías comerciales y otras concentraciones o áreas comerciales urbanas y de servicio; b) una contribución especial para el transporte sostenible en grandes concentraciones vinculadas a la celebración de determinados actos; c) tributos sobre la congestión y la contaminación derivados de la utilización del vehículo privado; d) impuestos o tasas sobre el impacto ambiental causado por los vehículos a motor en la modalidad de utilización potencial de vehículos a motor con domicilio en Cataluña, así como por los vehículos a motor en la modalidad de circulación en itinerancia y turística; e) un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los supuestos y dentro de los límites establecidos por la legislación sobre haciendas locales; f) un recargo o un aumento del tipo impositivo sobre el impuesto correspondiente, según proceda, sobre la matriculación o la puesta en circulación de vehículos a motor, limitado a determinadas

categorías en función de la incidencia medioambiental²⁷.

2.4. Algunas normas reglamentarias destacables

A. El desarrollo reglamentario de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno

El Decreto 190/2015, de 25 de agosto, realiza un nuevo desarrollo reglamentario de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, que regula los aspectos relativos a las instalaciones y los aparatos de iluminación exterior y a los de interior con afectación al exterior, con respecto a la contaminación lumínica que pueden producir. El Decreto se configura como una herramienta para minimizar la contaminación lumínica, velar por la preservación del entorno, evitar consumos energéticos innecesarios y promover tecnologías más eficientes, para avanzar hacia un modelo catalán de consumo de energía que sea sostenible, de acuerdo con los objetivos del Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2010.

El objeto del Decreto es regular las características de las instalaciones y los aparatos de iluminación con respecto a la contaminación lumínica que pueden producir, de acuerdo con los criterios que establece la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. Las finalidades que se persiguen son mantener al máximo posible la claridad natural del cielo, evitar la contaminación lumínica y prevenir los efectos nocivos sobre los espacios naturales y el entorno urbano, y mejorar la eficiencia energética de la iluminación artificial con el fin de promover el ahorro de energía y de recursos naturales.

En cuanto a su contenido, el Decreto establece el régimen regulador de la iluminación; fija los criterios para implantar la zonificación de Cataluña según el grado de protección del medio nocturno; establece el procedimiento de aprobación de los puntos de referencia para dotar de mayor protección las zonas de especial valor astronómico o natural; introduce la nueva figura de los espacios con un cielo nocturno de calidad; y establece las características de las instalaciones y de los aparatos de iluminación exterior, su funcionamiento, el régimen estacional y horario de usos del alumbrado y el

²⁷ Artículo 18.

contenido del programa de mantenimiento²⁸. También establece el régimen de intervención administrativa, prevé las competencias del departamento de la Generalitat competente en materia de medio ambiente y de los ayuntamientos, fija la documentación de que han de disponer las instalaciones de iluminación exterior de las actividades sometidas al régimen de prevención y control ambiental, los estudios de impacto ambiental de los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, y los estudios ambientales estratégicos de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica, y establece las especificaciones relativas a la contratación administrativa²⁹, así como varios mecanismos de promoción del cumplimiento de los preceptos del Decreto³⁰.

B. El Reglamento del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Reglamento del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. Se trata del Decreto 178/2015, de 4 de agosto, que tiene por objeto el desarrollo normativo para la aplicación de los impuestos creados por la Ley 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida para la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear³¹. El Decreto se ha dictado al amparo de la habilitación competencial reconocida en el artículo 203.5 del Estatuto de Autonomía, en el ejercicio de la potestad reglamentaria que otorga al Gobierno el artículo 68 del Estatuto de Autonomía, así como de la

²⁸ Capítulo II. Régimen regulador de la iluminación.

²⁹ Capítulo III. Régimen de intervención administrativa.

³⁰ Disposición adicional primera: aplicación de las mejores técnicas disponibles. Disposición adicional segunda: acuerdo y convenios respecto de las instalaciones excluidas. Disposición adicional tercera: instrucciones técnicas y guías.

³¹ Los artículos 1.1 c) y 21 a 30 de la citada Ley son objeto del Recurso de inconstitucionalidad núm. 4292-2015, promovido por el Presidente del Gobierno, admitido a trámite mediante Providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2015 (BOE, núm. 176, de 24 de julio de 2015).

habilitación al Gobierno contenida en la disposición final primera de la Ley 12/2014 para que dicte las disposiciones necesarias para desplegar la Ley.

El Reglamento se estructura en tres títulos. El título I se dedica al impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial y regula el plazo, la forma de presentación y el ingreso de la autoliquidación. El título II hace referencia al impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y establece el procedimiento de determinación de la base imponible del tributo, así como el plazo y la forma de presentación e ingreso de la autoliquidación. Finalmente, el título III se dedica al impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, regulando los pagos fraccionados, los plazos y la forma de presentación e ingreso.

C. Las entidades colaboradoras de medio ambiente

El Gobierno ha aprobado el Decreto que regula la habilitación, el funcionamiento y la supervisión de las entidades colaboradoras de medio ambiente, entidades privadas que realizan actuaciones de control, inspección y vigilancia ambiental de la contaminación generada por instalaciones y actividades bajo la supervisión de la Administración. Se trata del Decreto 60/2015, de 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medio ambiente, que tiene por objeto regular la habilitación, el funcionamiento y la supervisión de este tipo de entidades en los ámbitos sectoriales de medio ambiente siguientes: prevención y control ambiental de las actividades; prevención de la contaminación atmosférica; prevención de la contaminación acústica; comercio de emisión de gases con efecto invernadero; sistemas comunitarios de gestión y auditoría ambiental; etiquetado ecológico de productos y servicios; prevención de la contaminación del suelo; caracterización de los residuos y de los lixiviados; control y vigilancia del estado de las masas de agua y gestión de los vertidos; y cualquier otro ámbito material de medio ambiente en que la legislación aplicable prevea funciones de inspección y control. El Decreto desarrolla la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, con el fin de dotar a la Administración ambiental de Cataluña de un sistema de habilitación de entidades colaboradoras a las que pueda atribuir o delegar funciones de inspección y control que le son propias.

El texto unifica criterios y procedimientos de habilitación, actualmente dispersos en diferentes normativas sectoriales, de acuerdo con los requisitos de capacidad técnica, independencia, imparcialidad y responsabilidad, como razón imperiosa de preservar el interés general que suponen el medio ambiente y la salud y calidad de vida de las personas, y simplifica los trámites administrativos.

D. Nueva regulación de las competencias sobre organismos modificados genéticamente

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto por el que se establecen medidas para el ejercicio de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de organismos modificados genéticamente (en adelante, OMG). Se trata del Decreto 62/2015, de 28 de abril, que tiene por objeto regular el régimen de intervención en materia de autorización, de utilización confinada y de liberaciones voluntarias con finalidad distinta de la comercialización de OMG en todo lo que es competencia de la Generalitat de Catalunya; establecer medidas de coordinación de la vigilancia y el control de las actividades autorizadas, de la comercialización de OMG autorizados o de productos que los contengan, de las liberaciones voluntarias sin fines comerciales complementarios que, en su caso, sean exigidas dentro del procedimiento de autorización para la comercialización, y de la utilización confinada cuando su objeto sea la posible incorporación a medicamentos de uso humano y veterinario, así como a otros productos y artículos sanitarios y a aquellos que por el hecho de afectar al ser humano pueden suponer un riesgo para la salud; regular el régimen sancionador por las infracciones cometidas en el ejercicio de las actividades autorizadas; y crear y regular el Registro de OMG de Cataluña³². El Decreto se enmarca en el artículo 4 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de OMG, con arreglo al cual corresponde a las comunidades autónomas ejercer las funciones reguladas en la misma ley en relación con las actividades de utilización confinada de OMG, otorgar las autorizaciones de liberación voluntaria de estos organismos para cualquier otro propósito distinto de su comercialización, y desempeñar las funciones de vigilancia, control e imposición de sanciones por las infracciones cometidas en la realización de las actividades anteriores y también sobre la comercialización de OMG autorizados o de

³² Artículo 1.

productos que los contengan, las liberaciones voluntarias sin fines comerciales complementarios que, en su caso, sean exigidas dentro del procedimiento de autorización para la comercialización, y la utilización confinada cuando su objeto sea la posible incorporación a medicamentos de uso humano y veterinario, así como a otros productos y artículos sanitarios y a aquellos que por afectar al ser humano pueden suponer un riesgo para la salud humana. Además, la disposición adicional tercera de la misma ley estatal determina que las administraciones competentes crearán registros públicos.

El Decreto responde a la necesidad de ampliar las competencias para dar cobertura a toda la tipología de OMG que se pueda presentar, reforzar las funciones de la Comisión Catalana de Bioseguridad, agilizar el procedimiento de autorización y crear un registro de OMG que garantice el cumplimiento de la normativa. A estos efectos, con esta normativa se redefine el concepto de OMG existente en el Decreto 152/2003, de 23 de junio —que queda derogado por la aprobación del Decreto 62/2015—, para incluir a cualquier ser vivo, excepto los seres humanos, sobre el que el material genético se haya modificado artificialmente. También se establece el régimen de intervención para las actividades de utilización confinada y de las liberaciones voluntarias con finalidad distinta de la comercial con OMG, sean de carácter biológico, biomédico, industrial, agronómico o de cualquier otra tipología o finalidad. El Decreto también modifica las funciones de la Comisión Catalana de Bioseguridad y la faculta como entidad competente para autorizar o denegar las actividades de utilización confinada y las liberaciones voluntarias con finalidad distinta de la comercialización con cualquier OMG, y crea la Comisión Técnica de OMG como órgano de apoyo y asesoramiento de la Comisión Catalana de Bioseguridad. Por otro lado, el Decreto crea el Registro de OMG en Cataluña con el objeto de recoger la información relativa a la utilización confinada y a las liberaciones voluntarias con finalidad distinta de la comercialización y el cultivo comercial de OMG.

E. La nueva regulación del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña

En el ámbito de los residuos, el Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña. Se trata del Decreto 98/2015, de 9 de junio, que tiene por objeto regular la composición y el

funcionamiento del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña como órgano de asesoramiento y de participación del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña en relación con las acciones de esta en materia de prevención, reducción y gestión de los residuos.

El Decreto pretende recoger en un único texto legal el régimen de funcionamiento del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña para evitar la dispersión normativa, derogando la Orden MAH/394/2006, de 27 de julio, mediante la cual fue creado como órgano de asesoramiento y de participación del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña en relación con las acciones de esta en materia de prevención, reducción y gestión de los residuos.

El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña es un órgano colegiado y sus miembros son nombrados por el consejero o consejera con competencias en materia de medio ambiente, a propuesta de las respectivas entidades y organizaciones, por un período de tres años. En cuanto a sus funciones, el Decreto prevé, además de las previstas en el artículo 65.3 del texto refundido de la Ley de Residuos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, las siguientes: la deliberación intersectorial y la formulación de propuestas de actuación dirigidas al Consejo de Dirección de la Agencia y relacionadas con la prevención, la reducción y la gestión de los residuos; la elaboración de informes sobre asuntos que sean encomendados expresamente por el Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña en materia de prevención y gestión de residuos; y la promoción de procesos participativos en materia de prevención y gestión de residuos (art. 3).

F. La regulación de las condiciones de reutilización de efluentes producidos en bodegas y almazaras

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Decreto que regula y actualiza la gestión de los efluentes producidos en bodegas y almazaras en Cataluña. Se trata del Decreto 198/2015, de 8 de septiembre, de gestión agrícola de los efluentes producidos en bodegas y almazaras, que tiene por objeto la regulación de la aplicación en el suelo con fines agrícolas de los efluentes producidos en Cataluña como consecuencia de la actividad de bodegas y almazaras. La elaboración del Decreto responde a la necesidad de adaptación a los cambios normativos que se han producido a lo largo de los últimos

años y a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. El Decreto se ha realizado en concordancia con el Decreto 136/2009, de 1 de septiembre, de aprobación del programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables en relación con la contaminación de nitratos que proceden de fuentes agrarias y de gestión de las deyecciones ganaderas, y deroga el Decreto 290/1994, de 29 de septiembre, sobre normas adicionales de autorización de almazaras, que reguló por primera vez la gestión agrícola de los efluentes generados en almazaras de Cataluña.

Con esta normativa se establece el procedimiento de gestión de los efluentes de bodegas y almazaras mediante la aplicación agrícola tanto de las aguas como de los residuos. Para compatibilizar la aplicación agrícola de los efluentes producidos en bodegas y almazaras con el buen estado de las masas de aguas superficiales y subterráneas, el Decreto establece las cantidades que se pueden aplicar de los diferentes efluentes, las condiciones, las distancias a respetar y las épocas de aplicación, así como otros requisitos técnicos en la gestión y el seguimiento de su aplicación que incluyen un plan de controles. Se prevé igualmente que, cuando estos efluentes sean considerados residuos, se seguirá lo que determina el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.

2.5. Otras normas de interés

Además de las reseñadas, en el período objeto de análisis se han aprobado otras normas de interés desde la perspectiva ambiental. Destacamos, en primer lugar, en materia de protección de espacios naturales, el Decreto 211/2015, de 22 de septiembre, por el que se declara el Parque Natural Capçaleres del Ter i del Freser y se modifican los límites de los espacios del Plan de Espacios de Interés Natural Capçaleres del Ter i del Freser, y Serra Cavallera. Su objeto es establecer un régimen de protección y desarrollo específico para ese territorio mediante su declaración como parque natural, para hacer compatible la conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento ordenado de sus recursos y la actividad de sus habitantes, en el marco de lo que regula la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales. Asimismo, el Decreto establece los órganos de gobierno del Parque Natural Capçaleres de la Ter i del Freser, en los que participan tanto las administraciones públicas directamente implicadas en el territorio

como instituciones y representantes de la sociedad civil. También cabe destacar el Proyecto de Decreto de ampliación del Parque Natural del Alt Pirineu y el espacio homónimo del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), publicado el 17 de julio de 2015, el en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*. Los sectores de ampliación propuestos tienen por objetivo mejorar la coherencia de las diferentes figuras de protección existentes, la representación de hábitats y especies en el espacio protegido y aspectos de delimitación mal resueltos en la declaración del Parque Natural del año 2003. Además, paralelamente se ha publicado el Proyecto de Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya para ampliar el espacio de la Red Natura 2000 Alt Pallars. También cabe destacar el Acuerdo del Gobierno GOV/139/2015, de 25 de agosto, por el que se ha aprobado la rectificación de la delimitación de los espacios de la Red Natura 2000 que se relacionan en el anexo 1; el Decreto 191/2015, de 25 de agosto, por el que se rectifica la delimitación de varios espacios del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre; el Acuerdo del Gobierno GOV/145/2015, de 1 de septiembre, por el que se da cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 8 de octubre de 2014, dictada en el recurso contencioso-administrativo 507/2010, interpuesto contra el Decreto 146/2010, de 19 de octubre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola y de las reservas naturales parciales de la Font Gropa y la Rierada-Can Balasc; y el Acuerdo GOV/155/2015, de 29 de septiembre, por el que se da cumplimiento a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de marzo de 2009, dictadas en los recursos contencioso-administrativos 590/2006 y 591/2006, interpuestos contra el Decreto 290/2006, de 4 de julio, por el que se delimita el Paraje Natural de Interés Nacional de Pinya de Rosa y se modifica el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural, para ampliar el espacio de Pinya de Rosa.

En segundo lugar, en el ámbito de la contaminación acústica, también deben destacarse una serie de resoluciones por las que se aprueban diferentes mapas estratégicos de ruido (Resolución TES/2081/2015, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat I, constituida por los municipios de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern; Resolución TES/2009/2015, de 2 de septiembre, por la que se aprueba el Mapa

Estratégico de Ruido de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Vallès Occidental II, constituida por los municipios de Terrassa y Viladecavalls; Resolución TES/1967/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueba el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat II, constituida por los municipios de Viladecans, Gavà y Sant Boi de Llobregat; Resolución TES/783/2015, de 17 de abril, por la que se aprueba el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Vallès Occidental I, constituida por los municipios de Sabadell, Barberà del Vallès y Badia del Vallès; Resolución TES/642/2015, de 30 de marzo, por la que se aprueba el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de ámbito supramunicipal Barcelonès I, constituida por los municipios de Barcelona y Sant Adrià de Besòs). También cabe destacar el inicio del procedimiento de declaración de una zona de especial protección de calidad acústica (ZEPQA) en el municipio del Papiol (el anuncio de exposición pública se publicó el 22 de mayo en el *Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya*).

En tercer lugar, cabe mencionar la Resolución TES/1523/2015, de convocatoria de subvenciones para el fomento del ecoetiquetaje y el ecodiseño. Las actuaciones subvencionables en el marco de esta convocatoria son la obtención o la renovación del distintivo de garantía de calidad ambiental o de etiqueta ecológica de la Unión Europea y la implantación de procesos de diseño y desarrollo ambiental (ecodiseño).

2.6. Algunas actuaciones de interés desde la perspectiva de la protección del medio ambiente

A. La Estrategia Catalana de Ecodiseño para una Economía Circular y Ecoinnovadora

Mediante el Acuerdo GOV/80/2015, de 2 de junio, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Catalana de Ecodiseño para una Economía Circular y Ecoinnovadora (Ecodiscat). Esta estrategia ha sido promovida por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad como una estrategia interdepartamental de ecodiseño en sintonía con las exigencias actuales y con otras estrategias catalanas como, por ejemplo, la Estrategia Cataluña 2020: Acuerdo estratégico para la competitividad de la economía catalana y la mejora de la ocupación (ECAT 2020), en cuyo apartado 6.6, “Eje estratégico para impulsar la transición hacia una economía más eficiente en el uso de recursos”, se define la Estrategia Catalana de Ecodiseño (Ecodiscat) como una herramienta para

promover una forma sostenible de producir y consumir, incentivar la incorporación del diseño ecológico en el proceso productivo, impulsar la transversalidad del diseño ecológico en universidades y centros de investigación y la transferencia de conocimiento, e incentivar el consumo de productos y servicios sostenibles. Se trata de un tipo de diseño que incorpora criterios ambientales para conseguir productos más sostenibles y seguros y menos tóxicos, con un consumo menor de recursos y de materias primas.

La Estrategia define las líneas básicas a seguir en los próximos años con el objetivo de: crear un marco estable para impulsar el diseño de productos y servicios que integren criterios ambientales y fomentar, así, modelos de consumo y producción más sostenibles en Cataluña; establecer sinergias con todos los actores implicados en los sistemas productivos (empresas, universidades, centros de investigación, diseñadores, consultores, consumidores, etc.), implicándolos en la implementación de la Estrategia; y establecer la organización administrativa interna necesaria para que la Estrategia tenga una incidencia transversal y significativa sobre todo el mercado catalán. Esta organización debe permitir evitar duplicidades entre administraciones y, mediante la coordinación, maximizar las actuaciones que se lleven a cabo: adecuarse a los nuevos requerimientos normativos exigidos desde la Unión Europea. La finalidad principal del Ecodiscat es contribuir a la eficiencia en el uso de los recursos y a reducir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, los servicios y las actividades. También busca ayudar a mejorar la competitividad de empresas y organizaciones con el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de nuevos productos y servicios eficientes y sostenibles. También establece actuaciones para incrementar la oferta de productos y servicios más sostenibles y actuaciones para fomentar la demanda. El desarrollo de esta estrategia se llevará a cabo a través de planes de acción anuales interdepartamentales aprobados por la Comisión Interdepartamental de Ecodiseño, los cuales concretarán los instrumentos y las medidas prioritarios para alcanzar sus objetivos.

Traemos a colación también el Acuerdo del Gobierno GOV/73/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia de Impulso a la Economía Verde y a la Economía Circular. Los departamentos de Economía y Conocimiento, de Empresa y Empleo, de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural, y de Territorio y Sostenibilidad han elaborado esta estrategia con el objetivo de promover la

sostenibilidad ambiental, económica y social como eje estratégico para alcanzar la recuperación económica, mejorar la competitividad, crear empleo y reducir los riesgos ambientales.

B. La planificación estratégica de los espacios naturales protegidos de Cataluña

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha elaborado el Plan Estratégico de los Espacios Naturales Protegidos de Cataluña, que establece la hoja de ruta para la declaración de nuevos parques para los próximos 10 años. Este plan responde a la voluntad del Gobierno de garantizar la preservación de aquellos espacios que, atendiendo a un primer criterio estrictamente biológico y ecológico de diversidad, singularidad y fragilidad, son una muestra representativa del patrimonio natural de mayor calidad de Cataluña. Los objetivos principales de este plan son: definir la situación actual; identificar los principales retos de futuro, el objetivo a conseguir y las actuaciones a realizar; y alinear a todos los agentes responsables, creando ambiente de coordinación y colaboración activa entre los principales actores. Este plan se fundamenta en una serie de principios básicos: aplicar la gestión multifuncional como herramienta general de conservación; trabajo en equipo del propio Servicio de Espacios con el resto de la Dirección, el Departamento y las otras unidades; el órgano rector debe ser capaz de coordinar, canalizar o guiar el trabajo de otros profesionales del mundo de la agronomía, la gestión forestal, la gestión cinegética o la turística; y alinear los intereses del territorio afectado por un espacio de protección especial con las necesidades de conservación y mejora de su medio natural.

C. El Programa Voluntario de Compensación de Gases de Efecto Invernadero

Mediante el Acuerdo GOV/123/2015, de 28 de julio, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado el Programa Voluntario de Compensación de Gases de Efecto Invernadero para acercar los proyectos de compensación a sus compradores y generar un impacto positivo a nivel local. Este programa tiene como objetivo fomentar la transición hacia una economía baja en carbono a través de la realización en Cataluña de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al alcance del Programa, en el anexo se determina que los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero que se pueden desarrollar en el marco del Programa deben

cumplir las siguientes características: las actividades llevadas a cabo han de afectar a las emisiones originadas en los sectores difusos (quedan excluidos los proyectos que tienen lugar en las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión); los proyectos deben ser adicionales, es decir, su realización no es consecuencia de la necesidad de cumplir la normativa vigente; la reducción de emisiones lograda con el proyecto debe ser cuantificable y verificable; y los proyectos deben desarrollarse dentro del territorio de Cataluña.

Los proyectos desarrollados en el marco del Programa pretenden alcanzar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la realización de proyectos domésticos. Las emisiones reducidas por estos proyectos podrán ser compradas por otras personas físicas o jurídicas, llevando así a cabo lo que se conoce como “compensación de emisiones”³³.

D. El nuevo Plan de Fomento del Turismo de Naturaleza en los Espacios Protegidos de Cataluña

En julio de 2015 se publicó el Plan de Fomento del Turismo de Naturaleza en los Espacios Protegidos de Cataluña, elaborado por la Dirección General de Turismo con la colaboración de la Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad. El Plan es el instrumento que define la estrategia para impulsar el ecoturismo en Cataluña, especialmente en los espacios naturales protegidos, y tiene como finalidad activar el llamado ecoturismo, ofreciendo un conjunto de productos y de servicios que se puedan desarrollar en un marco de consenso con la gestión de los espacios naturales. El modelo de gestión del turismo de naturaleza en los espacios naturales protegidos de Cataluña que se plantea en este plan se fundamenta en cinco principios básicos: contribuye a conservar el patrimonio; mejora el desarrollo local; ofrece una experiencia de alta calidad a los visitantes; atrae a un visitante interesado en los valores de los espacios naturales protegidos y la cultura; y fomenta la cooperación entre los gestores de los espacios naturales protegidos y el sector turístico. En este sentido, el Plan propone una serie de actuaciones estructuradas en seis grandes ejes: favorecer un uso turístico sostenible y responsable de los recursos naturales y culturales utilizados por el turismo

³³ Se define como “el mecanismo voluntario por el cual una organización puede descontar de su inventario una cantidad determinada de toneladas que se han evitado gracias a la implementación de un proyecto en otra organización”.

de naturaleza; optimizar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos de los espacios naturales protegidos utilizados para el turismo de naturaleza; consolidar una oferta diversa y competitiva con proveedores corresponsables y de calidad; atraer la demanda creciente de turismo de naturaleza, tanto nacional como internacional, con una estrategia integral y diferenciada de comunicación y promoción; innovar y hacer más transversal la planificación del turismo de naturaleza y garantizar un seguimiento adecuado; y fomentar marcos de colaboración estables y efectivos entre agentes públicos y privados que aglutinen y refuercen el sector del turismo de naturaleza. El Plan se ha focalizado en los once espacios siguientes: Parque Natural del Cap de Creus; Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà; Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter; Parque Natural de Els Ports; Parque Natural del Delta de l'Ebre; Parque Natural de la Serra de Montsant; Parque Natural del Cadí-Moixeró; Parque Natural del Alt Pirineu; Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa; Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici; y Espacios Naturales del Delta del Llobregat.

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. La reforma del Codi penal: novetats en la regulació dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i en els delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. 1.2. Novetats en l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat. A. La nova Llei de parcs nacionals. B. La modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. 1.3. Novetats en la regulació dels forests. 1.4. Novetats pel que fa a responsabilitat ambiental. 1.5. La modificació de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 1.6. El problema associat al projecte Castor i l'adopció de mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears. 1.7. Algunes normes reglamentàries destacables. A. El nou desplegament reglamentari de la Llei de costes. B. Novetats pel que fa a aigües. C. Novetats pel que fa a residus. D. La modificació del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, per a la seva adaptació a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. E. Novetats pel que fa a producció ecològica. F. L'aprovació del Pla Marítim Nacional de resposta davant de la contaminació del medi marí. 1.8. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. L'impacte de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. A. Activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc. B. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. C. La modificació de la Llei 6/1988, de 3 de març, forestal de Catalunya. D. Regles aplicables pel que fa a avaluació ambiental de planes i programes. 2.2. La modificació del Text refós de la Llei de protecció dels animals. 2.3. El finançament del sistema de transport públic de Catalunya. 2.4. Algunes normes reglamentàries destacables. A. El desplegament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. B. El Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrògens a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. C. Les entitats col·laboradores de medi ambient. D. Nova regulació de les competències sobre organismes modificats genèticament. E. La nova regulació del Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya. F. La regulació de les condicions de reutilització d'efluents produïts en cellers i almàsseres. 2.5. Altres normes d'interès. 2.6. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient. A. L'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora. B. La planificació estratègica dels Espais Naturals Protegits de Catalunya. C. El Programa Voluntari de Compensacions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle. D. El nou Pla de Foment del Turisme de Naturalesa en els Espais Protegits de Catalunya.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

Durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 d'octubre de 2014 al 30 de setembre de 2015), en l'àmbit estatal, ha prosseguit l'onada de reformes legislatives pel que fa a medi ambient que ens acompanya en els últims anys. A l'aprovació de la reforma de la Llei de costes, de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei de responsabilitat mediambiental, i de la nova Llei d'avaluació ambiental, hi ha seguit ara l'aprovació de la Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals, i de les lleis de modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (la Llei 33/2015, de 21 de setembre i la Llei 21/2015, de 20 de juliol, respectivament), sense oblidar que també hi ha hagut algunes modificacions puntuals en les lleis de responsabilitat ambiental i de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (per mitjà de la Llei 33/2015, de 21 de setembre). També la reforma del Codi penal, que ha dut a terme la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, és molt important des del punt de vista ambiental,

tenint en compte que suposa la introducció de novetats importants en la regulació dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i dels delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics. I el mateix cal dir del Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears —convalidat pel Ple del Congrés dels Diputats el 16 d'octubre de 2014—, que fa front a la problemàtica associada al projecte d'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor, causant d'una sèrie de terratrèmols en la zona de Castelló.

Així mateix, s'han aprovat altres normes amb rang de llei que incideixen en aquest aspecte. Entre les quals, destaquem la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; la Llei 33/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat; la Llei 2/2015, de 25 de març, de mesures tributàries urgents dirigides a compensar els efectes de les inundacions en la conca del riu Ebre, i la Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs.

Com és habitual, també s'han aprovat en aquests mesos diverses normes reglamentàries pel que fa a àmbits sectorials diversos (costes, aigües, residus, producció ecològica...), moltes amb el caràcter de legislació bàsica pel que fa a medi ambient, encara que potser el més destacable sigui, amb relació a les costes, l'aprovació del Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de costes; pel que fa a les aigües, el Reial decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l'article 112 bis del Text refós de la Llei d'aigües i es regula el cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica en les demarcacions intercomunitàries, i el Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, i, pel que fa a residus, el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, i el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

En l'àmbit internacional, mereixen especial menció l'Instrument de revocació de la declaració que ha efectuat Espanya al Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics

persistents, fet a Estocolm el 22 de maig de 2001; l'Acord entre el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'educació, la ciència i la cultura (UNESCO) relatiu a la creació del "Centre Internacional sobre Reserves de la Biosfera Mediterrànies, dues vores unides per la seva cultura i la seva naturalesa" com a centre de categoria 2 patrocinat per la UNESCO, fet a Barcelona el 5 d'abril de 2014; i l'entrada en vigor de les esmenes dels annexos II i III del Protocol sobre zones especialment protegides i la diversitat biològica al Mediterrani, adoptades a Istanbul el 6 de desembre de 2013 mitjançant la Decisió IG.21/6.

En un altre ordre de coses, en aquest període ha tornat a posar-se de manifest la conflictivitat competencial entre Estat i comunitats autònomes. Bona prova en són, entre altres, els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Parlament de Catalunya, pel Govern de la Generalitat de Catalunya i per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Socialista del Congrés dels Diputats contra diversos preceptes del Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears³⁴; els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Govern basc, pel Consell de Govern del Principat d'Astúries, pel Govern de Catalunya i pel Consell de Govern d'Andalusia contra diversos preceptes de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència³⁵; el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel Govern de Catalunya contra determinats preceptes de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de

³⁴ Recursos d'inconstitucionalitat núm. 7848-2014, contra els articles 2 i 4, apartats 1 i 3, del Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears; núm. 7874-2014, contra el Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, excepte contra la seva disposició addicional segona; i núm. 21-2015, contra el Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears, respectivament. Tots admesos a tràmit mitjançant la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 3 de febrer de 2015 (BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2015).

³⁵ Recursos d'inconstitucionalitat núm. 264-2015, contra els articles 4; 5; 7; 92; 98; 102 i 107, apartats 2, 6, 12 i 13; i annex I de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; núm. 275-2015, contra l'article 124 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; núm. 283-2015, contra els articles 4 i, per connexió, l'annex I; 5; 6; 7. Dos; 59.3; 71; 72; 73; 92.3 i 4; 98.5; 101; 102; 114.Set; 116.Dos; 117.Dos; i les disposicions finals primera i segona .3, .4, .6 i .7 de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència; núm. 292-2015, contra els articles 4, 5, 6, 7 i annex I de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, respectivament. Tots han estat admesos a tràmit per el Ple del Tribunal Constitucional mitjançant la Providència de 17 de febrer de 2015 (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2015).

telecomunicacions³⁶, i el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel president del Govern contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear³⁷. Així mateix, el Govern de Catalunya ha plantejat un conflicte positiu de competències contra determinats preceptes del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus³⁸.

Quant a les normes reglamentàries en tràmit, destaquem que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha obert un període d'informació pública que va finalitzar el 30 de juny de 2015, sobre l'esborrany de Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

En l'àmbit de la planificació, el més destacable és l'inici del segon cicle de planificació hidrològica (2015-2021), basat en la revisió dels plans hidrològics aprovats en el primer cicle de planificació (2009-2015), per complir la Directiva marc d'aigües. En els últims mesos s'han sotmès a consulta pública les propostes de projecte de revisió dels plans hidrològics de les diferents demarcacions hidrogràfiques per al cicle 2015–2021. També estan en procés d'elaboració, en compliment de la Directiva 2007/60 d'avaluació i gestió dels riscos d'inundació, els plans de gestió del risc d'inundació. En els últims mesos també s'han sotmès a consulta pública els projectes de plans de gestió del risc

³⁶ Recurs d'inconstitucionalitat núm. 709-2015, contra els articles 34.3, 5 i 6; 35.4 i 7; 45.4; 65; 69.j).6 i, per connexió, articles 73 i 74 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, admès a tràmit mitjançant Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2015 (BOE núm. 58, de 9 de març de 2015).

³⁷ Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4292-2015, contra els articles 1.1 c) i 21 a 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear, admès a tràmit mitjançant la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 21 de juliol de 2015 (BOE núm. 176, de 24 de juliol de 2015).

³⁸ Conflicte positiu de competència núm. 5958-2014, contra els articles 8.1 i 2, 30 i 35.1.a).i) i la disposició final primera del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, admès a tràmit mitjançant la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 4 de novembre de 2014 (BOE núm. 270, d 7 de novembre de 2014).

d'inundació corresponents a diferents demarcacions hidrogràfiques. I, en aplicació de la Llei d'avaluació ambiental, s'han sotmès a avaluació ambiental, i ja s'han formulat diferents declaracions ambientals estratègiques conjuntes dels plans hidrològics i de gestió del risc d'inundació de diferents demarcacions hidrogràfiques per al període 2016-2021 (per exemple, de Ceuta i Melilla, del Xúquer, del Segura, de l'Ebre, del Cantàbric Oriental i del Cantàbric Occidental).

D'altra banda, mitjançant la Resolució de 31 d'octubre de 2014, de la Subsecretaria, es publica l'Acord del Consell de Ministres de 24 d'octubre de 2014, pel qual s'aprova el Pla Estatal de Protecció Civil per a Emergències per Incendis Forestals.

Finalment, destaquem també que en el període objecte d'examen, mitjançant la Resolució de 16 de juliol de 2015, de parcs nacionals, s'ha publicat l'aprovació per la UNESCO de dues reserves de la biosfera espanyoles: Reserva de la Biosfera del Massís d'Anaga, Tenerife, i Reserva de la Biosfera Transfronterera Meseta Ibèrica (Espanya i Portugal).

1.1. La reforma del Codi penal: novetats en la regulació dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i en els delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics

L'aprovació de la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, suposa la introducció d'importants novetats en la regulació dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i dels delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics.

Quant als delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, s'han modificat, dins del capítol III del títol XVI, els articles 325, 326, 327 i 328 del CP i s'ha introduït un nou precepte, l'article 326 bis³⁹. L'article 325, que incloïa el tipus bàsic del delicte

³⁹ Com adverteix HAVA GARCÍA, E., "Modificaciones en delitos ambientales", en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), *Comentario a la reforma penal de 2015*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 655-656, la reforma d'aquests preceptes no es preveia ni en l'Avantprojecte aprovat pel Consell de Ministres l'11 d'octubre de 2012, ni en el Projecte del Govern que va ser publicat en el *Butlletí Oficial de les Corts Generals* quasi un any després, el 4 d'octubre de 2013, sinó que es va introduir mitjançant la presentació per part del Grup Parlamentari Popular de diverses esmenes davant de la Comissió de Justícia, justificades en la necessitat d'adaptar la regulació dels delictes ambientals al que disposa la Directiva 2009/123/CE del Parlament europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la que es modifica la Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminació de bucs, i en la de realitzar una adequada incorporació de determinats preceptes de la Directiva 2008/99/CE, a pesar que la reforma per mitjà de la Llei orgànica 5/2010 en els delictes ambientals ja va ser expressament justificada en la necessitat

ecològic, recull, en el seu apartat primer, un nou delictes en què es tipifiquen agressions contra el medi ambient suposadament menys greus que les que preveu ara el seu apartat segon (actual art. 325, encara que amb algunes modificacions importants) i que no estaven tipificades com a delictes⁴⁰. D'acord amb l'article 325.1, "S'ha de castigar amb les penes de presó de sis mesos a dos anys, multa de deu a catorze mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps d'un a dos anys el qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general protectores del medi ambient, provoqui o realitzi directament o indirectament emissions, abocaments, radiacions, extraccions o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o depòsits, en l'atmosfera, el sòl, el subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, inclosa l'alta mar, amb incidència fins i tot en els espais transfronterers, així com les captacions d'aigües que, per si mateixos o conjuntament amb altres, causi o pugui causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes". L'article 325.2 recull, d'una banda, com a tipus bàsic la realització de les mateixes conductes enumerades en l'article 325.1 si aquestes conductes, "per si mateixes o conjuntament amb altres, poden perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals", supòsits en què s'ha d'imposar una pena de presó de 2 a 5 anys, multa de 8 a 24 mesos i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps d'un a tres anys. Com es pot apreciar, les conductes són les mateixes tant en l'apartat primer de l'article 325 com en l'apartat segon, de manera que les diferències entre l'un i l'altre consisteixen en el resultat que s'exigeix en cada cas (bé causar o poder causar danys substancials en la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes; bé poder perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals) i també en les penes previstes, més grans en el segon cas⁴¹. D'altra banda, l'article 325.2, en el paràgraf segon, recull un tipus agreujat, en els supòsits en què "s'hagi creat un risc de greu perjudici per a la salut de les persones", per als quals es preveu la pena de presó en la meitat superior, i es pot arribar fins a la superior en grau.

L'article 326 del CP també en resulta substancialment modificat. Aquest precepte recull ara els delictes relacionats amb la gestió il·legal de residus, anteriorment recollits en l'article 328. El nou article 326 recull quasi literalment el contingut de les lletres b) i c)

d'incorporar aquesta última directiva a l'ordenament espanyol.

⁴⁰ HAVA GARCÍA, E., "Modificaciones...", *op. cit.*, p. 657.

⁴¹ HAVA GARCÍA, E., "Modificaciones...", *op. cit.*, p. 659, adverteix dels dubtes que poden suscitar-se en la determinació dels casos en què ha d'aplicar-se l'art. 325.2 i no l'article 325.1, ja que poden donar-se molts casos en què ambdós preceptes puguin aplicar-se al supòsits de fet, i proposa algunes solucions per a aquests casos.

de l'article 3 de la Directiva 2008/99/CE. En l'apartat primer, l'article 326 castiga amb les penes previstes en l'article 325, en els seus respectius supòsits, "els qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, recullen, transporten, valoren, transformen, eliminen o aprofiten residus, o no controlen o vigilen adequadament tals activitats, de manera que causen o poden causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, o a animals o plantes, mort o lesions greus a les persones, o poden perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals". I, en el seu apartat segon, configura com a tipus subsidiari de l'anterior (expressament diu el precepte "fora del supòsit a què es refereix l'apartat anterior") la conducta consistent a traslladar "una quantitat no menyspreable de residus, tant en el cas d'un com en el de diversos trasllats que apareguin vinculats, en algun dels supòsits als quals es referix el Dret de la Unió Europea relatiu als trasllats de residus", que ha de ser castigada amb una pena de tres mesos a un any de presó, o multa de sis a divuit mesos i inhabilitació especial per a professió o ofici per temps de tres mesos a un any⁴².

El nou article 326 bis regula les conductes que amb anterioritat a la reforma de 2015 es tipificaven en l'article 328.2. Aquest precepte castiga amb les penes previstes en l'article 325, en els seus respectius supòsits, els "qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, duguin a terme l'explotació d'instal·lacions les quals es realitzi una activitat perillosa o en les que s'emmagatzemin o utilitzin substàncies o preparats perillosos de manera que causin o puguin causar danys substancials a la qualitat de l'aire, del sòl o de les aigües, a animals o plantes, mort o lesions greus a les persones, o puguin perjudicar greument l'equilibri dels sistemes naturals".

Les circumstàncies agreujants es preveuen ara en l'article 327 del CP i poden aplicar-se en totes les conductes incloses en els articles 325, 326 i 326 bis, i en aquest cas són castigades amb la pena superior en grau. Aquestes circumstàncies són les següents: a)

⁴² Per a HAVA GARCÍA, E., "Modificaciones...", *op. cit.*, p. 662, el caràcter expressament subsidiari del precepte "obliga a entender que sólo resultará aplicable el tipo del artículo 326.2 CP en aquellos supuestos en que no se produzca ninguno de los desvalores de resultado previstos de forma alternativa en el número primero, lo que conduce a dos posibilidades interpretativas, igualmente insatisfactorias: considerar que el precepto penal carece de un núcleo esencial de desvalor de injusto, que lo permita diferenciar de la mera infracción de normas extrapenales (lo que implicaría su inconstitucionalidad), o bien interpretar que sólo serán típicas aquellas conductas que creen un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, único desvalor de resultado previsto en el artículo 325 CP que es omitido en el artículo 326.1 CP (lo que sería aún peor, por llevar a consecuencias penológicas absolutamente incoherentes –castigar con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses lo que en el artículo 325 puede llegar a sancionarse con penas privativas de libertad de más de siete años–)".

que la indústria o activitat funcioni clandestinament, sense haver obtingut la preceptiva autorització o aprovació administrativa de les seves instal·lacions; b) que s'hagin desobeït les ordres expresses de l'autoritat administrativa de correcció o suspensió de les activitats tipificades en l'article anterior; c) que s'hagi falsejat o ocultat informació sobre els aspectes ambientals; d) que s'hagi obstaculitzat l'activitat inspectora de l'Administració; e) que s'hagi produït un risc de deteriorament irreversible o catastròfic; i f) que es produeixi una extracció il·legal d'aigües en període de restriccions.

L'article 328 del CP inclou ara el règim de la responsabilitat penal de les persones jurídiques per la comissió de delictes contra el medi ambient i els recursos naturals, que també resulta modificat. Quan, d'acord amb el que estableix l'article 31 bis del CP, una persona jurídica sigui responsable dels delictes que recull el capítol III del títol XVI, se li imposaran les penes següents: multa d'un a tres anys, o del doble al quàdruple del perjudici causat si la quantitat resultant és més elevada, si el delicte comès per la persona física té prevista una pena de més de dos anys de privació de llibertat; o bé multa de sis mesos a dos anys, o del doble al triple del perjudici causat si la quantitat resultant és més elevada, en la resta dels casos. Així mateix, aquest precepte manté la possibilitat d'aplicar, a més, algunes de les penes que recullen les lletres b) a g) de l'apartat 7 de l'article 33, atenint-nos a les regles que estableix l'article 66 bis.

Pel que fa als delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics, inclosos en el capítol IV del títol XVI del Codi penal, la Llei orgànica 1/2015 modifica els articles 332, 334, 335, 337 i 337 bis. Cal destacar que mentre que la modificació dels delictes relatius a la protecció de la flora i de la fauna es va introduir també per la via d'esmenes proposades pel Grup Parlamentari Popular, en el cas del delicte de maltractament animal, la reforma es preveia ja en l'Avantprojecte i en el Projecte de reforma del Codi penal⁴³. La modificació dels articles 332 i 334 es justifica, igual que la reforma dels delictes que recullen els articles 325 a 328 del CP, en una adequada transposició de la Directiva 2008/99/CE. L'article 332 recull ara com a conducta punible tallar, talar, arrancar, recol·lectar, adquirir, posseir o destruir espècies protegides de flora silvestre, o traficar-hi, o amb les seves parts, derivats o amb els seus propàguls, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, llevat que la conducta afecti una quantitat insignificant i no tingui conseqüències rellevants per a

⁴³ Vid. MARQUÈS I BANQUÉ, M., "Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos", en QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.), *Comentario...*, *op. cit.*, p. 667.

l'estat de conservació de l'espècie. També preveu com a conducta punible destruir o alterar-ne greument l'hàbitat, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general. Les principals novetats són dues: l'ampliació de l'objecte material del delict, atesa la substitució del terme d'"espècie amenaçada" pel "d'espècies protegides de flora silvestre", de més abast⁴⁴; i la introducció del càstig de la comissió per imprudència greu. La pena prevista amb caràcter general per a aquest delict és de presó de 6 mesos a 2 anys o multa de 8 a 24 mesos, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps de 6 mesos a 2 anys, si bé s'imposa en la seva meitat superior si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció. I, en el cas que els fets es cometin per imprudència greu, s'imposa una pena de presó de tres mesos a un any o multa de quatre a vuit mesos, i inhabilitació especial per a la professió o ofici per temps de tres mesos a dos anys.

Quant a l'article 334, les modificacions són semblants a les que recull l'article 332, per la qual cosa se substitueix la referència a "espècies amenaçades" per la d'"espècies protegides" de fauna silvestre i també es preveu el càstig per la comissió per imprudència greu. D'acord amb aquest precepte, "S'ha de castigar amb la pena de presó de sis mesos a dos anys o multa de vuit a vint-i-quatre mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar o pescar per temps de dos a quatre anys qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general: a) caci, pesqui, adquireixi, posseeixi o destrueixi espècies protegides de fauna silvestre; b) trafiqui amb aquestes, les seves parts o derivats; o, c) realitzi activitats que impedeixin o dificultin la seva reproducció o migració. La mateixa pena s'ha d'imposar a qui, contravenint les lleis o altres disposicions de caràcter general, destrueixi o alteri greument el seu hàbitat". Si es tracta d'espècies o subespècies catalogades en perill d'extinció, la pena s'imposarà en la seva meitat superior. Si els fets s'han comès per imprudència greu, "s'ha d'imposar una pena de presó de tres mesos a un any o multa de quatre a vuit mesos i, en tot cas, inhabilitació especial per a la professió o ofici i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar o pescar per temps de tres mesos a dos anys".

L'article 335 del Codi penal també ha estat modificat per introduir, en l'apartat segon, el marisqueig furtiu com una modalitat típica equiparada a la caça i pesca furtives⁴⁵. La

⁴⁴*Vid.* MARQUÈS I BANQUÉ, M., "Delitos...", *op. cit.*, p. 669.

⁴⁵ MARQUÈS I BANQUÉ, M., "Delitos...", *op. cit.*, p. 672.

pena prevista és la de multa de quatre a vuit mesos i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de caçar, pescar o realitzar activitats de marisqueig per temps d'un a tres anys, a més de les penes que poden correspondre-li, si és el cas, per la comissió del delicte previst en l'article 335.1. Si aquestes conductes "produeixen greus danys al patrimoni cinegètic d'un terreny sotmès a règim cinegètic especial o a la sostenibilitat dels recursos en zones de concessió o autorització marisquera o aquícola, s'ha d'imposar la pena de presó de sis mesos a dos anys i inhabilitació especial per a l'exercici dels drets de caçar, pescar, i realitzar activitats de marisqueig per temps de dos a cinc anys".

Finalment, la Llei orgànica 1/2015 també introdueix canvis significatius en relació amb la protecció dels animals domèstics. Les novetats més rellevants són la incorporació de la falta de maltractament de l'article 632 del CP com a subtipus atenuat de l'article 337 del CP; la configuració de l'antiga falta d'abandó d'animals de l'article 631.2 del CP com a delicte lleu de l'article 337 bis; i la desaparició de la conducta prevista com a falta en l'antic article 631.1. CP, en relació amb la custòdia d'animals ferotges i perjudicials⁴⁶.

1.2. Novetats en l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat

Durant aquest últim any han tingut lloc importants novetats normatives pel que fa a patrimoni natural i biodiversitat. D'una banda, s'ha aprovat la Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals, que deroga l'anterior Llei 5/2007, de 3 d'abril, de la Xarxa de Parcs Nacionals. De l'altra, s'ha modificat, mitjançant la Llei 33/2015, de 21 de setembre, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat.

A. La nova Llei de parcs nacionals

La Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals, té com a objecte "establir el règim jurídic bàsic per assegurar la conservació dels parcs nacionals i de la Xarxa que formen, així com els diferents instruments de coordinació i col·laboració" (art. 1). Es tracta d'una llei que s'ha dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.23 CE, que atribueix a l'Estat la competència pel que fa a legislació bàsica de protecció del medi

⁴⁶ MARQUÉS I BANQUÉ, M., "Delitos...", *op. cit.*, p. 672. Sobre la reforma dels delictes relatius als animals domèstics, *vid. pp.* 672-683.

ambient —amb l'excepció dels articles 32 i 13, adoptats a l'empara dels articles 149.1.13 i 149.1.29 CE, respectivament—, i amb un contingut predominantment competencial⁴⁷ que, tot i que conté alguns canvis, no introdueix modificacions rellevants en el model preexistent⁴⁸.

Entre els canvis més destacables, cal esmentar l'augment de la superfície mínima necessària perquè un espai pugui ser declarat parc nacional en el territori peninsular; les modificacions en el procediment de declaració dels parcs nacionals; la inclusió d'una clàusula indemnitzatòria per qualsevol privació en els béns i drets patrimonials, en particular sobre usos i aprofitaments reconeguts en l'interior d'un parc nacional en el moment de la seva declaració; l'ampliació fins al 2020 de la moratòria per a la supressió de la caça i altres activitats incompatibles en els parcs nacionals; l'establiment d'alguns organismes i instruments jurídics per afavorir la coordinació efectiva de la Xarxa de Parcs Nacionals en el seu conjunt i facilitar la tasca de coordinació que correspon a l'Estat (Comitè de Col·laboració i Coordinació de Parcs Nacionals, comissions de coordinació, intervenció de l'Administració de l'Estat en cas de conservació desfavorable d'un parc nacional, declaració de l'estat d'emergència per catàstrofe mediambiental...) ⁴⁹; i l'especial atenció dedicada a les mesures per al desenvolupament territorial sostenible de les àrees d'influència socioeconòmica.

Des de la perspectiva local, conté diverses referències a les entitats locals i als municipis en diversos dels seus preceptes, que podríem agrupar en diferents blocs. Un primer bloc estaria constituït pels articles que preveuen la participació dels municipis en el procediment de declaració de parc nacional i d'elaboració dels instruments de planificació. Amb relació al procediment de declaració de parc nacional, la Llei 30/2014 preveu, després de l'aprovació inicial de la proposta de declaració, el seu sotmetiment a tràmit d'informació pública per les respectives comunitats autònomes i l'emissió dels

⁴⁷ LÓPEZ RAMÓN, F., "Trayectoria del régimen jurídico de los parques nacionales a España", *Revista Ambient@*, núm. 106, 2014 (URL: <<http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Lopez14.htm>>, últim accés, 20 d'octubre de 2015), p. 89.

⁴⁸ LOZANO CUTANDA, B., "Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: las cinco reformas clave", Gómez-Acebo&Pombo (URL: <<http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/ley-30-2014-de-3-de-diciembre-de-parques-nacionales-las-cinco-reformas-clave.pdf>>, últim accés, 20 d'octubre de 2015).

⁴⁹ Sobre aquesta qüestió, *vid.* PALLARÈS SERRANO, A., "Estudio sobre el aumento del papel coordinador del Estado en la reforma de la regulación de los parques nacionales", *Revista Vasca de Administración Pública*, núm. 99-100, 2014, pp. 2289-2312.

informes dels departaments ministerials i de les administracions autonòmiques afectades, i també dels municipis que aportin territori a la proposta de parc nacional (art. 8.5). També es preveu l'informe dels ens locals afectats en el procediment de declaració en el cas de parcs nacionals declarats sobre aigües marines sota sobirania o jurisdicció nacional (art. 8.8). Respecte a la participació dels ens locals en els procediments d'elaboració dels instruments de planificació, en relació amb el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals, que l'instrument de planificació i ordenació dels parcs nacionals més elevat, la Llei únicament estableix que per a la seva elaboració i revisió "s'ha de seguir un procediment de participació pública, amb la intervenció, almenys, de les comunitats autònomes i dels patronats dels parcs nacionals" (art. 19.3) i no preveu expressament la intervenció dels ens locals. Cal tenir present, no obstant això, que en els patronats hi estan representats els ens locals afectats. Quant als plans rectors d'ús i gestió, que són l'instrument de planificació ordinària i que prevalen sobre el planejament urbanístic, la Llei preveu que les administracions competents des del punt de vista urbanístic informin preceptivament aquests plans abans de la seva aprovació o revisió (art. 20.2). A més, el procediment d'elaboració d'aquests plans "ha d'incloure necessàriament tràmits d'audiència als interessats, informació pública i consulta a les administracions públiques afectades, així com els informes previs del Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals i del Patronat" (art. 20.7).

Un altre grup de preceptes que regulen els òrgans consultius, de col·laboració i de coordinació dels parcs nacionals, preveuen la participació dels ens locals en alguns d'aquests òrgans. En primer lloc, en el Patronat, que s'ha de constituir en cada parc nacional per vetllar pel compliment de les normes establertes en interès dels parcs nacionals i com a òrgan de participació de la societat en els mateixos parcs, hi han d'estar representades "les administracions públiques implicades, incloent-hi els ens locals afectats, els agents socials de la zona, els agents que exerceixin activitats econòmiques en el si del parc nacional, els propietaris públics i privats de terrenys inclosos en el parc i les institucions, associacions i organitzacions relacionades amb el parc o els fins del qual concordin amb els objectius de la present llei" (art. 24.1). En segon lloc, també es preveu la participació dels municipis en el Consell de la Xarxa de Parcs Nacionals, òrgan de caràcter consultiu, adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Tot i que la Llei remet al reglament la regulació de la composició i funcionament d'aquest òrgan, presidit pel ministre d'Agricultura,

Alimentació i Medi Ambient, determina que n'han de formar part "l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes en el territori de les quals estiguin situats els parcs nacionals, una representació dels municipis inclosos en les àrees d'influència socioeconòmica dels parcs nacionals, els presidents dels patronats, representants del Comitè Científic, una representació de les associacions sense ànim de lucre i amb àmbit d'actuació estatal els fins de la qual estiguin vinculats a la protecció del medi ambient i de les organitzacions agràries, pesqueres, empresarials i sindicals de més implantació en el territori nacional, així com una representació de les associacions de propietaris de terrenys inclosos en els parcs nacionals" (art. 27.3).

En un altre ordre de coses, els municipis tenen una especial consideració en les àrees d'influència socioeconòmica, que són territoris constituïts pels termes municipals que aporten terreny al parc nacional, i també, excepcionalment, per altres directament relacionats, quan així es consideri en les lleis declaratives, en què les administracions públiques han de dur a terme polítiques actives per al seu desenvolupament. La Llei estableix que les administracions públiques, en l'aplicació dels règims de suport a les àrees d'influència socioeconòmica, "han de tenir en especial consideració, tant qualitativament com quantitativament, els municipis que aporten terrenys als parcs nacionals" (art. 31.3). En tot cas, l'establiment d'aquestes àrees d'influència socioeconòmica comporta una atenció singular de les administracions públiques a assegurar la integració del parc nacional amb la mateixa àrea d'influència, i a potenciar les activitats econòmiques sostenibles lligades a la dinamització de l'entorn del parc nacional. A tal efecte, les administracions públiques, de forma coordinada, han de dur a terme les actuacions que siguin necessàries.

Finalment, la Llei, que dedica un títol —el X— a la projecció i participació social, també apel·la a la importància de la intervenció dels municipis en aquest àmbit. Els parcs nacionals, com posa de manifest el preàmbul, "han de constituir un referent no solament en la seva forma de fer conservació sinó també en la seva manera de gestionar-se i d'implicar la societat en les seves activitats, de manera que es busca integrar sectors i col·lectius en les activitats de gestió així com implicar i donar suport a la població local resident, amb l'objectiu d'aconseguir la cohesió territorial de les àrees on estan situats". En aquest context, les activitats de gestió "han de prevaler la integració dels municipis afectats, sectors i col·lectius, i conformar-se com un instrument per a la cohesió territorial de les àrees on estan situades. En particular, s'ha

de prestar especial atenció a la implicació social, a la participació dels municipis afectats en la presa de decisions i al suport singularitzat a les poblacions locals residents en l'interior dels parcs nacionals" (art. 35).

A pesar d'aquestes previsions en relació amb els municipis incloses en la Llei 30/2014, més àmplies que les que recull l'anterior Llei, l'Associació de Municipis amb Territori en Parcs Nacionals (AMUPARNA) ha criticat aquesta Llei i ha reivindicat un paper més gran dels municipis en la gestió dels parcs nacionals. En definitiva, encara podria haver-hi una participació dels municipis més gran i més directa en aquest àmbit.

B. La modificació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat

La Llei 33/2015, de 21 de setembre, que va entrar en vigor el passat 7 d'octubre, ha modificat la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Aquesta Llei, tal com posa de manifest el preàmbul, té com a objecte millorar certs aspectes de l'aplicació d'aquesta Llei, especialment pel que fa a la gestió dels espais protegits. Així mateix, té com a objecte garantir la correcta aplicació del dret internacional i la incorporació de la normativa de la Unió Europea en l'ordenament jurídic espanyol. En aquest sentit, les modificacions que introdueix van en la línia d'adequar-se, d'una banda, al que disposa la Convenció de Nacions Unides sobre el dret del mar, de Montego Bay, de 10 de desembre de 1982, ratificada per Espanya el 20 de desembre de 1996, i en el Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització, ratificat per Espanya el 3 de juny de 2014 i en el Reglament (UE) núm. 511/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relatiu a les mesures de compliment dels usuaris del dit Protocol en la Unió, ja que la Unió Europea també és part contractant del dit Protocol, i també perfeccionar la incorporació de la Directiva d'hàbitats i de la Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d'aus) en el nostre ordenament jurídic. També es persegueix incorporar en el nostre ordenament els principals objectius de l'Estratègia de la Unió Europea sobre la biodiversitat fins al 2020. Amb aquest fi, s'inclouen entre els principis de la Llei, per primera vegada, els d'evitar la pèrdua neta de biodiversitat, i també la prevenció dels problemes conseqüència del canvi climàtic, que s'inclou igualment com un dels deures de les

administracions públiques en l'article 5.

Entre les novetats més significatives que s'introdueixen, destaquem, en primer lloc, que s'especifiquen les competències que corresponen a l'Administració General de l'Estat pel que fa a la gestió del medi marí, tenint en compte la recent jurisprudència constitucional (en especial, la Sentència 87/2013, d'11 d'abril).

En segon lloc, s'escomet la simplificació i l'agilització dels instruments per al coneixement i planificació del patrimoni natural i de la biodiversitat, regulats en el títol I de la Llei 42/2007. Així, es duen a terme modificacions en relació amb l'Inventari espanyol de patrimoni natural i la biodiversitat, els informes anuals sobre l'estat del patrimoni natural i de la biodiversitat i el Pla Estratègic Estatal de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

En tercer lloc, s'introdueix un nou capítol III en el títol I, relatiu a l'Estratègia estatal d'infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològica. Aquesta Estratègia ha de ser elaborada de forma conjunta per l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, i té com a objectiu "marcar les directrius per a la identificació i conservació dels elements del territori que componen la infraestructura verda del territori espanyol, terrestre i marí, i perquè la planificació territorial i sectorial que realitzin les Administracions públiques permeti i asseguri la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes, la mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, la desfragmentació d'àrees estratègiques per a la connectivitat i la restauració d'ecosistemes degradats" (nou art. 15.2 Llei 42/2007).

En quart lloc, en la mesura que aquesta Llei té com a objecte fonamental millorar la gestió dels espais protegits i, en particular, dels inclosos en la Xarxa Natura 2000, per garantir-ne la millor protecció i adequació als fins per als que han estat declarats, inclou una sèrie de modificacions en aquesta línia. Així, per exemple, es disposa que les obres necessàries per a la conservació i restauració dels espais protegits, per a la conservació d'espècies amenaçades, o per a la conservació d'hàbitats en perill de desaparició, es puguin declarar d'interès general de l'Estat; i s'inclouen una sèrie de mesures destinades a fomentar el suport de les administracions públiques a les activitats econòmiques compatibles amb la conservació dels espais naturals protegits que contribueixin al benestar de les poblacions locals i a la creació d'ocupació.

En cinquè lloc, una de les novetats més rellevants de la Llei és el nou capítol VI del títol

II, relatiu a la incorporació de la informació ambiental en el Registre de la Propietat. En efecte, la informació perimetral referida als espais naturals protegits, la Xarxa Natura 2000, els forests d'utilitat pública i els dominis públics de les vies pecuàries i zones incloses en l'Inventari espanyol de zones humides, integrades en l'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat, ha de quedar sempre incorporada al sistema d'informació geogràfica de la finca registral, d'acord amb el que disposa la legislació hipotecària. Amb aquesta mesura es persegueix dotar de més seguretat jurídica els aspectes relacionats amb el règim de propietat dels espais protegits, per la qual cosa la informació perimetral referida a aquests espais ha de tenir el seu reflex en el Registre esmenat. De la mateixa manera, també es preveu que el Cadastre Immobiliari tingui accés a la dita informació ambiental de conformitat amb la seva normativa reguladora. Amb independència d'altres instruments o llocs electrònics d'informació mediambiental que puguin establir les comunitats autònomes en el marc de les seves competències, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha de mantenir actualitzat un servei de mapes en línia, que permeti identificar i delimitar els àmbits espacials protegits, i també la importació de les seves dades per ser contrastats amb les finques registrals en l'aplicació gràfica del sistema informàtic registral únic.

Finalment, també s'introdueixen algunes modificacions que afecten la prevenció i el control de les espècies exòtiques invasores, a la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera, i al Fons per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat; i s'inclouen una sèrie de modificacions destinades a l'adaptació de la normativa nacional al Protocol de Nagoya sobre l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de la seva utilització, i altres encaminades a reforçar la responsabilitat de les administracions públiques pel que fa a la conservació de la biodiversitat, que regula el títol III.

1.3. Novetats en la regulació dels forests

La Llei 21/2015, de 20 de juliol, que ha entrat en vigor el 21 d'octubre, modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, amb el fi, com posa de manifest el preàmbul, de "tenir el millor instrument possible per a la gestió sostenible de les masses forestals espanyoles", tenint en compte que han transcorregut més de deu anys des de la seva aprovació i que convé millorar i adaptar determinats aspectes de la regulació, i que, a més, cal ajustar-se al que disposen les sentències de Tribunal Constitucional 49/2013,

de 28 de febrer, 84/2013, de 13 d'abril i 97/2013, de 23 d'abril.

Són moltes i diverses les modificacions introduïdes per aquesta Llei en l'ordenació jurídica dels forests. Entre les més significatives, destaquem, en primer lloc, la consideració, com un nou principi inspirador d'aquesta Llei, dels forests com a infraestructures verdes, en sintonia amb la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions COM (2013) 249 final, de 6 de maig de 2013, "Infraestructura verda: millora del capital natural d'Europa", ja que constitueixen uns sistemes naturals prestadors de serveis ambientals de primer ordre. A més, la norma perfecciona l'equilibri entre els tres pilars de la gestió forestal sostenible: l'econòmic, l'ecològic i el social.

En segon lloc, la Llei reconeix el concepte de funcionalitat dels forests, ja que els forests, independentment de la seva titularitat, exerceixen una funció social rellevant, tant com a font de recursos naturals i suport d'activitats econòmiques com perquè són proveïdors de múltiples serveis ambientals, entre els quals, de protecció del sòl i del cicle hidrològic, de fixació del carboni atmosfèric, de dipòsit de la diversitat biològica, i com a elements fonamentals de la connectivitat ecològica i del paisatge.

En tercer lloc, quant a l'àmbit d'aplicació de la Llei, es determina que les plantacions d'espècies forestals de torn curt en règim intensiu sobre terrenys agrícoles han d'estar sotmeses a aquesta Llei durant la vigència dels torns d'aprofitament prèviament establerts, a menys que la comunitat autònoma decideixi expressament un període més curt; i és la seva titular qui, una vegada finalitzat el període, decideix sobre l'aprofitament del terreny, de manera que poden recuperar la seva condició anterior de terrenys dedicats a l'agricultura o la ramaderia.

En quart lloc, se sistematitzen les facultats i competències que corresponen a l'Administració General de l'Estat derivades del vigent marc constitucional, entre les quals s'inclouen, entre altres, la coordinació de l'elaboració i l'aprovació de les directrius sobre diferents aspectes de la lluita contra incendis forestals i el desplegament de mitjans estatals de suport a les comunitats autònomes. Així mateix, s'atribueixen a la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural la coordinació entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per a la preparació, estudi i activació de les qüestions pròpies de la política forestal espanyola; i es crea el Consell Forestal Nacional, com a òrgan consultiu del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient pel que fa a forests i polítiques forestals, que ha

d'informar, entre altres, les normes i plans d'àmbit estatal relatives a l'àmbit forestal. Presidit pel ministre, la seva composició, organització i funcionament es determinen reglamentàriament.

En cinquè lloc, la Llei estableix una classificació dels forests en diferents grups, primer segons la seva titularitat i a continuació per la seva afecció a un interès general, que és el factor determinant de les característiques de la gestió de què han de ser objecte. Respecte als forests públics, el seu ús privatiu se sotmet amb caràcter general al règim de concessió administrativa i el seu ús públic és lliure, però, en tot cas, ordenat, raó per la qual s'ha de preveure en l'instrument de gestió aplicable. Amb relació als forests privats, amplia el concepte de forests privats protectors. També es reforcen les disposicions que permeten la defensa del domini públic forestal pel que fa a recuperació possessòria, delimitació, adquisició preferent i drets de tanteig i retracte. No es modifica, en canvi, el règim d'inalienabilitat, imprescriptibilitat, inembargabilitat i absència de tributació.

En sisè lloc, s'escometa una simplificació de la planificació de la gestió forestal sostenible respecte dels forests de superfície reduïda, molt freqüents, per als quals un procediment d'ordenació o un pla tècnic individualitzat resulta molt costós i inabordable pels propietaris o gestors. D'aquesta manera, es preveu que l'adhesió a un model tipus de gestió forestal degudament aprovat pot reemplaçar els instruments individuals sempre que les comunitats autònomes ho permetin, i afavorir l'ordenació forestal mitjançant instruments flexibles i de baix cost per a forests petits. S'obre així la porta al fet que les comunitats autònomes puguin establir una sèrie de models tipus de gestió forestal per a cada una de les classes de forests que posseeixen en el seu territori i que consideren que, per les seves dimensions, la seva simplicitat estructural o per qualssevol altres raons, poden ser objecte d'un pla de gestió molt simple. Al mateix temps, es limita l'obligació legal de disposar d'un projecte d'ordenació, pla dasocràtic o un altre instrument equivalent als forests catalogats i els protectors, a causa dels valors forestals o naturals que posseeixen i que fan necessari aquest instrument específic. Igualment, les comunitats autònomes podran ampliar aquesta obligació als forests que considerin convenient.

En setè lloc, hi ha una novetat polèmica en relació amb el canvi d'ús forestal, ja que, si bé amb caràcter general es manté la prohibició expressa del canvi d'ús durant trenta anys en un terreny incendiat, s'afegeixen algunes excepcions. En efecte, amb caràcter

singular, les comunitats autònomes poden acordar excepcions a aquestes prohibicions sempre que, amb anterioritat a l'incendi forestal, el canvi d'ús estigui previst en un instrument de planejament prèviament aprovat; un instrument de planejament pendent d'aprovació, si ja hagués estat objecte d'avaluació ambiental favorable o, si no és aquesta exigible, si ja hagués estat sotmès al tràmit d'informació pública; o una directriu de política agroforestal que prevegi l'ús agrari o ramader extensiu de forests no arbrats en estat d'abandó. Així mateix, amb caràcter excepcional, les comunitats autònomes poden acordar el canvi d'ús forestal quan concórreguen raons imperioses d'interès públic de primer ordre que hauran de ser previstes mitjançant una llei, sempre que s'adoptin les mesures compensatòries necessàries que permetin recuperar una superfície forestal equivalent a la que s'ha cremat. Aquestes mesures compensatòries s'han d'identificar amb anterioritat al canvi d'ús en la mateixa amb la procedència del canvi d'ús. En el cas que aquestes raons imperioses de primer ordre corresponguin a un interès general de la Nació, és la llei estatal la que haurà de determinar la necessitat del canvi d'ús forestal. En cap cas convindrà apreciar aquesta excepció respecte de forests catalogats.

Finalment, la Llei regula les funcions d'extensió, policia i guarderia forestal; modifica el règim dels agents forestals i el règim sancionador en aquest àmbit; defineix les societats forestals, i crea el Registre Nacional de Cooperatives, Empreses i Indústries Forestals.

En un altre ordre de coses, la Llei 21/2015 modifica la disposició final 2a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, a fi d'autoritzar el Govern a elaborar i aprovar, abans del 31 de desembre de 2016, un text refós en el qual s'integrin, degudament regularitzades, aclarides i harmonitzades la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i les disposicions pel que fa a emissions industrials que contenen les normes amb rang de Llei; i incorpora una sèrie de preceptes relatius al transvasament Tajo-Segura, per complir la Sentència del Tribunal Constitucional, de 5 de febrer, que ha declarat la inconstitucionalitat de diverses disposicions relatives al transvasament Tajo-Segura, introduïdes mitjançant esmenes en el curs de la tramitació parlamentària de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, per haver-se omès el preceptiu tràmit d'audiència a la Comunitat Autònoma d'Aragó, previst en l'article 72.3

del seu Estatut d'autonomia, i així assegurar el funcionament ordinari i amb plena seguretat jurídica del transvasament Tajo-Segura.

1.4. Novetats pel que fa a responsabilitat ambiental

Pel que fa a responsabilitat ambiental, cal destacar, en primer lloc, la modificació de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, per la disposició final primera de la Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. Les modificacions que s'hi introdueixen són dues. En primer lloc, es modifica el paràgraf b) de l'article 2.1, en el qual s'especifica que s'entén per danys a les aigües, a fi de substituir la denominació d'"estat ecològic de les aigües marines", per la d'"estat mediambiental de les aigües marines", en coherència amb la regulació de l'article 7.4 de la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí. En segon lloc, es modifica l'article 45.3 per precisar que el silenci administratiu és negatiu, una vegada transcorregut el termini de sis mesos previst perquè l'autoritat competent dicti la resolució del procediment d'exigència de responsabilitat mediambiental i la notifiqui en termini, sense perjudici de l'obligació inexcusable de l'autoritat competent de resoldre.

En segon lloc, s'ha aprovat el Reial decret 183/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, aprovat mitjançant el Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre⁵⁰. Amb aquesta modificació es compleix el mandat que conté l'article 28.d) de la Llei —modificat per la Llei 11/2014, de 3 de juliol— i s'estableixen els operadors de les activitats que, atenint-se al seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell d'accidentalitat, queden exempts de constituir la garantia financera obligatòria i, per tant, de dur a terme l'anàlisi de riscos mediambientals [nou apartat 2.b) de l'article 37 del Reglament]. Ara bé, tal com recalca el preàmbul del Reial decret 183/2015, "l'exclusió d'activitats de l'annex III de la Llei de l'obligació de constituir garantia financera, no compromet els objectius fonamentals de la normativa de responsabilitat mediambiental, que és regular les

⁵⁰Aquest Reial Decret, d'acord con la seva disposició final 1a, té el caràcter de legislació bàsica de protecció del medi ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 149.1.23.a de la Constitució espanyola, excepte els apartats tres, quatre, sis, set, vuit, nou, deu, dotze, setze, i disset de l'article u i la disposició transitòria única, que constitueixen legislació bàsica d'assegurances dictada a l'empara de l'article 149.1.11.a de la Constitució espanyola. No tenen caràcter de legislació bàsica els apartats u i cinc de l'article únic.

obligacions dels operadors de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals que puguin causar. Així, independentment de l'obligació o no de constituir garantia financera, tots els operadors de l'annex III de la Llei continuen tenint una responsabilitat objectiva i il·limitada, de manera que els que ocasionen danys mediambientals o amenacen d'ocasionar-los, tenen l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per prevenir la seva causació o, quan el dany s'hagi produït, per tornar els recursos naturals danyats a l'estat en què es trobaven abans de la causació del dany". Així mateix, subratlla que "independentment de l'obligació o no de constituir garantia financera, tots els operadors de l'annex III de la Llei que ocasionen danys mediambientals o amenacen d'ocasionar-los, tenen l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per prevenir-ne la causació o, quan el dany s'hagi produït, per tornar els recursos naturals danyats a l'estat en què estaven abans de la causació del dany, per la qual cosa el caràcter eminentment objectiu i il·limitat, basat en els principis de prevenció i de qui contamina paga, del règim de responsabilitat mediambiental establert en la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, no es veu alterat per les exempcions a l'obligació de constituir garantia financera previstes en aquest reial decret".

Aquest reial decret, al marge del desplegament d'aquestes previsions de la Llei 26/2007, també fa altres modificacions del Reial decret 2090/2008, amb la finalitat de reduir les càrregues administratives als operadors i de simplificar els procediments administratius que s'hi preveuen, en especial el de determinació de la garantia financera. Així mateix, en aquesta línia de simplificació, s'elimina el requisit de la verificació de les anàlisis de riscos mediambientals per organismes acreditats, i se substitueix per la declaració responsable de l'operador que l'esmentada anàlisi i la constitució de la garantia financera s'han dut a terme d'acord amb els requisits establerts a tal efecte per la Llei i el reglament.

1.5. La modificació de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera

La Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, a la qual ja ens hem referit amb anterioritat, també ha introduït una modificació en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Concretament, es modifica l'article 13.2, i s'afegeix un nou paràgraf tercer en què es preveu que l'òrgan competent per atorgar

l'autorització administrativa a què se subjecta la construcció, el muntatge, l'explotació, el trasllat o la modificació substancial, de les instal·lacions en què es duen a terme alguna de les activitats incloses en el catàleg que recull l'annex IV de la Llei 34/2007 i que figuren en l'annex esmentat com a pertanyents als grups A i B, "ha de dictar la resolució que posi fi al procediment en el termini màxim de nou mesos. Transcorregut el dit termini sense haver-se notificat resolució expressa, es pot entendre desestimada la sol·licitud presentada". Aquesta modificació, com posa de manifest el preàmbul de la Llei 33/2015, es fa "a fi de seguir el model de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, en què els terminis són legislació bàsica de conformitat amb l'article 149.1.23 de la Constitució i s'aplica el silenci negatiu una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre previst en la llei".

1.6. El problema associat al projecte Castor i l'adopció de mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears

La problemàtica associada al projecte d'emmagatzematge subterrani de gas natural Castor, que va originar una sèrie de terratrèmols a la zona de Castelló, ha motivat l'aprovació del Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears —convalidat pel Ple del Congrés dels Diputats el 16 d'octubre de 2014. Aquesta instal·lació havia obtingut, mitjançant el Reial decret 855/2008, de 16 de maig, la concessió d'explotació per a l'emmagatzematge subterrani de gas natural, que establia, en cas de caducitat o extinció de la concessió, una compensació a l'empresa concessionària pel valor net comptable de les instal·lacions afectes a l'emmagatzematge subterrani sempre si continuen operatives, que no s'aplicava en cas de dol o negligència imputable a l'empresa concessionària, i en aquests cas la compensació es limitaria al valor residual de les instal·lacions, sense perjudici d'altres responsabilitats de l'empresa concessionària. El Tribunal Suprem, en la Sentència de 14 d'octubre de 2013, va considerar que aquesta clàusula que conté l'article 14 del Reial decret 855/2008 no era incompatible amb la gratuïtat de la reversió de les instal·lacions estipulada en l'article 29.1 de la Llei 34/1998, del sector d'hidrocarburs.

Mitjançant el Reial decret llei 13/2014, de 13 d'octubre, es pretén atendre la complexa situació tècnica existent a la instal·lació, especialment després de la renúncia a la concessió presentada pel seu titular, ESCAL UGS, SL, el 18 de juliol de 2014. Amb

aquest fi, s'acorda la hibernació de les instal·lacions⁵¹, l'extinció de la concessió d'explotació d'emmagatzematge subterrani de gas natural atorgada pel Reial decret 855/2008, i l'assignació de l'administració a la societat ENAGÁS TRANSPORT, SAU. Aquesta societat, durant l'esmentada hibernació, s'ha d'encarregar del manteniment i de l'operativitat, i també de l'elaboració dels informes tècnics necessaris per determinar la correcta operativitat de la instal·lació i, si és el cas, dels treballs necessaris per desmantellar-la. D'aquesta manera, ha d'assumir l'administració de la infraestructura i s'ha de subrogar en la posició d'ESCAL UGS, SL, mentre se'n decideixi la represa de l'activitat o el desmantellament. També ha de fer el pagament de la corresponent compensació a ESCAL UGS, SL, pel valor net de la inversió (1.350.729 milions d'euros). A més, es reconeixen a ENAGÁS TRANSPORT, SAU els drets retributius meritats per ESCAL UGS, SL en el període comprés entre l'acta de posada en servei provisional i la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, que han de comprendre una retribució financera, l'abonament els costos d'operació i el manteniment incorreguts i inclosos els costos de manteniment des de la suspensió de l'operació. Per raó de l'obligació de pagament prevista, ENAGÁS TRANSPORT SAU, és titular d'un dret de cobrament per part del sistema gasista, per l'import que resulti de l'aplicació dels costos enumerats, amb càrrec a la facturació per peatges d'accés i cànon del sistema gasista durant trenta anys fins a la total satisfacció de l'import corresponent al pagament estipulat en l'article 4.2 i 4.3 d'aquest reial decret llei. El dret de cobrament s'ha d'abonar amb independència que subsisteixi o no la hibernació de la instal·lació durant el termini fix de trenta anys i ha de començar a abonar-se a partir de la primera liquidació del sistema gasista corresponent a la facturació mensual per peatges d'accés i cànon meritats des de l'1 de gener de 2016. En definitiva, són els consumidors de gas els que han d'assumir el cost de la hibernació de les instal·lacions de gas del projecte

⁵¹ Durant aquesta hibernació, tal com disposa l'article 1 d'aquest reial decret llei, no es realitzarà cap injecció o extracció de gas natural en les estructures geològiques del subsòl que conformen l'emmagatzematge subterrani, si bé això no és aplicable a les quantitats d'hidrocarbur que siguin imprescindibles per garantir l'operativitat de les instal·lacions i equips o la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. Aquest mateix precepte preveu que, mitjançant l'acord del Consell de Ministres, es podrà dur a terme a la hibernació, prèvia valoració motivada dels resultats dels corresponents estudis tècnics i d'acord amb l'evolució de la demanda de gas natural. La decisió adoptada ha de garantir la sostenibilitat econòmica i financera del sistema gasista i ha de prevaler, de manera determinant, la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient. En aquesta disposició del Consell de Ministres s'ha d'acordar bé el desmantellament de l'emmagatzematge o, si és el cas, la integració de les instal·lacions en una concessió d'explotació de l'emmagatzematge que ha d'atorgar-se per un procediment de concurrència competitiva de conformitat amb la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i la seva normativa de desplegament, i correspon al sistema gasista els ingressos i costos prudents derivats d'ambdós.

Castor i, per tant, els obligats a pagar aquest cost amb càrrec als peatges establerts pel Ministeri.

D'altra banda, aquest reial decret llei incorpora algunes previsions relatives a la titularitat de les centrals nuclears. Tal com posa de manifest l'exposició de motius, a pesar que la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, modifica l'article 28 de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre energia nuclear, per disposar que el titular de l'autorització d'explotació d'una central nuclear sigui una única persona jurídica dedicada exclusivament a la gestió de centrals nuclears, comptant amb els mitjans materials, economicofinancers i personals necessaris, afegeix una disposició transitòria única a la Llei 25/1964, de 29 d'abril, en la qual s'estableix el procediment que han de seguir els titulars de les centrals nuclears que no compleixin els requisits establerts en la nova redacció de l'article 28 esmentat, per adaptar-se a aquests requisits, establint un termini per dur a terme aquesta adaptació, ha transcorregut en excés el dit termini i no s'ha pogut dur a terme l'adaptació que estableix la llei en les centrals nuclears en què hi ha diversos titulars, per no haver complert el que disposa aquesta disposició transitòria única⁵². Per això, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria única de la Llei 25/1964, en el cas que a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei (el 4 d'octubre de 2014), la titularitat de l'autorització d'explotació d'una central nuclear no s'hagués adaptat a les condicions establertes en els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 25/1964, de 29 d'abril, la dita titularitat s'entén transferida a l'entitat que a aquesta data tingui encomanada l'explotació de la central nuclear per part dels titulars de l'autorització d'explotació. Amb això queden sense efecte els plans d'adaptació que, si és el cas, es troben en tramitació. Amb aquest fi, els titulars de l'autorització d'explotació fins a aquesta data doten el nou titular amb els mitjans als quals e refereix l'apartat 2 de l'article 28. Amb independència del règim d'adopció d'acords que sigui ordinàriament d'aplicació al nou titular, les decisions relacionades amb la seguretat nuclear s'han d'adoptar per majoria simple. Finalment, s'introdueix una limitació de responsabilitat, d'acord amb la qual, "En tot cas i sense perjudici de la responsabilitat del titular d'una central nuclear, la responsabilitat pels danys i perjudicis derivats del seu funcionament no és exigible a entitats que no siguin copropietàries de la mateixa ni, si és el cas, als

⁵² Tal com posa de manifest l'exposició de motius del reial decret llei, aquesta mesura afecta totes les centrals nuclears, excepte a la central nuclear de Santa Maria de Garoña i la central nuclear de Cofrentes ja que són les úniques que compleixen el requisit de tenir un únic titular.

seus representants en els òrgans d'administració del referit titular" (disposició addicional 2a).

1.7. Algunes normes reglamentàries destacables

Durant l'últim any s'han aprovat nombroses normes reglamentàries des del punt de vista ambiental, per la qual cosa resulta impossible en el marc d'aquesta crònica analitzar-les o esmentar-les totes. Per aquest motiu, ens limitem a destacar-ne algunes.

A. El nou desplegament reglamentari de la Llei de costes

Després de la recent aprovació de la modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, el Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, aprova el Reglament general de costes, que deroga l'anterior Reglament general per al desplegament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, aprovat pel Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre⁵³. Aquest Reglament, com posa de manifest el preàmbul, "pretén ser un instrument eficaç en la consecució dels principis que van inspirar la modificació de la legislació de costes, a saber, la protecció del litoral i la seguretat jurídica", per la qual cosa, per aconseguir-ho, "revisa determinats aspectes del Reglament de 1989, com ara els criteris tècnics que resulten necessaris per a la determinació del domini públic maritimoterrestre, basats en un ampli debat tècnic i en l'experiència acumulada en la realització dels delimitacions" i, en relació amb el nou règim dels terrenys inundats, introdueix "garanties perquè els terrenys que, havent estat aiguamolls d'acord amb la

⁵³ D'acord amb la disposició final 1a, "La presente norma se aprueba al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.^a y 23.^a de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

No obstante, los capítulos V, VI y VII del título III, la disposición adicional octava, las disposiciones transitorias primera a quinta, decimotercera a decimoséptima, vigesimotercera, vigesimoquinta y vigesimosexta constituyen legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, y se dictan al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.18^a de la Constitución.

La disposición adicional séptima se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en materia de legislación civil por la cláusula 8^a del artículo 149.1 de la Constitución".

”.

legislació d'aigües, han deixat de ser-ho per buidament dels aqüífers, no queden exclosos del domini públic". Així mateix, regula la intervenció del Registre de la Propietat i el Cadastre en els delimitacions. Al mateix temps, desplega elements nous com són el règim aplicable als trams en situació de regressió greu, o els diferents requisits d'ocupació segons les platges siguin naturals o urbanes.

El nou Reglament de costes, l'objecte del qual és "el desplegament i l'execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, i la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, per a la determinació, protecció, utilització i policia del domini públic marítimament i especialment de la ribera del mar", s'estructura en un títol preliminar i sis títols, integrats per 228 articles i conté, a més, 10 disposicions addicionals i 26 disposicions transitòries. El títol preliminar (arts. 1 i 2) en determina l'objecte i les finalitats. El títol I (art. de 3 a 39) es destina a la regulació dels béns de domini públic maritimoterrestre i s'hi regulen qüestions com la classificació i definicions d'aquests béns, la indisponibilitat i les potestats de l'Administració, els delimitacions (objecte i principis generals, procediments, efectes i immatriculació de finques limítrofs amb el domini públic maritimoterrestre) i l'afectació i desafectació. El títol II (arts. de 40 a 59) se centra en les limitacions de la propietat sobre els terrenys que conté la ribera del mar per raons de protecció del domini públic maritimoterrestre (servitud de protecció, servitud de trànsit, servitud d'accés al mar i zona d'influència). El títol següent, el III (art. de 60 a 178), regula detalladament la utilització del domini públic maritimoterrestre, i regula amb detall el règim general d'utilització i el règim d'utilització de les platges, les reserves i adscripcions, les autoritzacions, les concessions i la pròrroga de les concessions atorgades a l'empara de la normativa anterior a la Llei 2/2013, de 29 de maig. El títol IV (arts. 179 a 190) preveu el règim economicofinancer de la utilització del domini públic maritimoterrestre. El títol V (art. del 191 a 219), les infraccions i les sancions. I, finalment, el títol VI (art. del 220 a 226), les competències administratives, tant de l'Administració General de l'Estat com de les comunitats autònomes i dels municipis.

B. Novetats pel que fa a aigües

L'activitat normativa sobre les aigües en el període objecte d'anàlisi ha estat intensa. Destaquem, en especial, cinc normes, encara que n'hi ha algunes més.

Cal esmentar, en primer lloc, el Reial Decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, que té caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, de conformitat amb el que disposa l'article 149.1.23.a de la Constitució —amb l'excepció de la disposició addicional tercera, dictada a l'empara de la competència exclusiva que atribueix a l'Estat l'article 149.1.22.a de la Constitució pel que fa a legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües discorren per més d'una comunitat autònoma. Aquest reial decret, que deroga l'anterior Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües, complementa la transposició al dret espanyol de la Directiva marc d'aigües; incorpora al dret espanyol la Directiva 2013/39/UE del Parlament europeu i del Consell de 12 d'agost, per la qual es modifiquen les directives 2000/60/CE i 2008/105/CE quant a les substàncies prioritàries en l'àmbit de la política d'aigües; incorpora les obligacions de la Decisió 2013/480/UE, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen, de conformitat amb la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, els valors de les classificacions dels sistemes de seguiment dels estats membres arran de l'exercici d'intercalibratge; trasllada la Directiva 2014/101/UE de la Comissió, de 30 d'octubre de 2014, que modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües; i incorpora les obligacions de la Decisió d'execució (UE) 2015/495 de la Comissió, de 20 de març de 2015, per la qual s'estableix una llista d'observació de substàncies als efectes de seguiment en l'àmbit de la Unió pel que fa a la política d'aigües, de conformitat amb la Directiva 2008/105/CE del Parlament europeu i del Consell. Així mateix, mitjançant aquest reial decret, es contribueix a la implantació de les disposicions sobre intercanvi d'informació ambiental contingudes en la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d'informació geogràfica a Espanya; la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí; que traslladen respectivament la Directiva 2007/2/CE del Parlament europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (Inspire); i la Directiva 2008/56/CE, de 17 de juny de 2008, per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a la política del medi marí. Igualment, contribueix al compliment del Reglament (UE) núm. 1143/2014 del Parlament europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d'espècies exòtiques invasores.

Aquest reial decret, a fi i efecte de protegir les aigües, estableix els criteris bàsics i homogenis per al disseny i la implantació dels programes de seguiment de l'estat de les masses d'aigua superficials i per al control addicional de les zones protegides; les normes de qualitat ambiental (NCA) per a les substàncies prioritàries i per a altres contaminants a fi d'aconseguir un bon estat químic de les aigües superficials, i estableix les NCA per a les substàncies preferents i determinar el procediment per calcular les NCA dels contaminants específics a fi d'aconseguir un bon estat ecològic de les aigües superficials o un bon potencial ecològic de les dites aigües, quan escaigui; les condicions de referència i els límits de classes d'estat dels indicadors dels elements de qualitat biològics, fisicoquímics i hidromorfològics per classificar l'estat o potencial ecològic de les masses d'aigua superficials; i les disposicions mínimes per a l'intercanvi d'informació sobre estat i qualitat de les aigües entre l'Administració General de l'Estat i les administracions amb competències pel que fa a aigües, per complir legislació que regula els drets d'accés a la informació i de participació pública.

Per complir aquestes finalitats, s'estructura en cinc títols diferents. El títol I (art. d'1 a 3) inclou una sèrie de disposicions generals destinades a delimitar-ne l'objecte i àmbit d'aplicació i a establir la definició de conceptes rellevants. Quant al seu àmbit d'aplicació, d'acord amb l'article 2, els criteris establerts en aquest reial decret s'entenen com a requisits mínims i són aplicables a totes les aigües superficials definides en l'article 3, i pel que fa a l'intercanvi d'informació, a més, a les aigües subterrànies. El títol II (art. de 4 a 8) se centra en el seguiment de l'estat de les masses d'aigua superficials i regula els programes de seguiment de l'estat de les aigües superficials, que són el Programa de control de vigilància, el Programa de control operatiu i el Programa de control d'investigació, i el control addicional de les masses d'aigua del Registre de zones protegides de cada demarcació. El títol III (art. de 9 a 19) inclou la regulació relativa a l'avaluació de l'estat de les masses d'aigua superficials (avaluació de l'estat ecològic i avaluació de l'estat químic). El títol IV (arts. 20 a 29) determina les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües i preveu l'elaboració de l'inventari d'emissions, abocaments i pèrdues, alhora que inclou algunes previsions sobre contaminació transfronterera. Finalment, el títol V inclou algunes obligacions d'intercanvi d'informació (art. 30).

D'altra banda, aquest reial decret modifica alguns preceptes del Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels

nitrats procedents de fonts agràries; del Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desplegament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes; del Reial decret 907/2007, de 6 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica; i del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic. També prorroga, fins al 30 de setembre de 2016, la declaració de sequera aprovada pels reials decrets 355/2015, de 8 de març i 356/2015, de 8 de maig, per als àmbits de les confederacions hidrogràfiques del Xúquer i Segura respectivament.

En segon lloc, destaquem el Reial decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears, tal com va ser aprovat inicialment pel Consell de Govern de les Illes Balears en la reunió del 4 de maig de 2015.

En tercer lloc, el Reial decret 198/2015, de 23 de març, pel qual es desplega l'article 112 bis del Text refós de la Llei d'aigües i es regula el cànon per a la utilització de les aigües continentals per a la producció d'energia elèctrica en les demarcacions intercomunitàries, dictat a l'empara de l'habilitació que conté l'article 149.1.22.a de la Constitució que atribueix a l'Estat competència sobre legislació ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan discorren per més d'una comunitat autònoma. Mitjançant aquest reial decret es desplega l'article 112 bis del Text refós de la Llei d'aigües, introduït mitjançant la Llei 15/2012, de 27 de desembre i que crea el cànon per a la utilització de les aigües continentals per produir energia elèctrica. D'aquesta manera, es regula completament aquest cànon, que és un taxa d'aplicació en les conques intercomunitàries, mitjançant la qual es grava la utilització i l'aprofitament dels béns de domini públic a què es refereix l'article 2.a) del Text refós de la Llei d'aigües (les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables amb independència del temps de renovació) per a la producció d'energia elèctrica, mesura en barres de central, i que està destinada a la protecció i millora del domini públic hidràulic.

En quart lloc, el Reial decret 775/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 650/1987, de 8 de maig, pel qual es defineixen els àmbits territorials dels organismes de conca i dels plans hidrològics, i el Reial decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual s'estableix l'àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques. Aquest reial decret, com a conseqüència de la Sentència dictada per la Sala Contenciosa

Administrativa del Tribunal Suprem de 9 de juny de 2015, en la qual es resolen els recursos contenciosos administratius presentats contra les disposicions del Reial decret 255/2013, de 12 d'abril, pel qual s'estableix la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i pel qual es modifiquen diverses normes relatives a l'àmbit i constitució de la dita demarcació hidrogràfica i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que estableixen l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) i delimitaven l'àmbit de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (DHJ), inclou en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, l'endorreisme natural format pel sistema que constitueixen els rius Quejola, Jardín i Lezuza i la zona Los Llanos, i redacta de nou les disposicions afectades, això és, el Reial decret 650/1987, de 8 de maig, i el Reial decret 125/2007, de 2 de febrer.

I, finalment, l'Ordre AAA/2056/2014, de 27 d'octubre, per la qual s'aproven els models oficials de sol·licitud d'autorització i de declaració general i simplificada d'abocaments, de conformitat amb el que disposen els articles 246 i 253 del Reglament de domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril. Aquests models són exigibles per a totes les sol·licituds d'autorització d'abocament que es presentin, en les conques hidrogràfiques que excedeixin de l'àmbit territorial d'una sola comunitat autònoma, a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre ministerial.

C. Novetats pel que fa a residus

Pel que fa a residus, les normes més destacables són dues. D'una banda, el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat, que té el caràcter de legislació bàsica de conformitat amb el que disposa l'article 149.1.13.a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència sobre bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, i en l'article 149.1.23.a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient. L'objecte d'aquesta norma és “desplegar el règim jurídic dels trasllats de residus que es realitzin en l'interior del territori de l'Estat, regulat en l'article 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats” (art. 1.1), per la qual cosa s'aplica “als trasllats de residus entre comunitats autònomes per a la seua valoració o eliminació, inclosos els trasllats que es produeixen a instal·lacions que

realitzen operacions de valoració o eliminació intermèdies” (art. 1.2). Per complir aquests fins, s’estructura en tres capítols. El capítol I en determina l’objecte, l’àmbit d’aplicació, les definicions i els requisits generals dels trasllats, entre els quals es troben l’existència prèvia d’un contracte de tractament, el document d’identificació des de l’origen fins a la seva recepció en la instal·lació de destí i un tercer requisit addicional, com és la notificació prèvia al trasllat, aplicable exclusivament als trasllats de residus perillosos, de residus destinats a l’eliminació, de residus destinats a instal·lacions d’incineració classificades com a valoració, i als trasllats que es destinen a valoració de residus domèstics mesclats identificats amb el codi LER 20 03 01 i dels residus que reglamentàriament s’estableixin. El capítol II desplega els requisits comuns a tots els trasllats, és a dir, el contracte de tractament i el document d’identificació. Finalment, el capítol III desplega el requisit addicional de la notificació prèvia a què se sotmeten determinats tipus de trasllats, que, per la naturalesa dels residus o pel tractament a què s’han de sotmetre, han de ser prèviament llocs en coneixement de les administracions afectades, a fi que puguin, si hi ha raons que ho justifiquen, oposar-s’hi.

D’altra banda, el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, ha incorporat a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/56/UE del Parlament europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2006/66/CE, del Parlament europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, pel que fa a la posada en el mercat de piles i acumuladors portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en ferramentes elèctriques sense fil, i de piles botó amb un baix contingut de mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603/CE de la Comissió.

D. La modificació del Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, per a la seva adaptació a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat

Pel que fa instal·lacions nuclears i radioactives, s’ha aprovat el Reial decret 177/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives, per a la seva adaptació a la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Mitjançant aquest reial decret, es modifica l’article 2 del dit Reglament per adaptar-lo a la Llei de garantia d’unitat de mercat. D’acord amb l’article

2.3 d'aquest Reglament, les autoritzacions de funcionament referides a instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria tenien validesa per a tot el territori espanyol, i afegien la condició que el titular dugués a terme qualsevol de les activitats per a les quals disposés d'autorització, en una part concreta del territori, havia de notificar-ho fefaentment a l'Administració territorial competent, la qual, transcorregut un termini determinat, podia denegar la dita activitat per mitjà d'un escrit motivat. En la mesura que el fet de permetre que la comunitat autònoma de destí de l'operador (titular de la instal·lació) s'oposés a una activitat autoritzada en una altra comunitat autònoma contravé el que disposa la Llei garantia de la unitat de mercat, ja que és una intervenció innecessària i desproporcionada i, en conseqüència, contrària als seus articles 5 i 17 i pogués constituir una intervenció contrària al principi de no discriminació, es modifica el seu article 2 per a adaptar-se a la dita llei. Després de la seva modificació, aquest precepte preveu, en el seu apartat tercer, que "Les autoritzacions de funcionament referides a instal·lacions radioactives de segona i tercera categoria tenen validesa per a tot el territori espanyol. Sense perjudici de l'anterior, el titular que realitzi qualsevol de les activitats per a les quals disposa d'autorització, en una part concreta del territori, ha de remetre una comunicació a l'Administració territorial competent, i ha de poder iniciar la seva activitat a partir de la dita comunicació".

E. Novetats pel que fa a producció ecològica

En l'àmbit de la producció ecològica, s'ha aprovat el Reial decret 833/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix i es regula el Registre General d'Operadors Ecològics i es crea la Taula de Coordinació de la Producció Ecològica. Aquest reial decret, dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.13.a de la Constitució, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva pel que fa a les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, deroga el Reial decret 759/1988, de 15 de juliol, pel qual s'inclouen els productes agroalimentaris obtinguts sense l'ocupació de productes químics de síntesi en el règim de denominacions d'origen genèriques i específiques establert en la Llei 25/1970, de 2 de desembre; el Reial decret 1852/1993, de 22 d'octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris i s'estableixen les funcions i la composició de la Comissió Reguladora de l'Agricultura Ecològica; i l'Ordre de 14 de març de 1995, per la qual es dicten normes de desplegament del Reial decret 1852/1993, de 22 d'octubre, sobre producció agrícola

ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris i s'estableixen les funcions i la composició de la Comissió Reguladora de l'Agricultura Ecològica.

El seu objecte és establir i regular una base de dades nacionals anomenada Registre General d'Operadors Ecològics (REGOE, d'ara endavant), adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària i que inclou les dades que es troben en els registres o sistemes d'informació gestionats per les autoritats competents de les comunitats autònomes i es constitueix en una base de dades informatitzada. També crea una Taula de Coordinació de la Producció Ecològica, com a òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de la Indústria Alimentària del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, els fins de la qual són actuar com a òrgan de coordinació amb les autoritats competents de les comunitats autònomes pel que fa a producció ecològica. Exerceix les funcions d'assessorament i coordinació que se li encomanen i, en particular, en allò que s'ha relacionat amb l'aplicació d'aquest Reial Decret.

Així mateix, s'ha aprovat l'Ordre ECC/1936/2014, de 16 d'octubre, per la qual es dicten normes de control i inspecció en la importació de productes ecològics procedents de tercers països, l'objecte de la qual és "establir els procediments de gestió, en matèria d'autorització, control i inspecció, dels productes ecològics procedents de tercers països per al despatx a lliure pràctica en la Unió Europea".

F. L'aprovació del Pla Marítim Nacional de resposta davant de la contaminació del medi marí

Mitjançant l'Ordre FOM/1793/2014, de 22 de setembre, dictada a l'empara del que disposa l'article 149.1.20a de la Constitució, que confereix a l'Estat les competències exclusives pel que fa a la marina mercant, s'aprova el Pla Marítim Nacional de resposta davant de la contaminació del medi marí a què es referix l'apartat 1.a) de l'article 3 del Sistema Nacional de Resposta davant d'un fet de contaminació marina, aprovat pel Reial decret 1695/2012, de 21 de desembre, i s'estableixen les estructures de resposta, els procediments operatius i els mitjans materials i humans precisos per donar resposta a qualsevol fet de contaminació marina, i també tots els altres aspectes que han d'integrar el seu contingut mínim.

El que disposa aquesta ordre és aplicable a tot succés de contaminació marina que tingui lloc en aigües en què Espanya exerceixi sobirania, drets sobirans o jurisdicció; les

actuacions que es duen a terme en les aigües d'estats limítrofs, amb subjecció al que puguin disposar els convenis internacionals bilaterals o els protocols operatius dels estats sol·licitants; i a totes les persones físiques o jurídiques involucrades en fets de contaminació en l'àmbit marítim, amb subjecció al que disposa aquesta ordre.

Per complir als objectius assenyalats, regula els riscos i les àrees vulnerables; les fases i situacions d'emergència; els procediments i protocols de notificació; la composició i les funcions dels òrgans de direcció i resposta; els procediments d'actuació i fi d'emergències; l'inventari de mitjans i els programes de manteniment i ensinistrament; i la revisió del Pla Marítim Nacional i el règim sancionador.

1.8. Altres normes d'interès

A més de les normes que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat un bon nombre de normes de rang legal amb incidència en el medi ambient. En destaquem la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que porta causa del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, objecte d'anàlisi en una crònica anterior; la Llei 33/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica la Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat; la Llei 2/2015, de 25 de març, de mesures tributàries urgents dirigides a compensar els efectes de les inundacions a la conca del riu Ebre; la Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs; i la Llei 28/2015, de 30 de juliol, per a la defensa de la qualitat alimentària.

Portem a col·lació també la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que, encara que el seu objecte no té res a veure amb la protecció del medi ambient (és una norma destinada, segons el seu art. 1, a "regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent-hi el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis a què s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària"), ha incorporat una novetat d'interès en aquest àmbit pel que fa a silenci administratiu, si bé

la seva entrada en vigor es posposa a l'any de la seva publicació en el BOE. En efecte, amb els ja tradicionals supòsits en què el silenci té efecte desestimatori (procediments relatius a l'exercici del dret de petició a què es refereix l'article 29 de la CE, els que l'estimació dels quals tinguin com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, i en els procediments de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques), n'incorpora un de nou, de manera que també tindrà efecte desestimatori el silenci en els procediments que "impliquin l'exercici d'activitats que puguin danyar el medi ambient".

Tampoc pot obviar-se la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, que posa fi a les deduccions per inversions mediambientals. Aquesta desaparició es justifica en el preàmbul en els termes següents: "desapareix la deducció per inversions mediambientals, tenint en compte que les exigències en matèria mediambiental són cada vegada superiors, i es tornen de vegades obligatòries, per la qual cosa resultava paradoxal el manteniment d'un incentiu d'aquestes característiques. De nou, preval la neutralitat de l'Impost, i resulta preferible que siguin altres paràmetres els que s'han de tenir en compte per realitzar inversions d'aquesta naturalesa".

Així mateix, esmentem algunes normes reglamentàries d'interès en àmbits sectorials diversos: pel que fa a energia, entre altres, el Reial decret 738/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica i el procediment de despatx en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars, i l'Ordre IET/1953/2015, de 24 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre IET/1459/2014, d'1 d'agost, per la qual s'aproven els paràmetres retributius i s'estableix el mecanisme d'assignació del règim retributiu específic per a noves instal·lacions eòliques i fotovoltaïques en els sistemes elèctrics dels territoris no peninsulars; pel que fa a aigües, el Reial decret 355/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics, i el Reial decret 356/2015, de 8 de maig, pel qual es declara la situació de sequera en l'àmbit territorial de la Confederació Hidrogràfica del Segura i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics; pel que fa a gasos d'efecte d'hivernacle, el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de costos d'emissions indirectes de gasos d'efecte d'hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials que es consideren exposats a un risc significatiu de "fuga de carboni" i s'aproven les bases

reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015; pel que fa a protecció de la flora i de la fauna, l'Ordre AAA/1771/2015, de 31 d'agost, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desplegament del Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades; pel que fa a pesca marítima, el Reial decret 182/2015, de 13 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediment del règim sancionador en matèria de pesca marítima en aigües exteriors; pel que fa a productes fitosanitaris, el Reial decret 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d'avaluació de productes fitosanitaris, i el Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària; i, pel que fa a races autòctones, el Reial decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles.

Finalment, s'ha aprovat, mitjançant el Reial decret 846/2015, de 28 de setembre, una modificació del Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i del Reial decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a fi d'exceptuar de la reserva funcionàries el nomenament del titular de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, amb rang de director general.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

En el període examinat (de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2015) s'ha produït un bon nombre de novetats normatives des del punt de vista ambiental a Catalunya. S'han aprovat tres normes amb rang de llei de gran interès mediambiental. En primer lloc, la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, introdueix algunes reformes importants. En efecte, per mitjà de l'esmentada llei es modifica, entre altres lleis, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; la Llei 6/1988, de 3 de març, forestal de Catalunya; la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; i el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Així mateix, la Llei

16/2015 també estableix una sèrie de regles aplicables pel que fa a avaluació ambiental de plans i programes.

En segon lloc, cal esmentar la Llei 22/2015, de 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals a fi d'incloure el fet de prohibir els espectacles de circ amb actuacions d'animals salvatges.

En tercer lloc, s'ha aprovat la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, la qual incorpora els efectes externs negatius de la mobilitat sobre el medi ambient a l'estructura de costos i en trasllada la repercussió econòmica als usuaris.

En l'àmbit reglamentari, les normes més destacables són el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn; el Decret 178/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear; el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient; el Decret 62/2015, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria dels organismes modificats genèticament; el Decret 98/2015, de 9 de juny, del Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya; i el Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts als cellers i almàsseres.

Ara per ara s'està gestant una iniciativa normativa de gran interès des del punt de vista ambiental, com és l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. El Departament de Territori i Sostenibilitat està tramitant l'esmentat Avantprojecte, sotmès a informació pública durant un període de quinze dies hàbils, mitjançant l'Edicte de 25 de maig de 2015⁵⁴. Amb aquest Avantprojecte es pretén “contribuir a l'èxit d'una societat innovadora, sostenible i econòmicament competitiva amb baixes emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i millor adaptada als impactes del canvi climàtic” (art. 1). Figuren com a

⁵⁴ Publicat en el DOGC núm. 6878, de 25 de maig de 2015. Del 26 de maig al 12 de juny de 2015, el text de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic s'ha sotmès al tràmit d'informació. En el Consell Executiu reunit el 20 d'octubre de 2015, el Govern decideix ultimar l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. En el web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic s'ha publicat la documentació de l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic, la documentació del procés de debat i las fases del procés de debat (URL: http://canviclimatic.gencat.cat/es/politiques/politiques_catalanes/Avantprojecte_llei_cc/ —última consulta, 29 d'octubre de 2015—).

objectius de l'Avantprojecte la disminució dels emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya per contribuir a la transició cap a una societat amb una baixa intensitat de consum de combustibles fòssils; la reducció de la vulnerabilitat de la població, dels sectors socioeconòmics i dels ecosistemes davant dels impactes adversos del canvi climàtic, i també la creació i el reforç de les capacitats nacionals de resposta a aquests impactes; l'adaptació dels sectors econòmics; el foment de l'educació, la investigació, el desplegament i la transferència de tecnologia i la difusió del coneixement; l'establiment de mecanismes que proveeixin d'informació objectiva i avaluable sobre tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic, l'evolució temporal i els impactes; i facilitar la participació ciutadana i la dels agents econòmics i socials en la valoració i avaluació de les polítiques climàtiques. Per aconseguir aquests objectius, l'Avantprojecte introdueix el vector del canvi climàtic en totes les polítiques sectorials (agricultura i ramaderia; aigua; biodiversitat; boscos i gestió forestal; energia; indústria, serveis i comerç; infraestructures; residus; salut; transport i mobilitat; turisme; universitat i investigació, i urbanisme i habitatge).

A més, cal destacar que la norma regula diferents òrgans com la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, el qual té com a funció principal coordinar la planificació de les polítiques climàtiques i realitzar el seguiment del seu exercici; i el Consell Català del Clima, que té per objectiu canalitzar la participació pública, la informació i consulta de les polítiques climàtiques.

Quant a la simplificació i racionalització administrativa (art. 29), l'Avantprojecte estableix una sèrie de mesures, entre les quals destaca que en els procediments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes han de valorar-se les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que la seva execució i gestió puguin produir, i també la vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic. D'altra banda, cal dir que la norma també regula la fiscalitat climàtica i crea impostos ambientals, com l'impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica.

En l'àmbit de la planificació, el més destacable és el Pla de Foment del Turisme de Naturalesa en els espais protegits de Catalunya i el Pla Estratègic dels Espais Naturals de Catalunya.

Des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític, cal destacar, d'una banda, l'aprovació per part del Govern de l'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora i l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a

l'economia circular. D'una altra, El Govern ha aprovat el Programa voluntari de compensacions de gasos d'efecte d'hivernacle per fomentar la transició a una economia baixa en carboni amb la realització de projectes de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Finalment, destaquem també que en el període objecte d'examen, amb motiu de la commemoració dels trenta anys de l'aprovació de la Llei d'espais naturals de Catalunya, diverses institucions acadèmiques⁵⁵ han volgut aprofitar l'ocasió per fer una valoració del que ha representat aquesta llei quant a la protecció dels espais naturals i, especialment, per reflexionar sobre la seva utilitat per afrontar els reptes actuals⁵⁶.

2.1. L'impacte de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica té per objectiu principal establir una sèrie de criteris amb la voluntat d'aclarir i simplificar les obligacions que la normativa vigent imposa a les administracions públiques de Catalunya, als ciutadans i a les empreses. Les finalitats que es persegueixen són millorar la tramitació dels procediments administratius de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local de Catalunya; impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació mitjançant una gestió més eficient dels recursos de les administracions públiques; i consolidar instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions públiques de Catalunya en l'exercici de les competències de regulació, intervenció i control de l'activitat econòmica. Als efectes d'aquesta crònica, ens centrarem en el títol II de la Llei 16/2015, el qual regula la simplificació administrativa en l'exercici de les activitats econòmiques; i en el títol III de l'esmentada llei, el qual modifica diverses normes amb rang de llei i es distribueix en quatre capítols. En els apartats següents donem compte de les principals modificacions des del punt de vista ambiental.

⁵⁵ Institucions convocants: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial i Institut de Medi Ambient, Universitat de Girona; Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), Universitat Rovira i Virgili; Institució Catalana d'Història Natural. Societat Catalana de Geografia. Institut d'Estudis Catalans.

⁵⁶ Per tractar de manera més completa i complementària les diferents qüestions que es despleguen en la Llei d'espais naturals de Catalunya, s'han organitzat tres jornades: el 5 de juny de 2015 a Girona; el 8 de juny a Tarragona i el 18 de juny a Barcelona.

A. Activitats econòmiques innòcues i activitats econòmiques de baix risc

La Llei 16/2015 introdueix un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració amb la intervenció administrativa mínima en l'inici o la modificació de les condicions en què es realitzen les activitats econòmiques definides com innòcues o de baix risc. Als efectes de la Llei 16/2015, es defineix com a activitat econòmica innòcua la que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, a la seguretat de les persones ni als béns⁵⁷. No obstant això, es considera activitat econòmica de baix risc, l'activitat que, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns⁵⁸. Aquestes dues categories d'activitats econòmiques, d'acord amb el preàmbul de la llei, tenen una repercussió especial en sectors empresarials que actualment representen un 74% de l'activitat econòmica de Catalunya i afecten més d'un 51% de la població ocupada.

Té especial interès la regulació del règim d'intervenció administrativa aplicable a les activitats innòcues i a les activitats de baix risc, la qual es regeix per una sèrie de principis d'actuació: la llibertat en l'exercici de l'activitat econòmica; la intervenció administrativa mínima per a l'inici de l'activitat; l'impuls de mecanismes alternatius que permeten reduir càrregues a les empreses i als professionals; la responsabilitat dels titulars d'empreses i dels professionals en el compliment dels requisits exigits en l'exercici de l'activitat econòmica; la no-exigència de mesures de control concurrents sobre una mateixa activitat; l'estandardització dels requisits exigits per les administracions per iniciar i dur a terme l'activitat econòmica; i la facilitació de les relacions de les empreses i els professionals amb les administracions públiques de Catalunya (art. 4). Així, mentre que les activitats econòmiques considerades de baix risc se sotmeten a comunicació prèvia, per raó de la seva incidència sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns; les activitats econòmiques innòcues estan subjectes a declaració responsable. D'aquesta manera, la presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, segons el tipus d'activitat, habilita de forma

⁵⁷ Les activitats econòmiques innòcues són les que inclou l'annex I de la Llei 16/2015.

⁵⁸ Les activitats econòmiques de baix risc són les que inclou l'annex II de la Llei 16/2015.

immediata per a l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i al mateix temps faculta l'Administració per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

B. La modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

En el capítol III del títol II de la Llei 16/2015 es modifiquen parcialment diverses lleis de caràcter sectorial que tenen incidència en la legalització de les activitats econòmiques, com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Com ja vam apuntar en l'anterior crònica, cal fer notar el fet que ja són sis les reformes de la Llei 20/2009, a pesar que han passat menys de sis anys des que es va aprovar. La major part d'aquestes reformes s'han fet amb macrolleis en què es modifiquen nombroses normes en àmbits sectorials diversos que no tenen connexió entre si⁵⁹. Això ens condueix a pensar que potser ha arribat el moment de fer una reflexió profunda del règim de prevenció i control ambiental d'activitats a Catalunya i aprovar una nova llei que doni respostes a les necessitats d'aquest àmbit.

Aquesta modificació afecta el règim de llicència ambiental, de manera que s'amplien les activitats que estan sotmeses al règim de comunicació en compte del de llicència. Així s'afegeix un nou epígraf, el 12.59, a l'annex III de la Llei 20/2009, amb el text següent: "12.59. Magatzematge o manipulació de biomassa d'origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradura...) o de productes d'aquesta biomassa (llenya, pilot, estelles, briquetes...) amb una capacitat inferior a 10.000 m³". A més, s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la normativa ambiental un conjunt d'activitats que fins ara estaven subjectes a comunicació, en concret, se suprimeixen els epígrafs 6.9, 11.8, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.40 i 12.58 de l'annex III de la Llei 20/2009.

⁵⁹ Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l'activitat administrativa; Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre las estades en establiments turístics; Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; i Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

C. La modificació de la Llei 6/1988, de 3 de març, forestal de Catalunya

La Llei 6/1988, de 3 de març, forestal de Catalunya, únicament es modifica en un article, amb relació al règim d'intervenció de l'Administració en l'àmbit forestal agrícola. Pel que fa als terrenys forestals, es pot permetre la rompuda de terrenys per establir activitats agropecuàries si es tracta de terrenys aptes tècnicament i econòmicament per a l'aprofitament d'aquesta naturalesa, d'acord amb l'article 23 de la Llei 6/1988 —prèviament modificat amb la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic— però cal l'autorització de l'Administració forestal. Amb la modificació introduïda per la Llei 16/2015, s'afegeix un nou article, el 23 *bis*, a la Llei 6/1988, el qual estableix que en el cas de superfícies que en els últims vint anys s'han convertit en forestals per abandó de l'activitat agrícola, el canvi de l'activitat forestal a l'activitat agrícola està subjecte a règim de comunicació si la superfície és de fins a dues hectàrees i la recuperació de l'activitat agrícola es du a terme sense alterar la topografia del terreny. No obstant això, aquest règim de comunicació no és aplicable en superfícies que afecten espais naturals d'especial protecció, espais de la Xarxa Naturalesa 2000 o forests catalogats d'utilitat pública. En aquest cas, el canvi de l'activitat forestal a l'activitat agrícola està subjecte a règim d'autorització.

D. Regles aplicables pel que fa a l'avaluació ambiental de plans i programes

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015 estableix una sèrie de regles aplicables mentre no s'adapti la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica que conté la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Així, fins que no es faci aquesta adaptació, s'apliquen les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiuen la normativa bàsica, però d'acord amb les regles que estableix sobre: la denominació de procediments, documents i actes administratius que se'n deriven; els terminis de consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades que realitza l'òrgan ambiental en el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària i en el procediment d'avaluació ambiental estratègica, els terminis per formular l'informe ambiental estratègica en el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada i el termini per formular la declaració ambiental

estratègica en el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària; la resolució de discrepàncies entre l'òrgan competent per aprovar un pla o programa i l'òrgan ambiental, i la informació del document ambiental estratègic en l'avaluació ambiental estratègica. A més, pel que fa a l'avaluació ambiental estratègica del planejament urbanístic, s'estableixen unes regles concretes.

2.2. La modificació del Text refós de la Llei de protecció dels animals

Seguint una trajectòria legislativa en la direcció d'incrementar la protecció dels animals a Catalunya, el Parlament ha aprovat la Llei 22/2015, de 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals a fi d'incloure prohibir els espectacles de circ amb actuacions d'animals salvatges.

L'apartat 1 de l'article 6 de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, prohibeix ja l'ús d'animals en espectacles o altres activitats si els poden ocasionar patiment o poden ser objecte de mofes o tractes antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen. Però amb la modificació que introdueix la Llei 22/2015 s'afegeix una lletra a l'apartat 1 de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, amb el text següent: “g) Els espectacles de circ amb animals pertanyents a la fauna salvatge”.

Aquesta modificació, d'acord amb la disposició final segona, ha d'entrar en vigor dos anys després d'haver-se publicat en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

A més, aquesta llei estableix, en la disposició final primera, que el Govern ha de crear un observatori de l'ús d'animals en els circs en què estiguin representats els àmbits científic i acadèmic de l'etologia, la veterinària i la zoologia; els col·legis professionals d'advocats i de veterinaris; els circs que tinguin espectacles amb animals que no quedin expressament prohibits per la present llei, i les entitats de protecció dels animals. La funció d'aquest observatori és avaluar les condicions en què s'utilitzen animals, en els casos en què no està prohibit per la present llei, a fi de comprovar que són respectuoses amb el seu benestar, de conformitat amb la normativa aplicable. Aquest observatori d'avaluació de l'ús d'animals en circs ha de crear-se en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor de la disposició final primera. La dita disposició entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

2.3. El finançament del sistema de transport públic de Catalunya

La Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya té com a objecte “regular el finançament del sistema de transport públic de Catalunya” (art. 1). Es tracta d’una llei que s’emmarca en la disposició addicional vuitena de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la qual estableix que: “En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combustibles alternatius que en regulin el marc organitzatiu”. El seu àmbit d’aplicació és el sistema de transport públic de Catalunya, configurat pel conjunt de serveis de transport terrestre de viatgers, per carretera i ferroviari, urbans i interurbans, de competència de l’Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya (art. 2).

Aquesta llei té per objectiu establir un marc normatiu integrat i integral del conjunt de sistemes de finançament del transport públic urbà i interurbà per oferir resposta a les necessitats socials derivades de la situació de crisi econòmica, desocupació endèmica, salaris baixos, precarietat social i laboral, desequilibris territorials, canvis en l’activitat i a la necessitat de reduir els nivells de contaminació. L’objectiu d’aquesta llei s’ha d’aconseguir amb l’aplicació d’una sèrie de principis i criteris d’ordenació i gestió: ús òptim del conjunt dels recursos de mobilitat; prioritat dels mitjans de transports públics col·lectius; garantia d’accessibilitat, flexibilitat, eficiència i equitat social; reequilibri territorial; integració dels diferents sistemes de transport i garantia d’interoperabilitat i intermodalitat; prioritització de la propulsió elèctrica, les fonts d’energies renovables i els combustibles fòssils de baixes emissions contaminants en compliment de la normativa de la Unió Europea relativa als combustibles més nets per al transport; optimització dels impactes socioeconòmics, amb la maximització del benefici comú, tenint en compte la capacitat econòmica dels usuaris; avaluació de les alternatives de mobilitat existents entre un origen i un destí determinats i prioritització de què siguin més eficients en termes ambientals i econòmics; i consideració dels efectes externs dels diversos tipus de transport públic col·lectiu.

Aquesta llei incorpora els efectes externs negatius de la mobilitat a l’estructura de costos i en trasllada la repercussió econòmica als usuaris, i aplica el principi de qui contamina o congestiona paga. Així, estableix que les tarifes han d’incorporar el cost dels efectes externs negatius de cada servei de mobilitat amb l’anticipació necessària per

fer que el sistema sigui sostenible. A més, especifica que en l'avaluació de tots els elements que intervenen en la prestació dels serveis de mobilitat ha d'incloure's els efectes externs negatius que es generen, incloses les emissions de diòxid de carboni i la contaminació atmosfèrica local.

Del contingut d'aquesta llei cal destacar el capítol II, que disposa la creació de noves figures impositives o recàrrecs en impostos municipals destinats al finançament del transport públic. Entre aquestes figures tributàries, es poden establir progressivament: a) un recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques que gravi l'activitat de les superfícies comercials mitjanes i grans, les galeries comercials i altres concentracions o àrees comercials urbanes i de servei; b) una contribució especial per al transport sostenible en grans concentracions vinculades a la celebració de determinats actes; c) tributs sobre la congestió i la contaminació derivats de la utilització del vehicle privat; d) impostos o taxes sobre l'impacte ambiental causat pels vehicles de motor en la modalitat d'utilització potencial de vehicles de motor amb domicili a Catalunya, i també pels vehicles de motor en la modalitat de circulació en itinerància i turística; e) un recàrrec sobre l'impost sobre béns immobles en els supòsits i dins dels límits establits per la legislació sobre hisendes locals; f) un recàrrec, o un augment del tipus impositiu sobre l'impost corresponent, segons escaigui, sobre la matriculació o la posada en circulació de vehicles de motor, limitat a determinades categories en funció de la incidència mediambiental⁶⁰.

2.4. Algunes normes reglamentàries destacables

A. El desplegament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn

El Decret 190/2015, de 25 d'agost, fa un nou desplegament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de maig, que regula els aspectes relatius a les instal·lacions i els aparells d'il·luminació exterior i als d'interior amb afectació en l'exterior, respecte a la contaminació lumínica que poden produir. Aquest decret es configura com una eina per minimitzar la contaminació lumínica, vetllar per la preservació de l'entorn, evitar consums energètics innecessaris i promoure tecnologies més eficients, per avançar cap a un model català de consum d'energia que sigui sostenible, d'acord amb els objectius del

⁶⁰ Art. 18.

Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2010.

L'objecte d'aquest Decret és regular les característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació respecte a la contaminació lumínica que poden produir, d'acord amb els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Les finalitats que es persegueixen són mantenir al màxim la claredat natural del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l'entorn urbà, i millorar l'eficiència energètica de la il·luminació artificial a fi de promoure l'estalvi d'energia i de recursos naturals.

Quant al contingut, el decret estableix el règim regulador de la il·luminació, fixa els criteris per implantar la zonificació de Catalunya segons el grau de protecció del medi nocturn; estableix el procediment d'aprovació dels punts de referència per dotar de més protecció les zones d'especial valor astronòmic o natural, introdueix la nova figura dels espais amb un cel nocturn de qualitat i estableix les característiques de les instal·lacions i dels aparells d'il·luminació exterior, el seu funcionament, el règim estacional i horari d'usos de l'enllumenat i el contingut del programa de manteniment⁶¹. També estableix el règim d'intervenció administrativa, preveu les competències del departament de la Generalitat competent pel que fa a medi ambient i dels ajuntaments i estableix la documentació que han de disposar les instal·lacions d'il·luminació exterior de les activitats sotmeses al règim de prevenció i control ambiental, els estudis d'impacte ambiental dels projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental, i els estudis ambientals estratègics dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental estratègica; especificacions relatives a la contractació administrativa⁶², i també diversos mecanismes de promoció del compliment dels preceptes del Decret⁶³.

B. El Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrògens a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica

⁶¹ Capítol II. Règim regulador de la il·luminació.

⁶² Capítol III. Règim d'intervenció administrativa.

⁶³ Disposició addicional primera: aplicació de les millores tècniques disponibles. Disposició addicional segona: acord i convenis respecte de les instal·lacions excloses. Disposició addicional tercera: instruccions tècniques i guies.

d'origen nuclear

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrògens a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear. Es tracta del Decret 178/2015, de 4 d'agost, que té com a objecte el desplegament normatiu per a l'aplicació dels impostos creats per la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per a la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear⁶⁴. Aquest decret s'ha dictat a l'empara de l'habilitació competencial reconeguda en l'article 203.5 de l'Estatut d'autonomia, en l'exercici de la potestat reglamentària que atorga al Govern l'article 68 de l'Estatut d'autonomia, i també de l'habilitació al Govern que conté la disposició final primera de la Llei 12/2014, perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar la llei.

Aquest Reglament s'estructura en tres títols. El títol I es dedica a l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i regula el termini, la forma de presentació i l'ingrés de l'autoliquidació. El títol II fa referència a l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i estableix el procediment de determinació de la base imposable del tribut i també el termini i la forma de presentació i ingrés de l'autoliquidació. Finalment, el títol III es dedica a l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, i regula els pagaments fraccionats, els terminis i la forma de presentació i ingrés.

C. Les entitats col·laboradores de medi ambient

El Govern ha aprovat el Decret que regula l'habilitació, el funcionament i la supervisió de les entitats col·laboradores de medi ambient, entitats privades que realitzen actuacions de control, inspecció i vigilància ambiental de la contaminació generada per instal·lacions i activitats sota la supervisió de l'Administració. Es tracta del Decret

⁶⁴ Els articles 1.1 c) i 21 a 30 de l'esmentada llei són objecte del Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4292-2015, promogut pel president del Govern, admès a tràmit mitjançant la Providència del Ple del Tribunal Constitucional de 21 de juliol de 2015 (BOE núm. 176, de 24 de juliol de 2015).

60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, que té com a objecte regular l'habilitació, el funcionament i la supervisió d'aquest tipus d'entitats en els àmbits sectorials de medi ambient següents: prevenció i control ambiental de les activitats; prevenció de la contaminació atmosfèrica; prevenció de la contaminació acústic; comerç d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle; sistemes comunitaris de gestió i auditoria ambiental; etiquetatge ecològic de productes i serveis; prevenció de la contaminació del sòl; caracterització dels residus i dels lixiviats; control i vigilància de l'estat de les masses d'aigua i gestió dels abocaments; i qualsevol altre àmbit material de medi ambient en què la legislació aplicable preveia funcions d'inspecció i control. Aquest decret desplega la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, a fi de dotar l'Administració ambiental de Catalunya d'un sistema d'habilitació d'entitats col·laboradores a les quals pugui atribuir o delegar funcions d'inspecció i control que li són pròpies.

El text unifica criteris i procediments d'habilitació, actualment dispersos en diferents normatives sectorials, d'acord amb els requisits de capacitat tècnica, independència, imparcialitat i responsabilitat com a raó imperiosa de preservar l'interès general que és el medi ambient i la salut i qualitat de vida de les persones, i simplifica els tràmits administratius.

D. Nova regulació de les competències sobre organismes modificats genèticament

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret pel qual s'estableixen mesures per a l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya pel que fa als organismes modificats genèticament (d'ara endavant OMG). Es tracta del Decret 62/2015, de 28 d'abril, que té com a objecte regular el règim d'intervenció en matèria d'autorització, d'utilització confinada i d'alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització d'OMG en tot el que és competència de la Generalitat de Catalunya; establir mesures de coordinació de la vigilància i el control de les activitats autoritzades, de la comercialització d'OMG autoritzats o de productes que els continguin, els alliberaments voluntaris sense fins comercials complementaris que, si és el cas, siguin exigits dins del procediment d'autorització per a la comercialització i de la utilització confinada quan el seu objecte sigui la possible incorporació a medicaments d'ús humà i veterinari, i també altres productes i articles sanitaris i als que pel fet d'afectar l'ésser humà poden suposar un risc per a la salut; regular el règim sancionador per les

infraccions comeses en l'exercici de les activitats autoritzades; i crear i regular el Registre d'OMG de Catalunya⁶⁵. Aquest Decret s'emmarca en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'OMG, d'acord amb el qual correspon a les comunitats autònomes exercir les funcions regulades en la mateixa llei amb relació a les activitats d'utilització confinada d'OMG i atorgar les autoritzacions d'alliberament voluntari d'aquests organismes per a qualsevol altre propòsit diferent de la seva comercialització, i les funcions de vigilància, control i imposició de sancions per les infraccions comeses en la realització de les activitats anteriors i també sobre la comercialització d'OMG autoritzats o de productes que els continguin, els alliberaments voluntaris sense fins comercials complementaris que, si és el cas, siguin exigits dins del procediment d'autorització per a la comercialització i la utilització confinada quan el seu objecte sigui la possible incorporació a medicaments d'ús humà i veterinari, i altres productes i articles sanitaris, que poden afectar l'ésser humà i poden suposar un risc per a la salut humana. A més, la disposició addicional tercera de la mateixa llei estatal determina que les administracions competents han de crear registres públics.

Aquest Decret respon a la necessitat d'ampliar les competències per donar cobertura a tota la tipologia d'OMG que es puguin presentar, reforçar les funcions de la Comissió Catalana de Bioseguretat, agilitzar el procediment d'autorització i la necessitat de crear un Registre d'OMG que garanteixi el compliment de la normativa. A aquests efectes, amb aquesta normativa es redefineix el concepte d'OMG existent en el Decret 152/2003, de 23 de juny —queda derogat per l'aprovació del Decret 62/2015—, per incloure-hi qualsevol ésser viu, excepte els éssers humans, sobre el qual el material genètic s'hagi modificat artificialment. També s'estableix el règim d'intervenció per a les activitats d'utilització confinada i dels alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercial amb OMG, ja siguin de caràcter biològic, biomèdic, industrial, agronòmic, o de qualsevol altra tipologia o finalitat. El decret també modifica les funcions de la Comissió Catalana de Bioseguretat i la faculta com a entitat competent per autoritzar o denegar les activitats d'utilització confinada i alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització amb qualsevol OMG, i crea la Comissió Tècnica d'OMG, com a òrgan de suport i assessorament de la Comissió Catalana de Bioseguretat. D'altra banda, aquest decret crea el Registre d'OMG a Catalunya, amb

⁶⁵ Art.1.

l'objecte de recollir informació relativa a la utilització confinada, als alliberaments voluntaris amb finalitat diferent de la comercialització i el cultiu comercial d'OMG.

E. La nova regulació del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya

En l'àmbit dels residus, el Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya. Es tracta del Decret 98/2015, de 9 de juny, que té com a objecte regular la composició i el funcionament del Consell per a la prevenció i la gestió dels residus a Catalunya, com a òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en relació amb les seves accions pel que fa a prevenció, reducció i gestió dels residus.

Aquest decret pretén recollir en un únic text legal el règim de funcionament del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya per evitar la dispersió normativa, i deroga l'Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, mitjançant la qual va ser creat, com a òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya en relació amb les accions d'aquesta entitat pel que fa a prevenció, reducció i gestió dels residus.

El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya és un òrgan col·legiat i els seus membres són nomenats pel conseller o consellera amb competència en medi ambient, a proposta de les respectives entitats i organitzacions, per un període de tres anys. Quant a les funcions, el decret preveu, a més de les previstes en l'article 65.3 del Text refós de la Llei de residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, les següents: la deliberació intersectorial i la formulació de propostes d'actuació dirigides al Consell de Direcció de l'Agència, relacionades amb la prevenció, la reducció i la gestió dels residus; l'elaboració d'informes sobre assumptes que siguin encomanats expressament pel Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya en material de prevenció i gestió de residus; i la promoció de processos participatius en material de prevenció i gestió de residus (art. 3).

F. La regulació de les condicions de reutilització d'efluents produïts en cellers i almàsseres

El Govern de la Generalitat ha aprovat el decret que regula i actualitza la gestió dels

efluents produïts en cellers i almàsseres a Catalunya. Es tracta del Decret 198/2015, de 8 de setembre, de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres, que té com a objecte la regulació de l'aplicació en el sòl amb fins agrícoles dels efluents produïts a Catalunya com a conseqüència de l'activitat de cellers i almàsseres. L'elaboració d'aquest decret respon a la seva necessitat d'adaptació als canvis normatius que s'han dut a terme al llarg dels últims anys i a la Directiva 2000/60/CE del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. Aquest Decret s'ha realitzat en concordança amb el Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, i deroga el Decret 290/1994, de 29 de setembre, sobre normes addicionals d'autorització d'almàsseres que va regular per primera vegada la gestió agrícola dels efluents generats en almàsseres de Catalunya.

Amb aquesta normativa s'estableix el procediment de gestió dels efluents de cellers i almàsseres mitjançant l'aplicació agrícola, tant de les aigües com dels residus. Per compatibilitzar l'aplicació agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres amb el bon estat de les masses d'aigües superficials i subterrànies, el Decret estableix les quantitats que es poden aplicar dels diferents efluents, les condicions, distàncies a respectar i èpoques d'aplicació, i altres requisits tècnics en la gestió i seguiment l'aplicació que inclou un pla de controls. Es preveu igualment que si aquests efluents es consideren residus, s'ha de seguir el que determina el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

2.5. Altres normes d'interès

A més de les que hem ressenyat, en el període objecte d'anàlisi s'han aprovat altres normes d'interès des de la perspectiva ambiental. Destaquem, en primer lloc, pel que fa a protecció d'espais naturals, l'aprovació del Decret 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freses i es modifiquen els límits dels espais del Pla d'Espais d'Interès Natural Capçaleres del Ter i de Freses, i Serra Cavallera. El seu objecte és establir un règim de protecció i desplegament específic per a aquest territori mitjançant la declaració com a parc natural, per fer possible la conservació del patrimoni natural d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat

dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants, en el marc del que regula la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Així mateix, aquest Decret estableix els òrgans de govern del Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freses que aglutinen tant les administracions públiques directament implicades amb el territori com les institucions i la representació de la societat civil. També cal destacar el Projecte de decret d'ampliació del Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'espai homònim del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), publicat el 17 de juliol de 2015, l'anunci d'informació pública en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. Els sectors d'ampliació proposats tenen com a objectiu millorar la coherència de les diferents figures de protecció existents, la representació d'hàbitats i espècies en l'espai protegit i aspectes de delimitació mal resolta en la declaració del Parc Natural de l'any 2003. A més, paral·lelament s'ha publicat el Projecte d'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya per ampliar l'espai de la Xarxa Natura 2000 Alt Pallars. També, mitjançant l'Acord del Govern GOV/139/2015, de 25 d'agost, s'ha aprovat la rectificació de la delimitació dels espais de la Xarxa Natura 2000 que es relacionen en l'annex 1; el Decret 191/2015, de 25 d'agost, pel qual es rectifica la delimitació de diversos espais del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre; l'Acord del Govern GOV/145/2015, d'1 de setembre, pel qual es compleix la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 8 d'octubre de 2014, dictada en el Recurs contenciós administratiu 507/2010, interposat contra el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i la Rierada-Can Balasc; i l'Acord GOV/155/2015, de 29 de setembre, pel qual es compleixen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de març de 2009, dictades en els recursos contenciosos administratius 590/2006 i 591/2006, interposats contra el Decret 290/2006, de 4 de juliol, pel qual es delimita el Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya de Rosa i es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural, per ampliar l'espai de Pinya de Rosa.

En segon lloc, en l'àmbit de la contaminació acústica, també cal destacar una sèrie de resolucions per les quals s'aproven diferents mapes estratègics de soroll (Resolució TES/2081/2015, de 15 de setembre, pel qual s'aprova el Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Baix Llobregat I, constituïda pels municipis d'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de

Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern; Resolució TES/2009/2015, de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Vallès Occidental II, constituïda pels municipis de Terrassa i Viladecavalls; Resolució TES/1967/2015, de 25 d'agost, per la qual s'aprova el Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Baix Llobregat II, constituïda pels municipis de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat; Resolució TES/783/2015, de 17 d'abril, per la qual s'aprova el Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Valls Occidental I, constituïda pels municipis de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès; Resolució TES/642/2015, de 30 de març, per la qual s'aprova el Mapa estratègic de soroll de l'aglomeració d'àmbit supramunicipal Barcelonès I, constituïda pels municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs). També cal destacar l'inici del procediment de declaració d'una zona d'especial protecció de qualitat acústica (ZEPQA) en el municipi del Papiol (publicat l'anunci d'exposició pública el 22 de maig en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*).

En tercer lloc, cal esmentar la Resolució TES/1523/2015, de convocatòria de subvencions per al foment de l'ecoetiquetatge i ecodisseny. Les actuacions subvencionables en el marc d'aquesta convocatòria són l'obtenció o la renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o d'etiqueta ecològica de la Unió Europea i la implantació de processos de disseny i el desenvolupament ambiental (ecodisseny).

2.6. Algunes actuacions d'interès des de la perspectiva de la protecció del medi ambient

A. L'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora

Mitjançant l'Acord GOV/80/2015, de 2 de juny, el Govern ha aprovat l'Estratègia catalana d'ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat). Aquesta Estratègia ha estat promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat com una estratègia interdepartamental d'ecodisseny en sintonia amb les exigències actuals i amb altres estratègies catalanes, com ara l'Estratègia Catalunya 2020: Acord estratègic per a la competitivitat de l'economia catalana i la millora de l'ocupació (ECAT 2020), en el qual, en l'apartat 6.6. "Eix estratègic per impulsar la transició cap a una economia més eficient en l'ús des de recursos", defineix l'Estratègia catalana d'ecodisseny (Ecodiscat) com una eina per promoure una forma sostenible de produir i consumir, incentivar la incorporació del disseny ecològic en el procés productiu, impulsar la transversalitat del

disseny ecològic en universitats i centres d'investigació i la transferència de coneixement, i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles. Es tracta d'un tipus de disseny que incorpora criteris ambientals per aconseguir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i de matèries primeres.

Aquesta Estratègia defineix les línies bàsiques que s'han de seguir en els pròxims anys amb l'objectiu de: crear un marc estable per impulsar el disseny de productes i serveis que integren criteris ambientals i fomentar, així, models de consum i producció més sostenibles a Catalunya; establir sinergies amb tots els actors implicats en els sistemes productius (empreses, universitats, centres d'investigació, dissenyadors, consultors, consumidors, etc.), i implicar-los en la implementació de l'Estratègia; establir l'organització administrativa interna necessària perquè l'Estratègia tingui una incidència transversal i significativa sobretot el mercat català. Aquesta organització ha de permetre evitar duplicitats entre administracions, i mitjançant la coordinació, maximitzar les actuacions que es duguin a terme: adequar-se als nous requeriments normatius exigits des de la Unió Europea. La finalitat principal de l'Ecodiscat és contribuir a l'eficiència en l'ús dels recursos i a reduir l'impacte ambiental al llarg de tot el cicle de vida de productes, serveis i activitats. També pretén ajudar a millorar la competitivitat d'empreses i organitzacions amb l'ús eficient dels recursos i el desenrotllament de nous productes i serveis eficients i sostenibles. També estableix actuacions per incrementar l'oferta de productes i serveis més sostenibles i actuacions per fomentar la demanda. El desplegament d'aquesta Estratègia s'ha de dur a terme amb els plans d'acció anuals interdepartamentals aprovats per la Comissió interdepartamental d'Ecodisseny, els quals concretaren els instruments i les mesures prioritàries per assolir els seus objectius.

Portem a col·lació també l'Acord del Govern GOV/73/2015, de 26 de maig, pel qual s'aprova l'Estratègia d'impuls a l'economia verda i a l'economia circular. Els departaments d'Economia i Coneixement, d'Empresa i Ocupació, d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i de Territori i Sostenibilitat han elaborat aquesta Estratègia amb l'objectiu de promoure la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, com a eix estratègic per aconseguir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat, crear ocupació i reduir els riscos ambientals.

B. La planificació estratègica dels Espais Naturals Protegits de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat el Pla Estratègic dels Espais Naturals Protegits de Catalunya, el qual estableix el full de ruta per a la declaració de nous parcs per als pròxims deu anys. Aquest Pla respon a la voluntat del Govern de garantir la preservació dels espais que, atenint-se a un primer criteri estrictament biològic i ecològic, de diversitat, singularitat i fragilitat, són una mostra representativa del patrimoni natural amb més qualitat de Catalunya. Els objectius principals d'aquest Pla són: definir la situació actual; identificar els principals reptes de futur, objectiu que s'ha d'aconseguir i les actuacions que s'han de dur a terme; alinear tots els agents responsables, i crear ambient de coordinació i col·laboració activa entre els principals actors. Aquest Pla es fonamenta en una sèrie de principis bàsics: aplicar la gestió multifuncional com a eina general de conservació; treball en equip del mateix Servei d'Espais amb la resta de la Direcció, del Departament i les altres unitats; l'òrgan rector ha de ser capaç de coordinar, catalitzar o guiar el treball d'altres professionals del món de l'agronomia, gestió forestal, gestió cinegètica o turística; alinear els interessos del territori afectat per un espai de protecció especial amb les necessitats de conservació i millora del seu medi natural.

C. El Programa Voluntari de Compensacions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle

Mitjançant l'Acord GOV/123/2015, de 28 de juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Programa Voluntari de Compensacions d'Emissions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle, per acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu en l'àmbit local. Aquest programa té com a objectiu fomentar la transició cap a una economia baixa en carboni amb la realització a Catalunya de projectes de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Quant a l'abast del Programa, en l'annex es determina que els projectes de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle que es poden desplegar en el marc d'aquest Programa han de complir les següents característiques: les activitats dutes a terme han d'afectar les emissions originades en els sectors difusos. Queden exclosos els projectes que tenen lloc en les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió; els projectes han de ser addicionals, és a dir, la seva realització no és conseqüència de la necessitat de complir la normativa vigent; la reducció d'emissions aconseguida amb el projecte ha de ser quantificable i verificable; i els projectes han de dur-se a terme en el territori de Catalunya.

Els projectes desplegats en el marc del Programa pretenen reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle amb la realització de projectes domèstics. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per altres persones físiques o jurídiques, i es durà a terme el que es coneix com a “compensació d'emissions”⁶⁶.

D. El nou Pla de Foment del Turisme de Naturalesa en els Espais Protegits de Catalunya

Al juliol de 2015 s'ha publicat el Pla de Foment del Turisme de Naturalesa en els Espais Naturals Protegits de Catalunya, elaborat per la Direcció General de Turisme, amb la col·laboració de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Aquest Pla és l'instrument que defineix l'estratègia per impulsar l'ecoturisme a Catalunya, especialment en els espais naturals protegits, i té com a finalitat activar l'anomenat ecoturisme, oferint un conjunt de productes i de serveis que es puguin desplegar en un marc de consens amb la gestió dels espais naturals. El model de gestió del turisme de naturalesa en els espais naturals protegits de Catalunya que es planteja en aquest Pla es fonamenta en cinc principis bàsics: contribueix a conservar el patrimoni; millora el desenvolupament local; ofereix una experiència d'alta qualitat als visitants; atrau un visitant interessat en els valors dels espais naturals protegits i la cultura; fomenta la cooperació entre els gestors dels espais naturals protegits i el sector turístics. En aquest sentit, el Pla proposa una sèrie d'actuacions estructurades en sis grans eixos: afavorir un ús turístic sostenible i responsable dels recursos naturals i culturals utilitzats pel turisme de naturalesa; optimitzar les infraestructures, els equipaments i els serveis públics dels espais naturals protegits utilitzats per al turisme de naturalesa; consolidar una oferta diversa i competitiva amb proveïdors corresponsables i de qualitat; atraure la demanda creixent de turisme de naturals, tant nacional com internacional, amb una estratègia integral i diferenciada de comunicació i promoció; innovar i fer més transversal la planificació del turisme de naturalesa i garantir un seguiment adequat; i fomentar marcs de col·laboració estables i efectius entre agents públics i privats que aglutinin i reforcin el sector del turisme de naturalesa. El Pla s'ha focalitzat en els onze espais següents: Parc Natural del Cap de Creus; Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà; Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Parc Natural dels Ports; Parc Natural

⁶⁶ Es defineix com “el mecanisme voluntari pel qual una organització pot descomptar del seu inventari una quantitat determinada de tones que s'han evitat gràcies a la implementació d'un projecte en una altra organització”.

del Delta de l'Ebre; Parc Natural de la Serra de Montsant; Parc Natural del Cadí-Moixeró; Parc Natural de l'Alt Pirineu; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa; Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i Espais Naturals del Delta de Llobregat.